330.983
R 618 e

330.983
R618e Rivas Vicuña, Francisco.
Economía Nacional.

Max, Norberto		10-IV-53	X-X-63

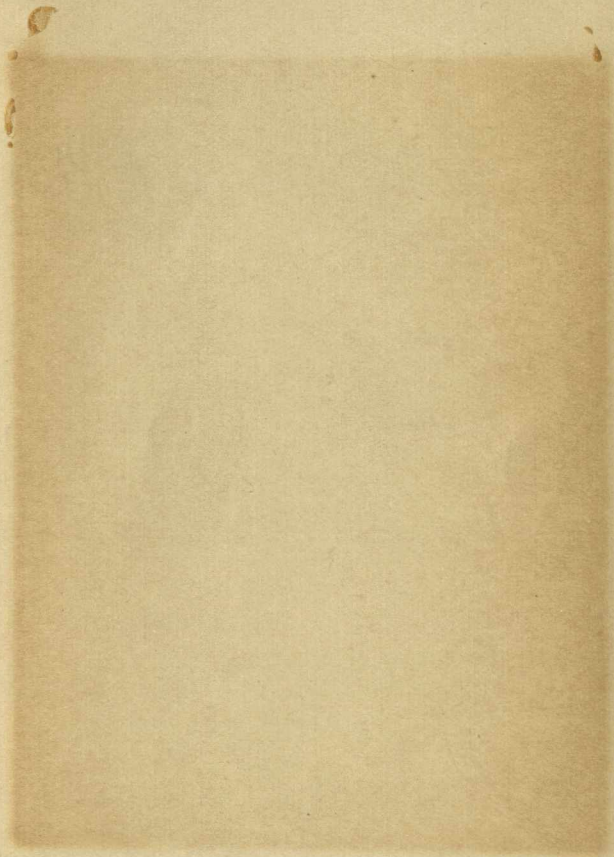
Biblioteca del Banco Central de Chile

330.983
R618e

Volúmenes de esta obra 1

Tabla en que se halla

Orden que en ella tiene 5



499
330.983
R618e

FRANCISCO RIVAS VICUÑA

BANCO CENTRAL DE CHILE
BIBLIOTECA
SANTIAGO

ECONOMÍA NACIONAL

SANTIAGO DE CHILE
IMPRENTA CHILE
Calle de Morandé, Nos. 767-769
1914

14,628

FRANCISCO RIVAS VICUÑA

BANCO CENTRAL DE CHILE
BIBLIOTECA
SANTIAGO

ECONOMÍA NACIONAL

SANTIAGO DE CHILE
IMPRENTA CHILE
Calle de Morandé, Nos. 767-769
1914

INTRODUCCION



INTRODUCCION

EL PORVENIR ECONÓMICO

El debate sobre la ley monetaria ha tenido una inesperada solución; el aplazamiento que solicitaban los espíritus tranquilos y con grandes vistas sobre el porvenir ha sido impuesto por la fuerza de los acontecimientos. La conflagración europea, conflicto previsto y cuya proximidad anunciaban las nerviosidades de las cancillerías y las intranquilidades de los mercados, ha venido a liquidar una situación que se presentaba muy oscura.

El éxito de la ley de conversión era dudoso, más aun su fracaso o los grandes sacrificios de su mantenimiento ofrecían mayores probabilidades que el desarrollo normal de las operaciones ideadas para mantener la cotización del billete. En efecto, los avances de crédito extranjero se limitaban y tendían a una pronta

liquidación, tan pronta como fuera la implantación del nuevo régimen, derivándose de aquí un primer quebrantamiento del fondo de conversión que habría soportado los pagos extraordinarios al extranjero.

Consecuencia inmediata habría sido la restricción de circulante a la cual se habría remediado con las medidas transitorias de las entradas fiscales en oro, que podían ser depositadas en la Caja de Conversión, o con las emisiones de emergencia de los bancos.

Finalmente, gracias a la autorización del circulante de emergencia, los fondos de conversión quedaban exactamente equilibrados con la suma de billetes convertibles, desapareciendo el margen prudencial, el exceso de fondos que debía dar toda solidez a la nueva institución de estabilización monetaria.

Todos estos peligros necesitaban para ser conjurados una atmósfera de tranquilidad externa, que no existía; una situación de gran prosperidad interior, que desgraciadamente no alcanzamos; una administración bien ordenada de la Hacienda Pública, que tampoco tenemos, apesar de los esfuerzos que se hacen y, finalmente, una dirección del nuevo instituto finan-

ciero formada por hombres muy superiores, de aquellos que no pueden proporcionarnos nuestras desgraciadas costumbres que todo lo subordinan al interés político.

La ley en debate era un barco, construído con todas las reglas del arte, si se quiere, pero cuyos materiales no tenían suficiente solidez y que se hacía a la mar en condiciones de borrasca y con pilotos sin gran pericia. La ley era buena, hasta donde puede caberle este calificativo a una operación que lastimaba grandes intereses en consideración al mayor bienestar común, pero ni tenía garantías suficientes de estabilidad y ni el momento era propicio.

La solidez necesaria se le habría dado fundándola en la plataforma insocavable del progreso nacional, alcanzado por la implantación de medidas que aseguren nuestro enriquecimiento mediante un bien combinado esfuerzo de las iniciativas particulares y del auxilio fiscal, en cuyo plan debiera tomarse especialmente en cuenta una inversión más provechosa de los recursos nacionales y una norma de mayor justicia en la repartición de las cargas públicas.

La oportunidad de la ley habría dependido de la implantación de esas medidas de organi-

zación económica, que el país reclama vivamente, y habríamos podido elegir el momento más adecuado, aquel en que la tendencia al alza del cambio, por efecto del bienestar interno, indicara la absoluta seguridad de la operación. La estabilización monetaria, en estas condiciones, perjudicaba el menor número de intereses y aparecía como fruto natural de la actividad económica del país, teniendo todas las seguridades de mantenimiento que tienen los seres normalmente desarrollados y de que carecen las creaciones artificiales.

La República Argentina y el Brasil acometieron en una atmósfera de bienestar sus operaciones de fijeza monetaria, y el primero de estos países le dió el carácter de un simple tope al alza del cambio cuya progresión ascendente era una verdadera amenaza de ruina para los productores. Nuestra ley contemplaba, a la inversa, un tope a la baja como medida definitiva implantada en una época de manifiesta crisis interna y de intranquilidades externas. En estas condiciones, eran de prever las dificultades de nuestra Caja de Conversión que no podía contar con el auxilio del país sino con sus propios recursos.

¡No hay mal que por bien no venga! La formidable guerra europea ha venido a alumbrar con el fuego de sus cañones el horizonte económico y nuestros dirigentes, reconociendo los peligros, han resuelto estudiar con mayor calma las leyes fundamentales del progreso nacional.

Un punto, especialmente, ha sido evidenciado por los recientes acontecimientos: la falta completa de nuestra independencia económica. Dolorosa es la confesión; pero es preciso tener la valentía de hacerla: el país descansa, financieramente, sobre la industria salitrera y está de tal modo ligado a ella que los fracasos comerciales o industriales del nitrato de soda afectan vitalmente a Chile.

La paralización del mercado por un conflicto armado entre las naciones consumidoras puede llegar a limitaciones de nuestro presupuesto que afectarían profundamente a un país que cuenta con esa exportación para el servicio de su deuda y para los gastos de su defensa. Los quebrantos del consumo de nuestro salitre, por los crecientes avances de los similares sintéticos o simplemente de fabricación química, son un peligro permanente que está socavando el

cimiento mismo de nuestra potencialidad económica.

Circunstancias son estas que nos obligan a considerar como simplemente eventuales las entradas del salitre, a no ver en ellas otra cosa que un *stock* de riqueza, un capital limitado que debemos invertir en forma que nos procure directa o indirectamente las riquezas estables que formarán la futura base de nuestro sistema rentístico.

La situación actual del salitre es la siguiente: su costo en la cancha de las oficinas es de unos 30 peniques, como término medio, y sus gastos de flete y carguío hasta la nave de unos 12 peniques y de 28 peniques el derecho de exportación. Sea un total de 70 peniques. Si el salitrero se contenta con 14 peniques para remuneración de su capital y amortización de sus terrenos, la industria estaría en buenas condiciones, simplemente buenas, hasta un precio de 84 peniques o sea 7 chelines.

Si tomamos en cuenta que el valor del terreno es de unos 4 peniques por quintal, el costo sería de 74 peniques, cotización a la cual desaparece la utilidad del capital invertido en maquinaria y en movilización industrial. Ahora

bien, no es imposible que la ciencia llégue a crear un sistema que produzca el abono azoado a este precio y, en tal situación, nuestra industria madre, por decirlo así, se encontrará en absoluta derrota, salvo el caso del sacrificio fiscal, que en este caso sería la bancarrota nacional.

La prosperidad anterior del nitrato ha detenido los perfeccionamientos de la industria que soporta el doble gravamen del impuesto de exportación y del recargo aduanero de los productos que consume; la situación de hoy impondrá los mejoramientos técnicos, en los cuales es difícil que se pueda sobrepasar una economía de 7 a 8 peniques sobre el costo actual, en las condiciones del salario que exigen las peculiaridades de la vida en la pampa. Para llegar a reducciones en el costo que permitan conservar la utilidad del salitrero y la contribución fiscal, es preciso combinar los perfeccionamientos de la industria y el abaratamiento de la vida en la pampa. Lo primero, será la obra lenta del estudio y del ensayo de los procedimientos adecuados en cuyas iniciativas deben cooperar el Estado y los salitreros; lo segundo, pueden ser el resultado

inmediato de las franquicias aduaneras acordadas a nuestras provincias del norte.

Nuestro programa de Política Salitrera tiene así un primer punto de inmediata aplicación: la declaración de puertos francos acordada a los de Tacna, Tarapacá y Antofagasta. El Estado dejará de percibir talvez 5 o 6 millones por derechos de importación; pero, en cambio, estabiliza las considerables rentas del salitre. No se diga que las franquicias del Norte estimularían el contrabando del Sur, pues basta considerar que el tránsito de mercaderías sólo puede hacerse por mar, donde la fiscalización aduanera existe, y dado el caso de practicarse por el longitudinal, sería fácil establecer una aduana en los linderos del desierto.

El segundo punto sería la cooperación del Estado para el ensayo de los procedimientos de elaboración que se propongan. Bastaría el nombramiento de una delegación de dos o tres ingenieros competentes que examinen los sistemas que se propongan y que, dictaminando sobre ellos, acuerde una suma determinada para invertir en su estudio. Entre las numerosas patentes acordadas hay muchas que tienen algún interés cuyo estudio práctico es rápido

y poco costoso; la combinación de varias de ellas podría dar talvez un buen sistema general. Todo esto podría estudiarlo la delegación que indicamos y llegar a reunir lo bueno de cada inventor hasta formar la combinación industrial más favorable, dado caso que no hubiera una patente única que ofreciera el mejor sistema.

Salvada de esta manera la industria del nitrato, por la doble combinación de las franquicias aduaneras y del uso de procedimientos racionales de elaboración, podríamos mirar con tranquilidad al porvenir; pero siempre teniendo en especial consideración que las entradas del salitre son capitales por invertir y no rentas para gastar. De todos modos, estas medidas nos permitirán acometer, con reposo en el estudio y con tranquilidad en la aplicación, el cambio de régimen tributario que nos asegure nuestra independencia económica.

En los momentos actuales, de espectativas y de ansiedades, debemos tener la tranquilidad suficiente para estudiar las leyes fundamentales de la economía nacional; impulsemos nuestra riqueza agrícola por la implantación de la ley de riego; ordenemos nuestros ferrocarriles y

nuestro programa de obras públicas; despachemos la ley del catastro que será la base del régimen de contribuciones directas; liberemos las aduanas del desierto y estudiemos con rapidez la técnica salitrera y, cuando termine el conflicto europeo, cuando la paz se asiente sobre base duradera, estaremos bien preparados para acometer la empresa de nuestra estabilidad monetaria.

Tenemos confianza en el empuje de nuestros hombres y conocemos las riquezas de nuestro territorio y solo pedimos un poco de orden, un poco de buena voluntad para que los chilenos puedan consagrarse a explotar eficazmente los grandes recursos nacionales que hasta hoy nos han servido de base más especulativa que productiva. El porvenir económico está, así, en una buena organización de trabajo nacional que descanse sobre el estímulo a la producción, por medio de las obras de progreso general confiadas al presupuesto de la Nación, y sobre una equitativa distribución de las cargas públicas que, pesando más directamente sobre la riqueza, libere al trabajo fecundador por excelencia de la riqueza misma.

En este libro, que se publica por la benévola petición de algunos amigos, hemos reunido todos los artículos que, en compañía de los redactores de *La Unión*, dedicamos al estudio de la ley monetaria y de sus naturales corolarios. Al entregarlos al público deseamos tan solo satisfacer esos deseos y dejar deslindadas las responsabilidades que en tan grave materia caben a la prensa como intérprete de la opinión y, por ende, como orientadora de las conveniencias nacionales.

Mi Ruca, a 5 de Agosto de 1914.

Francisco Rivas Vicuña.

Todos los hechos anunciados en este libro se han realizado; todos los descalabros previstos han venido; ninguna de las medidas aconsejadas se han tomado. — ¡Pobre patria mía, presa de las negligencias y ambiciones de sus parlamentarios! A bordo del "Majestic" — en viaje de Washington a Roma — Octubre 19 de 1923 — 9 años después de lo escrito en estas páginas!

Francisco Rivas Vicuña.

PROGRAMA ECONÓMICO

Editoriales de "LA UNIÓN"



PROGRAMA ECONÓMICO

Editoriales de "LA UNIÓN"



PROGRAMA ECONÓMICO

Editoriales de "LA UNIÓN"

LA LEY MONETARIA Y EL PAIS

I

La condición de confianza

Desde que el Senado de la República aprobó el proyecto monetario, la opinión se ha agitado vivamente alrededor de todos los problemas encerrados en esta ley que, en pocos días más, recibirá su sanción definitiva en la Cámara de diputados. Todos los círculos ligados a la actividad económica del país han manifestado sus opiniones; desde los hombres que viven de salarios hastas los gestores de los grandes negocios, desde los industriales y agricultores hasta los banqueros; el deudor y el acreedor, el trabajo y el capital, todos los intereses han tomado parte en este torneo decisivo que tiene todas las solemnidades y todas las

angustiosas expectativas de una resolución que, con justísima razón, estimamos definitiva para el porvenir.

Jamás se ha presentado una cuestión más difícil que la actual; la independencia nacional y las luchas posteriores para asegurar la autonomía soberana del país fueron problemas simples cuya solución era única y estaba confiada a la pujanza del patriotismo; la dificultad del momento no es en el fondo sino nuestra independencia económica y la autonomía en el desarrollo de nuestras riquezas, negocio complejo cuya acertada solución exige no sólo todos los sacrificios de patriotismo, sino el discretísimo análisis de intereses contrapuestos que debemos colocar en perfecto equilibrio a fin de armonizar su acción para el mayor bien común, sin que se produzcan desigualdades profundamente perturbadoras de nuestra marcha de progreso.

Después de nuestra organización nacional, después de haber cimentado nuestro régimen administrativo, buscamos la característica definitiva de nuestra prosperidad en las estabilidades económicas que hasta hoy no hemos podido alcanzar por causas de todos conocidas y que se desprenden de nuestros negocios internacionales y de los intereses de ciertos círculos, siendo las primeras mucho menos perturbadoras que las segundas, que han hecho oscilar

constantemente al país entre dos extremos opuestos, sin que hayamos logrado el equilibrio exigido para la marcha normalmente progresiva de nuestro enriquecimiento. Hoy se trata de implantar medidas fundamentales, cuyo éxito compromete las reservas de la nación y cuyas aplicaciones van a tener todos los caracteres de una sentencia definitiva en esta larga controversia sobre el valor de la moneda; la solución que se adopte debe ser tal, que no exponga al menor riesgo el tesoro metálico del país y que no importe, al fijar la futura medida de las transacciones, un acto arbitrario como el del conquistador que corta el nudo gordiano, sino una medida de justicia, tan estricta como sea posible dentro de la condición primordial que exige el mantenimiento de un *stock* de oro.

Tal es el doble aspecto del problema que nos proponemos estudiar en estas notas: por una parte, mantener la fijeza de un valor monetario junto con la conservación y el incremento de nuestro encaje metálico, y, por otro lado, la adopción de un tipo de cambio que satisfaga la condición anterior y armonice todas las exigencias, debiendo primar la primera característica sobre la segunda, porque siendo ambas de gran importancia, es más general aquella que esta. En efecto, en este intrincado laberinto de intereses contrapuestos creados por nuestros errores económicos, todos tenemos

nuestras responsabilidades, y, en definitiva, aparece como norma única de equidad dar solamente aquello que se puede prometer con la seguridad de cumplir; lo contrario, es decir, valorizar la moneda más allá de los límites posibles, sería tan desastroso, como injusto sería canjearla a un tipo inferior a la potencialidad de la economía nacional.

La moneda es un instrumento de liquidaciones que sólo interviene en su materialidad en las pequeñas transacciones y que figura como un simple factor numérico en los grandes negocios y especialmente en el comercio internacional; de aquí deriva la necesidad de su fijeza, sin la cual sufrirán constantes alteraciones los lazos mercantiles que ligan a los hombres y a los pueblos. La absoluta confianza en esta fijeza debe ser, por consiguiente, la primera condición de ese delicadísimo instrumento, tanto más sensible cuanto su valor no es real, sino simplemente representativo, como sucederá entre nosotros.

De otro punto de vista, la moneda es un capital circulante cuyo valor guarda estrecha relación con el poder de utilización de los capitales fijos; un país sin minas que produzcan, sin campos que se cultiven o se pueblen de ganados, o, aun siendo pobre y estéril, sin fronteras que se abran al comercio de tránsito, jamás podrá tener en su desarrollo una moneda sana

de valor estable. La abundancia de capitales circulantes efectivos sólo podrá sobrevenir si abrimos las fuentes de producción nacional. He aquí un principio económico que, junto con fijar un rumbo inalterable para el estudio de los grandes problemas nacionales, nos da inmediatamente la norma que necesitamos para el examen de esta cuestión previa, que es la confianza en la fijeza del valor de la moneda.

Esta condición de confianza sólo puede existir si todos los hombres interesados en nuestra economía abrigan las seguridades de que se realice el principio que acabamos de señalar; los propios productores nacionales desconfiarán de toda medida que no lleve aparejado un programa de progreso material que les permita desarrollar sus actividades, y el comercio extranjero, por su parte, se inspirará ciertamente en igual criterio. Así, la fijeza del cambio descansa en un bien combinado programa de medidas que estimulen la producción nacional, y es fuera de duda que la falta de este plan hará peligrar el cumplimiento de toda medida que tienda a valorizar la moneda por el simple juego de resortes financieros que no podrán resistir si no se apoyan sólidamente en la riqueza nacional.

El cumplimiento de semejante programa exige crecidos desembolsos, a los cuales deberá cooperar el Estado en forma decisiva, creán-

dose todos los recursos necesarios. La política del momento no debe, por lo tanto, ser de restricciones en los gastos; debe de ser de gran amplitud para el desarrollo de todas las obras reproductivas; en una palabra, necesitamos un gran presupuesto estricta y severamente ordenado y que consulte el máximo de inversiones en obras necesarias para las explotaciones de nuestras riquezas, principalmente caminos, ferrocarriles y puertos. Disminuyamos los gastos inútiles, destinemos esas economías al programa de trabajos y aumentemos las entradas para realizar ese programa con toda la rapidez que exigen las inquietudes del porvenir.

Varias veces hemos recordado en estas columnas que los derechos de exportación del salitre compensan el servicio de nuestra deuda y las atenciones de la defensa nacional, y hoy debemos manifestar que, apesar de los cálculos optimistas, esa fuente de entradas no es de duración tal que pueda considerarse indefinida.

Si a esto se agregan los temores del salitre artificial, cuyos progresos han irradiado desde Noruega hasta España, que hoy prepara en Lérida grandes instalaciones que le suministrarán una buena proporción del consumo actual de nuestro abono, tendremos que plantear en los estrechos límites de un período limitado la realización de todos los adelantos que requiere

el país para el desarrollo de su riqueza estable y duradera.

No debemos disimular la verdad: el país requiere con urgencia las obras que deben valorizar sus industrias extractivas de carácter permanente y la más elemental prudencia aconseja destinar a ellas una gruesa cuota de la entrada del salitre, completándola con los recursos que debe proporcionar la propia riqueza nacional. Del conjunto de estas medidas resultará la confianza de los chilenos en el desarrollo del país y, sobre todo, la tranquilidad del extranjero consciente de nuestra preparación para reemplazar, en cualquier momento, el inestable sistema actual de recursos fiscales por un régimen normal de tributos que gravarán ligeramente a una riqueza creada gracias al aprovechamiento ordenado y metódico de un don de la naturaleza.

Sin estas condiciones no habrá confianza en el país; si no mantenemos la constancia de nuestro capital por medio de su inversión atinada y si no lo acrecentamos por medio del trabajo, serán vanas promesas las leyes de conversión. La opinión se ha manifestado enérgica y vigorosa en estas orientaciones y como creemos que ella se reflejará en las esferas legislativas, creemos también posible la conversión y la exigimos dentro de la extructura general del proyecto del Honorable Senado.

Establecido el conjunto de medidas que ha-

rán eficaz la ley que fije el valor de la moneda, cabe observar que, por lo menos durante algunos años, las inversiones del Fisco y las de los particulares nos mantendrán en la categoría de país deudor, de la cual debemos tratar de salir en un período calculado sobre el mínimo de duración de las pampas salitreras. Esta circunstancia fija, en términos generales, el valor que debemos dar a nuestra moneda: debe ser suficientemente bajo para que dentro de las oscilaciones de la balanza internacional propia de este período de inversiones no se produzcan restricciones de circulante provocadoras de emisiones de emergencia, insuficientemente garantidas, que puedan hacernos caer de nuevo en el papel inconvertible.

No es tarea nuestra el precisar ese valor; nos corresponde tan sólo indicar sus condiciones; como intérprete de la opinión, nada más puede exigirse a la prensa, que, en el caso extremo, debe limitarse a indicar los límites de oscilación del tipo de cambio que inspire confianza al país.

En esto nos ocuparemos en un próximo artículo, analizando las causas fundamentales de la desvalorización de nuestro billete y tomando especial nota de aquellos fenómenos cuya permanencia afecta vitalmente a nuestra moneda, hasta fijarle un máximo de valorización del cual no podrá pasar sin grandes dificultades.

II

Los tipos de cambio

En la hora solemne de una resolución definitiva sobre nuestro problema monetario, se imponen a la conciencia los más excrupulosos estudios de la situación y los análisis más profundos, las más intensas reflexiones sobre las enseñanzas del pasado que dictarán las reglas del porvenir.

Este examen debe comprender desde los pequeños detalles de nuestra modalidad económica hasta los grandes factores que han influenciado nuestro sistema y, una vez formado el conjunto de estas fuerzas grandes y pequeñas, se impone su clasificación en la doble categoría de fenómenos accidentales y permanentes. Los primeros, simples agentes de perturbación momentánea, deben ser eliminados del estudio general, pues lo complicarían inútilmente; su examen no tiene para el objeto principal más importancia que la que se puede atribuir a un bólido que cruce la órbita del planeta. Como el astrónomo desprecia estos términos en sus graves cálculos sobre el sistema del mundo, así nosotros no hacemos sino mencionarlos para anotar alguna enseñanza en

los detalles y nos concretamos a las grandes masas y a las energías de primer orden, que son las verdaderas directrices de los movimientos que deseamos prever.

Anotaremos, así, con la crudeza matemática de su simple comprobación, los fenómenos que han determinado los grandes abatimientos del valor de nuestra moneda. Sin el reposo suficiente, los directores del país acometieron la empresa de la conversión metálica cuando pasábamos por el período álgido de la liquidación de nuestra vieja controversia con la Argentina; la preparacion para la guerra absorbía todas las fuerzas de la Nación y el oro huyó temeroso del estampido de los cañones. En 1898 se derrumbó el edificio monetario construido sobre base deleznable y nos vimos obligados a reemplazar por billetes el oro que sólo se asienta en las aguas tranquilas de la paz.

La administración de aquellos años cimentó nuestros arreglos internacionales, ligeramente perturbados por pequeñas incidencias posteriores, a las cuales sus autores atribuyeron importancia superior a la realidad, y por fin, en 1902, se consolidaba la paz definitiva. La moneda experimentó los vaivenes de esas pequeñas agitaciones y se fijó en alturas superiores a 16 peniques; la diferencia representaba la pérdida nacional en ese período de incertidumbres.

El quebrantamiento económico originado por esas causas provocó una emisión de treinta millones que se invirtió en bonos hipotecarios; fué un poderoso estímulo para la agricultura cuyos esfuerzos mantuvieron la cotización del billete. El juego regular de la circulación trajo los nuevos recursos a las cajas de los bancos y éstos, con una ligereza de la cual hasta hoy sufren las consecuencias, fomentaron la especulación y las empresas locas que derramaron millones en frigoríficos abandonados por los valles patagónicos, en oficinas salitreras construídas en pampas estériles y en negocios bolivianos sin más base que la ilusión de la distancia. La moneda, signo último de la liquidación, tradujo la pérdida, abatiéndose hasta los 14 peniques en Agosto de 1906, fecha desgraciada que nos recuerda el cataclismo que asoló al país.

Hubimos de hacer desembolsos extraordinarios para reedificar nuestras ciudades; era una nueva pérdida que se agregaba a la liquidación del pleito de límites, a las locuras del crédito sin disciplina y la moneda se abatió hasta los 8 peniques. El país salió airoso de este quebranto y en el curso de 1908 entonó sus billetes hasta 12½ peniques. Todos estos fenómenos de efectos permanentes importaban una pérdida de 5½ peniques en nuestro cambio. Habría sido el momento de organizar el país,

de prepararlo para su conversión a 12 y de resistir la tempestad que se veía despuntar en los mercados europeos y norte-americanos.

No criticamos; citamos hechos solamente, y dejamos constancia de que aumentamos nuestro malestar, ayudando a remediar la crisis europea de sobre producción, con inversiones exageradas en armamentos, en gran parte inadecuados, y en obras de dudosa importancia actual. Salvada esta crisis que bajó la cotización del billete hasta $10\frac{1}{8}$ peniques, volvió el país a recuperar su cotización vecina a 12 peniques.

Hasta aquí las causas permanentes, cuya influencia ya pasó y que nos han fijado como energía económica esa medida de 12 peniques, a la cual puede volver el país por sus propias fuerzas.

En los años posteriores, el abatimiento se ha debido únicamente al desórden de las finanzas. No es una causa permanente, es un mal transitorio al cual se está poniendo remedio gracias a la viva presión de la opinión pública. En estos años desgraciados, el tipo medio del billete ha sido superior a $10\frac{1}{2}$ peniques.

Tenemos, pues, dos factores bien precisados: las condiciones normales del país revelan la posibilidad de una vuelta al tipo de 12 peniques y el cambio medio, especialmente perturbado por la acción gubernativa, se puede

estimar en 10½ peniques. Tales son los límites en que pueda oscilar la fijación del futuro valor del billete, límites que nos propusimos determinar en nuestro artículo anterior.

El valor más alto es la interpretación de la justicia, el más bajo es el coeficiente de seguridad indispensable. Entre uno y otro, aceptamos el segundo, cuya importancia preponderante hemos establecido anteriormente, pero tratando de arbitrar medidas que compensen el sacrificio de las expectativas de quienes tienen justísimo derecho para pedir una cotización superior.

Si la conversión, o la institución que se funde para fijar el valor de la moneda, ha de tener como base un cambio inferior a 12 peniques, estimamos de toda justicia que se contemplen los intereses del gran círculo de trabajadores ligados al mejor tipo por medio de una distribución de los tributos que alivie las cargas actuales.

Llegamos así, como conclusión, después de haber establecido que la condición primordial de la ley monetaria debe ser la confianza en su éxito asegurado por un plan de conjunto, a precisar el futuro valor del billete entre 10½ y 12 d., pudiendo aceptarse el tipo bajo siempre que en ese programa financiero complementario se contemplen los intereses de quienes reclaman la conversión a 12 peniques.

En esto nos ocuparemos próximamente, al analizar el referido programa financiero.

III

Condición primordial

El análisis de las circunstancias actuales de nuestro país lo clasifica en la categoría de nación deudora, carácter que conservará durante todo el tiempo que necesite para la exploración de sus riquezas desconocidas aún, para la explotación racional de aquellas que ya estan en poder de los hombres y para el mejor aprovechamiento de las que forman nuestros recursos actuales. Movidos por estas consideraciones, nos hemos pronunciado por el tipo de conversión estable calculado con un margen suficiente para que ningún recelo del mercado internacional arrastre a la moneda misma en el pago de nuestros saldos. El olvido de esta exigencia, o el sacrificio de esta condición en aras del deseo precipitado de tener inmediatamente una moneda de mayor precio, puede hacernos perder todo el *stock* de oro pacientemente acumulado, *stock* cuya importancia a más de sus influencias económicas, tiene estrechos lazos con la defensa nacional. Perder nuestro encaje metálico tendría toda las proporciones

de un cataclismo que sepultara nuestra escuadra en el fondo de los mares.

Al sentar este principio fundamental digimos, en nuestras notas anteriores, que él debía primar sobre las razones simplemente de justicia que determinan el valor de la unidad monetaria, que debe aproximarse más al límite de seguridad que al de la conveniencia de los círculos que puedan sufrir con una depreciación de cierta importancia. Hemos precisado esos valores límites, asignado el valor de 12 peniques al cambio que pueden procurarnos los resortes naturales de nuestra actividad económica y fijando en 10 ½ peniques el tipo de absoluta seguridad, y hemos establecido que esta cotización baja, después del período de cancelación de los saldos ocasionados por la tirantez de relaciones internacionales, por la indisciplina del crédito y por el terremoto de 1906, se debe únicamente a nuestra mala dirección financiera. En efecto, los presupuestos de 1911 y 1912 se saldaron con déficits cuyo total alcanzó a cerca de 80 millones de pesos moneda corriente, que fué necesario cubrir con la venta de bonos hipotecarios, que formaban parte del fondo de conversión, y con una contribución aduanera especial que se aplicó a esas partidas hasta por la suma de cerca de catorce millones de pesos.

El año 1912, según las previsiones de nues-

tros hacendistas, debió salvarse sin déficit; sin embargo, ese ejercicio dejó un saldo en contra de cerca de 25 millones que se cubrió mediante un aporte extraordinario de un millón doscientas cincuenta mil libras esterlinas. Los hombres de experiencia en los negocios públicos han cedido sus puestos a otros menos preparados.

No es de extrañarse que, en estas condiciones, se anunciara para 1913 un presupuesto equilibrado y que, por un motivo o por otro, mal cálculo de entradas o disimulo en los gastos, el referido año cerrara con déficit considerable. La situación para 1914 no es más halagüeña y se habla de sumas que vendrán a doblar el déficit ya acumulado. No queremos apuntar cifras, pues podríamos caer en algún error que, aunque pequeño, serviría para rectificaciones; nos limitamos a comprobar la existencia de un déficit cuantioso que no podrán pagar ni en cuatro ni en cinco años las actuales fuentes de recursos extraordinarios.

Este régimen permanente de presupuestos desequilibrados, verdadero cáncer de la Hacienda Pública, ha sido el único obtáculo que ha tenido el país para mantenerse en el límite de cambio que podía naturalmente recuperar después de haber sufrido las heridas de las incertidumbres internacionales, de las locuras bursátiles y del terremoto; por esto decíamos, en

artículos anteriores, que el tipo normal correspondía a 12 peniques, medida monetaria acusada por nuestra vida económica natural, y que la depresión actual era debida, en parte, a la mala dirección de los negocios públicos. El descenso de hoy es, por lo tanto, simplemente transitorio y cesará en cuanto se proceda a la ordenación de los presupuestos dentro del doble criterio de proporcionar entradas aparejadas a las necesidades del país y de invertirlas con juicioso método y severa fiscalización.

Cualquiera que sea la causa de la postración de la moneda, lo que importaba, en primer lugar, era conocerla y remediarla, y lo que se impone, en seguida, es la verificación de su influencia inmediata sobre la operación propuesta para fijar el valor del billete. Dos observaciones principales se desprenden de este análisis: la primera se refiere a la seriedad del negocio que se inicia bajo la influencia del déficit que llamaremos flotante y la segunda a la justicia de una cotización monetaria basada sobre una perturbación accidental y que debe y puede remediarse.

Respecto a este segundo punto no vacilamos en decir que no sería justo atribuír el carácter de permanente al tipo de cambio calculado sobre las cotizaciones producidas por nuestros errores en el manejo de la Hacienda pública; hemos dicho que es prudente, que es

indispensable quedarse en el nivel más bajo posible, de modo que aseguremos la existencia de nuestro *stock* metálico, más esto no significa que aconsejemos la permanencia en esas cotizaciones que pueden mejorarse por la simple ordenación de los gastos y entradas de la Nación. Nos vemos, así, obligados a precisar nuestro pensamiento; las operaciones de las proyectadas cajas de conversión o de estabilización monetaria deben iniciarse a un tipo que sea un verdadero tope a la baja, consultando las disposiciones necesarias para que la institución misma pueda llegar hasta el cambio de 12 peniques, ciñéndose a la marcha del mercado, al progreso del país y a la implantación de correctas prácticas administrativas.

El proyecto aprobado en la Cámara Alta establece en su artículo 5.° que el Presidente de la República fijará la fecha del rescate de la emisión fiduciaria con arreglo a las leyes originales; ésta es una vana promesa de pago a 18 peniques que está reñida con las estipulaciones del artículo 6.° que establece la Caja de Conversión a 12 peniques. Debemos decir con toda franqueza que, si la primera de estas disposiciones es simplemente ideal, la segunda se nos ha presentado como un imposible. Lo único armonizable con la realidad y orientado en las reglas de justicia sería decir:

«Artículo 6.º Desde tal fecha la Caja de Conversión canjeará los billetes de las emisiones fiscales por monedas de oro a razón de 10½ peniques por peso, pudiendo hacer este pago en letras sobre Londres. La Caja de Conversión, previo aviso de seis meses, podrá establecer un tipo de canje superior, no pudiendo exceder el alza de un cuarto de penique por cada período semestral. Para los cambios superiores a 12 peniques la Caja de Conversión deberá proceder con la autorización del Presidente de la República en la forma preceptuada en el artículo 5.º».

Consultadas de esta manera las condiciones de justicia y de seguridad, queda pendiente la circunstancia principal de la seriedad del negocio a que antes hemos aludido. La operación no es posible dentro del actual sistema de déficit flotante, tanto valdría iniciar la Caja de Conversión con el enemigo a las puertas o en la certidumbre de cualquiera catástrofe. Por consiguiente, la base de esta operación, su condición primordial es la regularización del déficit actual, su consolidación definitiva y la reintegración de los fondos que han servido para cubrirlo momentáneamente. Libre así la Hacienda Pública de este pecado original y enrielada en el equilibrio de entradas suficientes y de gastos ordenados, tendrá el país seguridad de conservar el valor mínimo de su mone-

da y legítimas expectativas de un mejoramiento obtenido sin perturbaciones.

Esta cancelación del déficit no debe hacerse con recursos extraordinarios de crédito, no puede hacerse con la rapidez necesaria mediante los recargos aduaneros; ella debe buscarse en tributos de mayor rendimiento y que hagan desaparecer la carga injustificada de los derechos de aduana adicionales que están soportando los más sacrificados en el abatimiento del cambio, los que más sufren al aceptar el tipo mínimo que representa la seguridad absoluta de la operación en proyecto.

El país ofrece recursos en abundancia que permiten llenar ese programa de cancelación de los derroches fiscales sin gravar a los que soportan injustamente las cargas y sin poner tropiezos a los dueños de las riquezas nacionales, antes bien, estimulándolos al desarrollo de esos bienes que permanecen simplemente latentes y sin influencia alguna en nuestro progreso. Establecida así la necesidad absoluta, imperiosa e inmediata de saldar el déficit como medida previa, nos ocuparemos próximamente en los recursos naturales que pueden servir para esta operación.

IV

El sistema rentístico

Los países sudamericanos han debido hacer en cortísimos años el avance de civilización que las naciones europeas han realizado en largas centurias de trastornos de toda suerte, en un siglo se han precipitado sobre nuestros estadistas el problema vital de la nacionalidad misma, la cuestión orgánica de la vida constitucional, los negocios ordinarios de la vida administrativa, la demarcación de los respectivos territorios, y, en pos de estas cuestiones que han dado a cada nación una fisonomía bien definida, han debido ocuparse de la ordenación progresiva del porvenir, es decir, de la vida económica. En Brasil, como en la Argentina, países que avanzaban paralelamente en las conquistas civiles y económicas, los quebrantos de la moneda fueron reflejando los sacrificios nacionales; de igual manera, Chile ha traducido en las quiebras sucesivas de su padrón monetario los esfuerzos especiales que ha hecho para colocarse como colectividad independiente en el honroso rango que hoy se le reconoce.

La hora de la estabilidad económica ha sonado por fin, y son breves ya los días que nos

separan del ideal de tener una medida estable de los valores, anhelo que conseguiremos, según lo hemos demostrado, mediante una ley que consulte como condición de seguridad un tipo de cambio ligado al mantenimiento de nuestro encaje metálico, ley que se inspire en la condición de justicia ligada al máximo de valorización posible, ley, finalmente, basada en el saneamiento previo de la Hacienda Pública, condición de seriedad que impone como medida primordial la consolidación de los déficits acumulados, principales causas del abatimiento anormal y excesivo del billete.

Sin estas condiciones de confianza, de justicia y de seriedad, la ley de conversión, como se quiere llamar al conjunto de disposiciones que fijarán el cambio, será una medida ineficaz, más aún, una medida perjudicial.

Naturales corolarios de la legislación monetaria que esperamos deben ser las disposiciones que aseguren la confianza, la justicia y la seriedad de la operación, programa que nos proponemos analizar, dando en estos estudios el primer lugar a la cuestión de mayor entidad, a nuestro juicio, porque ella afecta a los tres factores que dejamos indicados; nos referimos a la organización de la Hacienda Pública. Sin un programa de presupuestos equilibrados que consulte la previa cancelación del déficit flotante, la operación en proyecto no será seria; sin

un presupuesto que se inspire en la preparación del país para su progreso económico, la operación no merecerá confianza de nadie, y, finalmente, sin un plan rentístico que se apoye en la equitativa distribución de las cargas públicas, la ley no será justa. La reforma del sistema rentístico es, por consiguiente, la plataforma amplia, sólida, insocavable en que debemos fundar el nuevo edificio monetario.

Un régimen tributario bien ordenado debe ser el punto de partida de esta nueva etapa de la vida del país, que entra definitivamente en las regiones del progreso incesante. Hasta hoy hemos vivido principalmente en el sistema del tributo indirecto, el menos apropiado para los pueblos jóvenes.

Las entradas actuales de la Nación sólo consultan, en el ramo de contribuciones directas, unos seis millones por derechos de timbre, patentes de seguros e impuestos bancarios, cifra que es menos del 2 por ciento del ingreso total.

La base tributaria de la contribución directa está ampliamente consultada en nuestras leyes, de la cual la Comuna autónoma es honra del partido Conservador; falta sólo aplicar correctamente tan sabias y previsoras disposiciones. En más de una ocasión hemos dicho que se pueden estimar en unos doce mil millones de pesos de 18 peniques los haberes muebles

o inmuebles que pueden pagar la contribución del 3 por mil; esta cifra nos da una renta posible de 36 millones en moneda de oro. Por consiguiente, si el Fisco cobrara esta contribución y acordara a los municipios la suma que hasta hoy han percibido, descuidando los derechos que la ley les otorgó, o sea unos 5 millones de pesos oro, tendríamos un sobrante en arcas fiscales de 31 millones, es decir, una suma suficiente para cancelar en un año el déficit que hemos llamado flotante.

La valorización anterior comprende las propiedades urbanas y rurales con sus dotaciones de diverso orden y ciertos valores mobiliarios, como bonos, acciones de sociedades industriales y otras, previa deducción del valor de la tierra que ellos pueden representar. No figuran en la estimación anterior las riquezas mineras, porque no tenemos datos suficientes para hacer cualquier cálculo satisfactorio. Esta porción de la riqueza, que proviene de la apropiación del bien común, es considerable, y, sin embargo, excepción hecha de los yacimientos salitreros, en nada contribuye la minería propiamente tal al sostenimiento de los servicios públicos que ella misma aprovecha.

Existen en el país cerca de 320,000 hectáreas de yacimientos mineros denunciados, que pagan poco más de quinientos mil pesos en patentes municipales. Muchos de estos pedi-

mentos son simples apropiaciones para constituír grupos de minas que los nacionales venden a los extranjeros sin que jamás hayan tenido el propósito de trabajar sus vetas, sino el de buscar un inglés, en otros tiempos, un francés en ciertas ocasiones, y hoy que la moda es yankee, un ciudadano norteamericano a quien venderle un título bien o mal constituído. Esta circunstancia está demostrando la conveniencia de una reforma legislativa que consulte la explotación eficaz de las minas: no hacemos sino pasar sobre este punto, importante en sí, pero simplemente incidental para el objeto que estamos persiguiendo.

La mina en explotación, para el propósito de la contribución de haberes, es un valor difícil de estimar; en efecto, si se trata de un yacimiento rico, la inconstancia de las altas leyes puede ser causa de un grave error, si, por el contrario, el venero es pobre y abundante, puede preponderar la importancia del factor industrial y la contribución impuesta a la propiedad misma resultaría exagerada. El tributo de esta clase de riquezas debe, a nuestro juicio, cobrarse sobre el producto mismo, en el momento de su entrega al mercado, lo que equivale entre nosotros a cobrar un derecho de exportación.

Fijar la cuantía de este impuesto representativo de la contribución de haberes sobre las

minas, sería tarea larga e impropia de estas notas, en que nos limitaremos a decir que ella debe representar una parte de las utilidades atribuíbles al yacimiento mismo, digamos un 10 por ciento de esa ganancia. Así, en la hipótesis que la utilidad de una mina sea el 20 por ciento del valor del producto, el impuesto sería un 2 por ciento de esta cotización.

La exportación de sustancias metálicas en 1912 fué de cerca de 37 millones de pesos de 18 peniques, lo que representaría unos 740 mil pesos de renta fiscal. Esta suma es mínima en comparación de la que pronto alcanzaremos por exportación de fierro, que se estima en un millón y medio de toneladas por año, con un valor de 30 millones oro. Debemos agregar los incrementos en la exportación de cobre que llegarán a 60 millones de pesos tan pronto como se terminen los grandes establecimientos de Chuquicamata y otros. Tenemos así la justificada expectativa de llegar a una exportación minera y metalúrgica de cerca de 150 millones anuales que producirá una renta, sólo con un 2 por ciento sobre el valor, de cuatro y medio millones de pesos de 18 peniques.

Particular mención merece la industria del borax, que cubre cerca de la mitad de los yacimientos denunciados y que sólo paga unos $ 30,000 en patentes municipales. Las utilidades de esta industria, atribuíbles al yacimien-

to mismo, no son inferiores a cinco o seis libras esterlinas por tonelada, lo que autorizaría un cobro de $ 8 oro por tonelada, gravamen que produciría más de $ 300,000 anuales.

Las módicas contribuciones de exportación minera, simplemente representativas del valor de la propiedad, sin que lleguen a importar un tributo al trabajo, podrían producir unos 5 millones anuales.

En resumen, las contribuciones de haberes nos darían según estos datos:

Propiedades urbanas, rurales y otros valores.....	$ 36.000,000
Propiedades mineras, que pagarían en la forma de impuesto de exportación.....	5.000,000
Suma.....	$ 41.000,000

Si de esta cantidad descontamos los 5 millones atribuíbles a los municipios por su recaudación actual, tendremos un saldo mínimo de 36 millones de 18 peniques, que ingresaría en arcas fiscales.

La implantación de este tributo debe correr parejas con la supresión de los recargos aduaneros ideados para saldar el déficit y que han producido unos siete millones anuales. En conclusión, una vez establecida la contribución di-

recta sobre las propiedades urbanas, agrícolas y mineras, se dispondrá de una renta fiscal de cerca de treinta millones de pesos de 18 peniques por año, suficiente para saldar el déficit flotante y para asegurar todos los recursos que requiere el ancho programa del progreso, que debe ser sólido pedestal de la ley monetaria.

Estas contribuciones directas que remedian inmediata y eficazmente la situación actual, que garantizan el éxito de las operaciones de conversión, son por otra parte, interpretaciones exactas de la ley de justicia, y, sobre todas estas ventajas, ofrecen el incalculable beneficio de enfrenar para siempre los derroches fiscales. Bastará que el Congreso vote la ley de gastos y en seguida regule la tasa de la contribución directa en proporción a esos gastos, para que se produzca la armonía entre el Gobierno y el Parlamento.

El sistema rentístico basado en la contribución directa aparece así como corolario indispensable de la ley monetaria, pues la asegura en el presente y la garantiza para el porvenir. Este régimen permitirá acometer todo el programa de progreso que estudiaremos en nuestras próximas notas.

V

El riego del territorio

Gravísimas son las responsabilidades que tienen sobre sí todos los hombres llamados a tener una influencia cualquiera sobre la cuestión formidable de la estabilidad monetaria; estas responsabilidades afectan tanto a los representantes del pueblo, que tienen pendientes de sus votos las resoluciones definitivas, como a los intérpretes de la opinión que deben buscar las resultantes de intereses contradictorios, marcar las orientaciones generales y puntualizar las ideas directrices que contemplen el mayor bien común.

Conscientes de estos deberes hemos analizado el problema de la estabilidad monetaria en notas anteriores, llegando a establecer que este progreso económico sólo tendrá los caracteres de permanente y definitivo, si podemos fundarlo en el desarrollo mismo del país. Esto no significa que hayamos indicado como medida previa este desenvolvimiento de nuestras energías productoras; estimamos tan sólo que la acumulación de riquezas es la garantía de estabilidad en el valor de la moneda y condición indispensable para sacarla de sus postraciones actuales.

El régimen estable, o mejor dicho, el sistema de mejoramiento progresivo puede y debe implantarse desde luego, amoldado a la situación en que se inicia y completado por el plan de progreso nacional, cuyo ascenso será el que siga nuestro billete hasta lograr su valorización normal.

El examen del punto de partida, de la situación de origen, por decirlo así, nos ha demostrado la conveniencia de adoptar un tipo del canje del billete que no comprometa nuestros depósitos de oro y nos ha revelado que no debemos iniciar reforma alguna sin la previa cancelación del déficit flotante, provocado por nuestras malas prácticas administrativas. Con el referido criterio de valorización, y mediante la medida previa de sanear la Hacienda Pública, puede acometerse la empresa que debe descansar en un sistema rentístico capaz de sostener el programa de enriquecimiento y que lleve en sí mismo las seguridades de su acertada inversión; hemos indicado como base la contribución directa a la riqueza y hemos señalado los recursos que puede procurar este tributo, apuntando la cifra de treinta millones de 18 peniques como valor del aumento que él provocará en los ingresos fiscales.

Esta crecida suma permitirá la constitución definitiva de nuestros organismos productores y se deberá destinar preferentemente al fomen-

to de la agricultura cuya prosperidad actual se debe más al precio elevado que a la producción abundante. En los cinco millones de hectáreas de terrenos planos que forman la región agrícola del país sólo se cultivan un millón y medio de hectáreas, aprovechándose además unos dos y medio millones de praderas naturales; en esta extensión inmensa sólo se riegan 1.220,000 hectáreas que soportan la mayor parte de la producción agrícola que se hace insuficiente, como lo comprueban las importaciones que aumentan año por año y el alza incesante de los precios.

Aunque estas observaciones bastan para probar nuestra aseveración, daremos algunos datos que la impongan con caracteres de inamovible. La producción agrícola puede estimarse como sigue:

		oro de 18 d
Cereales.....		70.000.000
Chacarería.....		35.000.000
Viñedos y agricultura.	$	30.000.000
Ganadería.....		80.000.000
Suma: oro de 18 d	$	215.000.000

Las imperfecciones de la estadística debida a la falta de cumplimiento de la ley, nos auto-

riza para elevar esta suma a 250 millones de pesos de 18 peniques. Tal es la cifra de nuestra producción agrícola y ganadera que se distribuye como sigue:

	oro de 18 d
Exportación.....	$ 40.000.000
Comercio con las provincias salitrales....	150.000.000
Consumo interno.....	60.000.000
Suma: oro de 18 d	$ 250.000.000

El pequeño saldo que resulta para el consumo de la propia región productora da todo el relieve que merece a la característica que estamos demostrando: la agricultura actual es impotente para alimentar el país y la insuficiencia de su producción, siendo una carga pesada para el consumidor, no puede constituír una situación ventajosa para los agricultores.

Se impone así con caracteres de urgencia auxiliar a esta fuente de riqueza permanente que es el verdadero porvenir nacional. La primera obra de progreso que debemos emprender será, por lo tanto, el riego general del territorio. Hemos dicho que hay 1.220.000 hectáreas regadas; pues los terrenos susceptibles de riego cubren otro tanto, lo que nos

permite decir que la empresa de regar el territorio doblará nuestra producción agrícola actual. Si hoy producimos 250 millones de pesos de 18 peniques, una vez realizada esa empresa podremos producir 250 millones para la exportación; he ahí una cifra que llega a valores comparables con los de la producción salitrera.

Convertir en terreno de riego nuestros rulos sedientos, que ven correr inútiles las aguas a perderse en el océano, equivale a la absoluta confianza para el porvenir, ya que, ante nuestras existencias agrícolas, no parece como indispensable nuestra riqueza salitral y el progreso agrario importa fundar nuestro valor monetario en un cimiento tan firme como la tierra misma.

Las utilidades de la industria salitrera que permanecen en el país, sin contar la incorporación agrícola que ya hemos analizado, serán unos 15 millones de pesos oro que representan los intereses de los capitalistas chilenos; esta cifra es mínima comparada con las utilidades de la agricultura. Ese millón doscientas mil hectáreas producirán utilidades superiores a 120 millones oro, suma que perteneciendo por entero a los nacionales, es un factor definitivo de nuestro equilibrio económico.

El riego de toda esa extensión creará una riqueza superior a 3,000 millones de pesos oro

que podrán proporcionar unos diez millones de tributo; si agregamos a esta cifra el ingreso anual que puede producir el desarrollo del comercio, llegaremos a prever en el progreso de nuestra actividad agrícola una fuente de recursos fiscales que compense la pérdida de la entrada salitrera remota y eventual, si se quiere, pero posible.

El riego del territorio aparece, así, como una de las condiciones de éxito de nuestra estabilidad monetaria y debemos dictar junto con la ley en debate la que autorice la contratación de estas obras. No deseamos que esto sea una empresa fiscal; queremos tan sólo que el Estado la fomente, la dirija y la estimule.

A nuestro juicio, bastaría que el Estado garantizara un buen interés sobre los bonos que se emitieran para obtener los capitales necesarios. El total de gasto no pasará, según nuestros datos, de ochenta millones de pesos moneda corriente, sobre los cuales una garantía, hasta de 6%, no importaría un gran desembolso durante los períodos de construcción, desembolso que sería nulo una vez aprovechadas las obras.

Y si el desembolso llegara a ser efectivo estaría compensado con la contribución directa que hemos indicado como base del sistema rentístico y como fuente de recursos para el progreso nacional.

Esperamos que la ley de riego del territorio agrícola en la forma simple de una garantía que estimule la acción privada, sea una de las medidas que se dicten para afianzar la estabilidad monetaria. Los datos que acabamos de indicar tienen para nosotros como conclusión natural la urgencia de una ley cuya acción aparece como natural corolario de la valorización de la moneda.

Fomentada en su fuente la producción agrícola, deberemos ocuparnos de las facilidades de otro orden que ella requiere, circunstancia que nos lleva a tratar del programa de obras públicas, lo que haremos en nuestras próximas notas.

VI

El programa de Obras Públicas

La estabilidad monetaria será la resultante de todas las fuerzas económicas de la Nación, siempre que ellas tengan como objetivo ese anhelo que es la clave de los progresos materiales. Esa dirección común hacia un fin definido exige, desde luego, ciertos sacrificios iniciales que son la garantía del éxito: nos referimos a la valorización del billete armonizada con la seguridad de las reservas metálicas.

Los Poderes Públicos deberán corresponder a este positivo sacrificio de la colectividad consagrándose seria y eficazmente a la tarea de equilibrar los presupuestos, sin olvidar que el programa nacional se presenta con todas las exigencias de un desarrollo rápido. El equilibrio de gastos y la exigencia del fomento de nuestra producción imponen la reforma del sistema rentístico, teniendo como propósito final la recaudación de un tributo suficiente en su cuantía y justiciero en su distribución.

La acción particular deberá completar el común sacrificio y las labores del Gobierno, consagrándose efectivamente al trabajo y, en particular, al desarrollo de nuestras riquezas agrícolas, factor de tal importancia que basta por sí sólo para garantizar el porvenir nacional. Ya hemos demostrado, en el curso de este análisis, que, junto con la revisión del régimen tributario, el riego del territorio aparece como base fundamental del acierto en las reformas que afectan a nuestra circulación monetaria.

La realización de este programa de conjunto, que será ciertamente un hecho ya que está vigorosamente impulsado por el país entero, exige una preparación adecuada de ciertos instrumentos industriales de especial importancia, como son los elementos de transporte y las facilidades de comunicación en general.

Las obras públicas de esta naturaleza, que constituyen por sí mismas el más eficaz sistema de protección industrial, simultáneamente con el riego del territorio, deben ser nuestra preocupación preferente. Dentro de este programa cabe hacer una clasificación en dos grandes categorías: obras de grande interés nacional y construcciones de interés local.

Las primeras son las grandes arterias ferroviarias, el conjunto de la línea central, de sus ramales a los grandes puertos marítimos y de sus prolongaciones hacia los boquetes andinos en busca del empalme con las líneas de ultracordillera.

Las segundas son los ferrocarriles locales, los que completan en el territorio la zona de atracción de las vías de primer orden, y la construcción de las obras marítimas en los puertos secundarios, verdaderos auxiliares de los grandes puertos de concentración.

Clasificadas de este modo las obras públicas, quedan fijadas las iniciativas de los particulares y las del Gobierno. A los primeros corresponderá la construcción de toda obra de interés local, debiendo ser ayudados en esta empresa por el Fisco, interesado en su éxito por el doble capítulo del desarrollo de las riquezas, base definitiva de su renta, y por la explotación acertada de las grandes obras que le pertenecen.

El auxilio fiscal deberá consistir en la ordenación general de ciertas medidas legales, en la exención de tributos aduaneros para los materiales de construcción y en el otorgamiento de ciertas garantías de interés. Esto basta, a nuestro juicio, para cruzar el país de ferrocarriles económicos y para poblar nuestra costa con muelles y malecones que operen sobre pequeñas porciones territoriales, acarreando las producciones a los grandes puertos distribuidores de las exportaciones e importaciones y del cabotaje que llamaremos inter-regional.

El Estado, por su parte, deberá terminar los ramales a la costa que reclama el longitudinal en Iquique, en Antofagasta, en una nueva línea a Valparaíso por la Dormida y continuar las líneas de atracción andina, como los ferrocarriles de Copiapó, de Curicó a los Queñes, de Curacautín a Lonquimay, y de Osorno a Puyehue. Todo este programa importa la construcción de una red de mil kilómetros talvez, cuyo costo, incluyendo equipo y capital de explotación, será de unos ocho millones de libras esterlinas.

La construcción de estos ferrocarriles debe completarse con el mejoramiento de arterias fluviales, tan importantes como el Imperial, el Toltén y el Bueno y coronarse con el mejoramiento definitivo de los puertos de Arica, Antofagasta, Constitución, Talcahuano, Lebu y

Corral. Todo este programa de obras marítimas y fluviales representa un gasto de cuatro millones de libras esterlinas, según la prolija documentación que tenemos a la vista.

El plan completo de obras fiscales importa así un desembolso de doce millones de libras esterlinas y puede realizarse en ocho o diez años. Si admitimos este último lapso de tiempo, la inversión anual sería de unos quince millones de pesos oro por año, suma que está dentro de los recursos fiscales que ofrecerá el sistema rentístico que hemos propuesto.

Y aquí cabe anotar una ventaja de primer orden que se desprende de las reformas tributarias que hemos venido examinando: la abundancia de recursos que puede procurarse el Estado le permitirá acometer ese extenso plan principalmente con recursos nacionales, sin comprometer nuestro crédito. Llegaremos así a obtener nuestra verdadera independencia económica. La entrada por exportaciones de salitres vendrá así a tener su verdadera inversión, transformaremos en obras reproductivas esos millones que son capital de la nación y que hasta hoy hemos considerado como renta inagotable.

El plan de obras públicas, construidas directamente por el Estado o acometidas por los particulares con el apoyo fiscal, completa el fundamento económico de la ley monetaria,

cuyo éxito encarna el progreso del país. Estas obras desarrollarán nuestra riqueza si procedemos con orden y si los directores del crédito nacional intervienen con la cautela que en otras ocasiones les ha hecho falta.

Llegamos así a la necesidad de la reforma de la ley de Bancos, materia que será la de nuestras próximas notas.

VII

La organización de los Bancos

Los Bancos son esencialmente instituciones que viven de la confianza del público, característica que no encuadra bien con el régimen de absoluta libertad bancaria en que hemos vivido hasta la fecha.

Las instituciones de crédito cuyas operaciones pueden comprometer cuantiosos intereses; tan cuantiosos que pueden afectar a la nación entera, deben ser severamente fiscalizadas con toda la prudencia que requiere la intervención del Estado en los negocios particulares, pero con toda la eficacia que exige la garantía de los intereses privados.

Si hubiéramos tenido una legislación como la indicada, los Bancos no habrían precipitado al país en la inconvertibilidad del año 1878, no

habrían provocado la caída de la conversión en 1898 y no habrían necesitado esa continua ayuda fiscal que ha llegado hasta dolorosos extremos.

La reforma bancaria se impone dentro del superior criterio de una fiscalización levantada que confirme las confianzas del público en las instituciones a quienes entrega su dinero. Esta intervención debe efectuarse desde luego, sobre la publicación eficaz de sus balances claros y transparentes y sobre la reglamentación de la contabilidad en forma tal que ninguno de sus rubros se preste a dudosas interpretaciones.

No es tarea nuestra el apuntar los detalles de esa reforma, correspondiéndonos tan sólo indicar la norma general en que debe inspirarse para la perfecta tranquilidad del público y para el propio éxito de los Bancos sometidos a un régimen de seriedad absoluta.

Esta intervención deberá llegar, a nuestro juicio, hasta preceptuar severas normas de explotación, por decirlo así, como serán las referentes al mantenimiento de cierta proporción entre los depósitos y la caja. La prudencia exige que los Bancos tengan efectivamente disponible cierta suma de dinero para atender a su marcha regular, suma que se calcula por los valores depositados y cuya cuantía depende de las especialidades del giro. Esta proporción puede variar de un 10 a un 20 por ciento del

valor del depósito, correspondiendo al estudio especial del problema la fijación de la cuota exacta. Nosotros nos limitamos a recomendar la necesidad de precisar ese coeficiente y de imponerlo legalmente, sometiendo a sanciones efectivas las infracciones del precepto. Las sanciones pueden ser la prohibición de hacer reparto de utilidades, la suspensión de nuevas operaciones y la privación de ciertas ventajas mientras no se complete la caja requerida.

Estas medidas de orden y de disciplina, que provocarán la tranquilidad permanente del público, junto con la marcha próspera de los establecimientos de crédito, deben complementarse con las facilidades que los Bancos requieren para el manejo de sus intereses. En un país cuya clasificación es como deudor, y económicamente aislado como el nuestro, es indispensable instalar resortes reguladores de la circulación.

Una crisis pasajera en cualquier Banco europeo o norte-americano puede salvarse mediante el auxilio de las instituciones de los países vecinos, lo que no es posible en Chile. Debemos prever, por lo tanto, la posibilidad del circulante de emergencia, pero dictando medidas tales que no se convierta en circulante permanente. La emisión de emergencia debe ser esencialmente transitoria, pues de otra manera sería un parásito que ahogaría al organismo principal.

La ley que consulte estas emisiones transitorias debe ser muy severa en las condiciones para obtenerla y muy precisa en la ordenación de su retiro, estableciéndose expresamente que solo tendrán derecho para hacerlas aquellas instituciones que hayan cumplido todos los requisitos a que nos hemos referido anteriormente.

Creemos que este circulante accidental debe establecerse en la ley monetaria, anticipando la fecha de la posibilidad de su emisión sobre la correspondiente al canje del billete, a fin de neutralizar de antemano cualquiera restricción verificada por medios especulativos o por retiros precipitados.

Los principios generales que dejamos establecidos deben aplicarse a todas las instituciones nacionales o extranjeras; grandes o pequeñas, pues no sería justo proteger al nacional o al grande en desmedro del extranjero o del pequeño. Limitada la libertad por las exigencias superiores del orden y de la seguridad, todos los poseedores de los capitales que van a vigorizar al país deben quedar sometidos a idénticas reglas.

El proyecto del Honorable Senado sólo contempla a los Bancos con capital superior a cinco millones y no vemos razón alguna que aconseje eliminar a los Bancos pequeños, que son nacionales y que prestan servicios indis-

pensables a los capitalistas, industriales, comerciantes, dueños de talleres y en general a todos los elementos que por su condición social no tienen acceso a los grandes Bancos.

La organización del crédito en la forma que acabamos de indicar, aparece así como natural exigencia del acierto en las medidas de progreso que deben estabilizar nuestra circulación; sin ese régimen severo podemos ir al fracaso y con él marcharemos en la certidumbre del éxito.

Organizada la Hacienda Pública, vigorizada la producción nacional y regimentado el crédito, la estabilidad monetaria, garantida por el orden definitivo en el interior, no temerá sino las perturbaciones internacionales y se hallará ligada al desarrollo de nuestras relaciones amistosas con los vecinos, en cuyo trato comercial encontraremos las positivas ventajas que estudiaremos próximamente.

VIII

Tratados comerciales

El país, a pesar de las inquietudes de esta época de liquidaciones, aguarda con tranquilidad la aprobación de la ley monetaria, porque confía en que esta medida fundamental no será

un acto aislado, como en anteriores ocasiones, sino parte principalísima de un todo perfectamente organizado.

Hay quienes creen que la estabilidad monetaria debe ser una simple consecuencia del enriquecimiento del país y del buen orden en los negocios públicos y privados y hay también opiniones que sustentan el principio contradictorio, es decir, que consideran previo el saneamiento de nuestra circulación. Sin moneda fija, dicen estos últimos, la Hacienda Pública estará siempre perturbada y la producción nacional se resentirá constantemente de la falta de confianza en el país que no puede sostener su cambio; la moneda, dicen los primeros, como signo de liquidación, refleja el saldo de valores que debemos percibir y sólo podremos elevar su cotización produciendo más. Entre ambas teorías, nuestro criterio se acerca más al de quienes exigen el saneamiento previo, sin que dejemos de aceptar las condiciones fundamentales de los que insisten en el fomento de nuestras riquezas; en una palabra, creemos que deben ser simultáneas la ley monetaria y las que se refieren a la organización económica del país.

Por esto hemos sostenido que la ley en debate requiere el inmediato estudio de un sistema rentístico distribuído con justicia en su cobro y en sus inversiones y en armonía con las necesidades del país. Los recursos que este

sistema procure deberán emplearse en obras públicas reproductivas y en el riego del territorio, lo que basta para crear una riqueza capaz de reemplazar las entradas salitreras, debiendo completarse este programa de estímulo a la producción nacional con la reglamentación del crédito, cuyos directores serán, en definitiva, los responsables de un programa de adelantos materiales cuya ejecución se confía a los hombres de trabajo.

Disipada la nebulosa económica en que hemos vivido, gracias a la ley de estabilidad monetaria y a sus naturales corolarios que hemos indicado, puede el país marchar sin tropiezo alguno en el interior y sin que divisen otros factores de perturbación que no sean los que pueden acumularse en el horizonte internacional. Ningún temor abrigamos a este respecto, nada hay siquiera que pueda inquietarnos, ya que nuestro único problema pendiente es de aquellos que forzosamente deben tener una liquidación pacífica, dados los incontrovertibles fundamentos de nuestro derecho y las especiales condiciones de nuestros contradictores. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, nuestra tranquilidad absoluta y la iniciación definitiva del Perú en las amplias vías de progreso, en las cuales está teniendo un retardo, en desacuerdo con sus privilegiadas condiciones de situación y de riqueza, exigen una pron-

ta solución de las diferencias que, sin provecho para nadie, están perturbando con simples recelos la prosperidad continental.

Liquidada, en breve tiempo, nuestra cuestión con el Perú y ligados en el futuro a dicho país por los tratados de comercio que son de mutua conveniencia, podremos, sobre idénticas bases, estrechar nuestras relaciones con Bolivia, Argentina y Brasil, creando la solidaridad sudamericana efectiva, fundada en el recíproco auxilio que se deriva del intercambio de nuestros productos en el régimen de franquicias que mejor consulte el máximo de intereses.

Los tratados de comercio entre todos los países nombrados, y aún entre todas las naciones sudamericanas, no tiene inconveniente real alguno; la zona del Pacífico y la del Atlántico, la región tropical y nuestros climas templados son verdaderamente complementarios y sólo basta un buen estudio de conjunto para llegar a la formación de un balance que permita apreciar los beneficios pequeños que hoy producen las trabas aduaneras y las incalculables ventajas que pueda procurar en el futuro un régimen de mayor acercamiento.

Prodúzcase en las pampas argentinas todo el trigo y todo el ganado que se quiera, aquí los recibiremos para elaborarlos en nuestros molinos y en nuestros frigoríficos y distribuírlos por toda la porción de continente que se sirve

de nuestros puertos. Organicemos, sobre la base de nuestras riquezas extractivas, las manufacturas nacionales, desde la gran fábrica de hierro hasta las hilanderías de las lanas de Magallanes y proporcionaremos a nuestros vecinos, rieles y vestidos. Todo esto es posible, todo esto es conveniente para nosotros y para nuestros vecinos, y, por consiguiente, debemos tratar de poner en práctica este acercamiento comercial que aparece como el supremo corolario de nuestra ley monetaria.

Consecuencia inmediata de este régimen de tratados de comercio, será el pacto de limitación de armamentos que podrá llevarnos a la formación de una escuadra suficiente para la seguridad continental, y al mantenimiento de un ejército que sea simple garantía interna y un gran nucleo de progreso en la alta educación militar. Los tratados de comercio nos llevan así a concretar nuestros gastos de guerra a las sumas estrictamente necesarias, eliminando de nuestro presupuesto gruesas partidas que debieran destinarse a progresos efectivos y devolviendo a la producción los brazos de que carece. Nosotros y nuestros vecinos encontraremos superiores ventajas en este sistema de comercio sudamericano que se impone y cuya iniciación pedimos como una de las medidas más eficaces para afianzar nuestra estabilidad monetaria.

Tal es la última consecuencia del plan de medidas que hemos venido estudiando y que fundan el desarrollo nacional en la triple base de la justicia en el tributo, del orden económico y de la paz exterior.

IX

Nuestro programa

La fijeza en el valor de la moneda, que el país reclama con urgencias que no admiten mayores dilaciones, exige que el proyecto fundamental reuna determinadas condiciones de acierto y que se apoye en un conjunto de medidas destinadas a garantizar la permanencia de ese éxito. Esas condiciones y esas medidas han sido estudiadas en estas columnas con todo el acopio de factores de influencia y con todas las demostraciones doctrinarias propias de la prensa que se dirige a lectores inteligentes y reflexivos, capaces de dar a las ideas fundamentales todos los desarrollos posibles y todas las aplicaciones necesarias, desarrollos y aplicaciones cuya exposición es característica de la gran revista técnica y no del diario que debe ser simple intérprete de las opiniones y orientador del máximo de conveniencias nacionales.

Nuestro programa general ha precisado algunos puntos de doctrina y de aplicación de los cuales queremos dejar expresa constancia en esta postrera nota de resumen.

PRIMERO.—TIPO DE CAMBIO.—La ley monetaria debe obedecer a una condición fundamental de seguridad y a una norma estricta de justicia. Lo primero exige un tipo bajo, cercano al que corresponda a la liquidación de las obligaciones a corto plazo, que son las más numerosas, y que han sido contraídas al cambio medio de los últimos cuatro años. La valorización del billete en estas condiciones asegurará la permanencia de nuestro *stock* metálico siempre que se llene todo nuestro programa.

Lo segundo, o sea la norma de justicia, requiere que se contemple un sistema con elasticidad suficiente para que la institución encargada de la circulación pueda elevar el tipo de canje del billete a medida que el enriquecimiento lo permita, contemplando los intereses ligados a los cambios superiores al actual. La eliminación de esta regla de justicia importaría un verdadero despojo.

SEGUNDO.—SISTEMA RENTÍSTICO.—Debe dictarse una ley que asegure el equilibrio de nuestros presupuestos dentro de un amplio programa de progreso, lo que exige una severa inspección que disminuya los gastos su-

perfluos y de simple favor fiscal y que se creen las entradas necesarias.

Nuestro sistema tributario actual es de impuestos a los consumos y debemos tener como anhelo de justicia el repartir igualmente las cargas entre los consumidores y las fuentes mismas de riqueza. Un sistema rentístico basado en esta distribución equitativa proporcionará todos los recursos para llenar las necesidades del progreso económico sin acudir a nuevos empréstitos, operaciones delicadísimas en las cuales debemos proceder con suma cautela, ya que en el pago de nuestra deuda estamos comprometiendo una parte de nuestra renta superior a la normal en cualquier país bien organizado.

El despacho de la ley de contribución directa es el primer corolario de la ley monetaria; este tributo será abundante y su inversión será cuidadosamente verificada por quienes lo pagan, circunstancia que no se realiza con los impuestos a los consumos.

TERCERO.—RIEGO DEL TERRITORIO.—La ley monetaria está ligada al progreso material, lo que requiere un plan metódico de fomento a nuestra producción; por otra parte, la razón suprema de justicia exige que el tributo justamente recaudado sea equitativamente distribuído; por consiguiente, la contribución a la riqueza debe servir para su propio resguardo

y estímulo. Así estimamos que esta contribución directa debe aplicarse especialmente al desarrollo de nuestra riqueza agrícola, particularmente afectada.

La zona agrícola del país necesita una inversión de cerca de ochenta millones de pesos en obras de riego, canales y embalses de agua, que permitirán doblar nuestros terrenos de regadío y aumentar nuestra producción agrícola en quinientos millones de pesos por año, creando una riqueza superior a tres mil millones. Estas cuentas no son de fantasía, reposa en los datos prolijos acumulados por los ingenieros y agricultores que han estudiado el problema.

Esta ley de riego es así el segundo corolario de la ley monetaria y su despacho, que es urgente, debe inspirarse en disposiciones sencillísimas que consulten garantías de interés ligadas a la aprobación fiscal de planos y presupuestos, dejando a la acción particular toda la iniciativa.

CUARTO.—PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS.—El fomento de nuestra riqueza agrícola en sus fuentes mismas debe completarse con las facilidades para la evacuación de los productos y para los intercambios de región a región y de país a país. Esto exige un programa de grandes construcciones como son ramales a la costa, en busca de los grandes puertos de concen

tración, y líneas andinas que empalmen con los ferrocarriles argentinos y bolivianos. El Estado debe limitarse a estas obras principales, grandes puertos y vías férreas de primer orden, lo que exigirá un desembolso de cerca de 200 millones de 10 peniques en un plazo de ocho o diez años. Las obras secundarias deben dejarse a la iniciativa particular convenientemente estimuladas por garantías de intereses y por la especial conveniencia de construir esas obras que forman la zona de atracción de los puertos principales y de los grandes ferrocarriles.

Todo el programa de obras de riego y de comunicaciones se desarrollará con una inversión de 25 o 30 millones por año, recursos que proporcionará la contribución directa sin necesidad de acudir al crédito externo.

QUINTO. — LEGISLACIÓN BANCARIA.—La acción eficaz de todas estas medidas destinadas al enriquecimiento del país dependerá en el último término, del buen régimen del crédito, cuyos abusos o extravíos pueden producir verdaderas catástrofes. Se impone, así, una legislación bancaria que garantice la confianza del público y que encuadre a las instituciones de crédito dentro de un marco de severidades que hasta hoy no han tenido. La expresada ley deberá contener, además, las disposiciones que, corrigiendo ciertas desigualdades naturales,

dejen en idénticas condiciones a los institutos nacionales y extranjeros, grandes y pequeños.

SEXTO. — TRATADOS COMERCIALES. — Finalmente, la prosperidad nacional exige el pacto de convenios comerciales que consoliden la paz sud-americana y que, contribuyendo al enriquecimiento mutuo, nos permitan limitar nuestros gastos de guerra.

Tales son los puntos principales del programa al cual «La Unión» prestará su decidido concurso porque ellos marcan las condiciones principales de nuestra verdadera independencia económica.

PROGRAMA DE HACIENDA PUBLICA

Editoriales de "LA UNIÓN"

dejen en idénticas condiciones a los institutos nacionales y extranjeros, grandes y pequeños.

SEXTO.—TRATADOS COMERCIALES.—Finalmente, la prosperidad nacional exige el pacto de convenios comerciales que consoliden la paz internacional y que, contribuyendo al engrandecimiento mutuo, nos permitan limitar nuestros gastos de guerra.

Tales son los puntos principales del programa que el país presenta en dictado concurso porque ellos marcan las condiciones primordiales de nuestra verdadera grandeza

PROGRAMA DE HACIENDA PUBLICA

Editoriales de "LA UNION"

LA LEY MONETARIA Y EL ESTADO

I

Los empréstitos externos

Con la absoluta nitidez de la verdad y con toda la precisión del raciocinio matemático, estudiaremos los grandes problemas de la Hacienda Pública, cuyas soluciones se ligan estrechamente al éxito de la proyectada conversión metálica.

En el gran libro de las rentas fiscales y de sus inversiones, nos interesa investigar el origen de las primeras y la distribución de las segundas, a fin de apreciar las capacidades de nuestro sistema tributario y la competencia de nuestros administradores; estos dos aspectos, generales y abstractos, son de importancia que predomina sobre el valor real de la renta y

sobre la suma exacta del gasto. En efecto, puede haber equilibrio entre los números, puede haber igualdad efectiva entre la entrada y el gasto, sin que esto importe un dictamen favorable para la situación. Lo importante es que este equilibrio obedezca a causas fundamentales, a energías propias del organismo, que no se engendre por la intervención de estabilizadores artificiales o de inyecciones poderosas; si nuestro estudio acusa el primer diagnóstico, o sea el equilibrio financiero obtenido por medios naturales, diremos que el país está sano económicamente y que la postración actual es simplemente anemia pasajera; empero, si la situación de equilibrio se nos revela producida por factores de artificio, debemos concluir que el organismo está enfermo y deberemos tratar no sólo de sanarlo, sino de vigorizarlo.

Abramos el gran libro de la Hacienda Pública y analicemos nuestros gastos y nuestras entradas, dando la preferencia en el orden a la primera partida. Los gastos abrazan dos categorías especiales; unos son servicios que se pagan al contado, y los otros engloban los grandes esfuerzos que estamos pagando, poco a poco; los primeros representan la administración corriente y los segundos el pago de las deudas contraídas para defender o capitalizar el país.

Este capítulo de las deudas es el que primero conviene analizar.

Hablen las cifras.

Nuestra deuda externa, según la estadística de 1912, representaba un saldo en circulación de 830 millones de 10 peniques. El ferrocarril longitudinal, dada la forma en que ha sido contratado, importa en realidad un empréstito de 7 y medio millones de libras esterlinas, y la reciente reforma de la ley de ferrocarriles descansa en la inversión de un empréstito de 4 millones de libras; estos compromisos recién enumerados, estos once y medio millones valen 276 millones de pesos de 10 peniques, que sumados con los anteriores nos dan *mil ciento seis millones de nuestros futuros billetes de 10 peniques.* Consideremos los saldos pendientes por armamentos y llegaremos a un compromiso de mil doscientos millones, por lo menos, cifra formidable que obliga a las más profundas reflexiones.

¿Cómo hemos llegado a acumular ese compromiso enorme? La respuesta exigiría toda la historia de nuestras liquidaciones internacionales y de nuestros desaciertos administrativos. No la haremos, concretándonos a esta segunda cuestión: ¿Es prudente continuar en este régimen de empréstitos? La pregunta que dejamos sin respuesta envuelve la responsabilidad de los hombres que pasaron; la segunda cues-

tión es nuestra propia responsabilidad y el país exige la respuesta inspirada en un convencimiento honrado, hijo de una meditación profunda. No vacilamos en decirlo: creemos que ya el país ha ido más allá de los linderos de la prudencia en materia de crédito y que no debemos endeudarnos más.

Hablen de nuevo las cifras.

En los Estados Unidos la deuda Pública es un 28% de la cifra total de su comercio, en Cuba es un 25%, en Canadá 55%, en Brasil 90%, en la Argentina 95% y en Chile ligeramente superior a 100%. Sólo hay un país que nos aventaje: el desgraciado Méjico, cuya deuda es más del 150% del valor de sus transacciones.

Esta comparación entre los compromisos nacionales y la expresión de su comercio, que es la característica de la capacidad económica, da una norma para fijar la cuantía de los créditos que puede absorber un país. El Brasil y la Argentina han encontrado en los últimos años un mercado receloso, lo que corresponde a la crecida proporción entre su crédito y su comercio; Chile ha encontrado iguales o mayores dificultades, lo que refleja exactamente su mayor saturación, por decirlo así.

He aquí un primer dato que nos manifiesta que no debemos aumentar nuestros compromisos con el extranjero.

Hagamos una nueva consulta a las cifras. Los Estados Unidos invierten 2% de su renta en el servicio de su deuda; Cuba un 10%, el Canadá un 12%, el Brasil un 18%, Argentina un 23%, Méjico un 25% y Chile un 29%. Henos aquí de nuevo colocados en el rango de los países que podríamos llamar de mala conducta económica, correspondiéndonos la más elevada nota de incapacidad.

Hay mas aún; esta proporción de 29% es un mínimo y debe explicarse. Si consideramos a los Ferrocarriles del Estado como empresa autónoma capaz de costear sus gastos, lo que justificaría la eliminación de los rubros respectivos, las entradas de la Nación llegan a 289 millones de pesos de 10 peniques. El servicio de la deuda que antes hemos considerado importa setenta millones sobre los empréstitos actualmente servidos y exigirá 25 millones adicionales para los compromisos de armamentos por recibir, del longitudinal, de capitalización de las vías férreas en explotación y demás que dejamos indicados. El servicio de nuestra deuda importará, por lo tanto, en breve tiempo, cerca de 95 millones de 10 peniques, o sea 33% de nuestras rentas actuales.

La tercera parte de las entradas de la Nación será consumida por el pago de la deuda; este es un coeficiente de magnitud tal que acusaría, en cualquier país, la bancarrota defi-

nitiva. Felizmente el nuestro tiene aún intactas sus mejores fuentes tributarias y semejante situación no llegará a producirse.

Las anteriores observaciones nos demuestran: *primero*, que hemos llegado al máximo de crédito compatible con nuestro comercio actual, y *segundo* que el servicio de nuestra deuda absorbe una cuota de nuestras entradas superior a lo normal.

La conclusión se impone con caracteres de evidencia: no debemos contraer nuevas deudas. El grupo de hacendistas, si es que merecen este nombre, que hasta hoy ha dominado en la opinión, ha resuelto a fuerza de empréstitos todas las dificultades, pretendiendo al propio tiempo implantar cierta doctrina pseudo-nacionalista que evitara la salida de los dineros chilenos. A su llamado ha venido este amo del mundo, que es el dinero, y su visita innecesaria la estamos pagando con este tributo anual de 95 millones que es la tercera parte de nuestra renta, que es el 60% de las entradas del salitre y que representa casi la totalidad del tributo aduanero.

Hemos dicho visita innecesaria porque ya habíamos demostrado que nuestros créditos eran excesivos en comparación de nuestras capacidades comercial y rentística. Si esos dineros hubieran venido a aumentar nuestra produccion, y por ende, nuestro comercio, su vi-

sita habría sido necesaria y no tendríamos la aflictiva situación actual. Sea como quiera, tal es el pasado y tal el cuadro presente que nos fija una regla de conducta invariable: no debemos contraer ninguna deuda nueva, pues el sacrificio actual es ya excesivo, imponiéndose esta conclusión con especial vigor en estos momentos en que se trata de concentrar toda la energía nacional en la acción definitiva para estabilizar la moneda.

Esta primera parte del estudio de la Hacienda Pública nos demuestra que el país no sólo está anémico; desgraciadamente, nos revela que hay un principio de desorganización que nos proponemos investigar ya que, sin su pleno conocimiento, será imposible indicar un remedio eficaz.

II

Los presupuestos

El país tiene comprometido en el servicio de su deuda externa el 33% de su renta actual, y sus empréstitos, directos o indirectos, representan una cifra superior a la medida de su comercio; estos dos factores nos dan francamente la característica de nación económicamente desorganizada, máxime si se considera que hemos dispuesto de las entradas salitre-

ras, tributo único en el mundo, verdadero regalo de la Providencia. El conocimiento de estos hechos nos ha llevado a pedir, como medida fundamental para sostener la conversión metálica, la suspensión de las operaciones que comprometan el crédito público. Sin esta promesa formal, y sin la voluntad decidida de cumplirla, iremos al fracaso evidente, ya que el servicio de esa deuda de mil doscientos millones aparece como factor principalísimo en nuestro equilibrio económico.

La gravedad de la situación que denunciamos exige un estudio más detallado de nuestros presupuestos. Las cifras siguientes expresan, en moneda de 10 peniques, las inversiones fiscales:

Ministerio del Interior.....	$ 45.000,000
Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización.	7.000,000
Ministerio de Justicia.....	11.000,000
Ministerio de Instrucción Pública	40.000,000
Ministerio de Industria, Obras Públicas y Ferrocarriles, sin contar la red en explotación.	25.000,000
Ministerio de Hacienda, sin contar el servicio de la deuda...	18.000,000
SUMA.....	$ 146.000,000

Servicio de la deuda sin contar los bonos del longitudinal, ni las próximas emisiones para los ferrocarriles y otras inversiones	$ 70.000,000
Ministerio de la Guerra	40.000,000
Ministerio de Marina	36.000,000
SUMA	$ 146.000,000

Este presupuesto de gastos se cubre con las siguientes entradas en moneda de 10 peniques:

Derechos de exportación de salitre y yodo	$ 158.000,000
Contribuciones indirectas; aduanas, tabacos y alcoholes.	110.000,000
Contribuciones directas: derechos consulares, seguros, bancos y timbre	9.000,000
Pago de servicios: correos, telégrafos, movilización de bultos, faros y balizas	10.000,000
Entradas varias	5.000,000
SUMA	$ 292.000,000

La comparación de estas cifras hace resaltar las siguientes conclusiones que exponemos con la absoluta sencillez de la cifra:

Primera: El servicio de la deuda y la defensa del país representan la mitad de nuestros gastos.

Segunda: La renta salitrera alcanza para servir la deuda vigente y los gastos de la defensa nacional y deja un excedente de 14 millones.

Tercera: Si consideramos el compromiso del longitudinal, el nuevo empréstito para ferrocarriles y otras autorizaciones en trámite, el servicio de la deuda subirá a 95 millones, en cuyo caso para atender a los gastos del Ejército y de la Marina y a los empréstitos, no bastará la renta salitrera, pues se necesitarían once millones más.

Cuarta: Si estos once millones se hubieran de rebajar de los otros Ministerios, por grandes que fueran las economías posibles, expondríamos a serios quebrantos los servicios de todo género.

Quinta: El presupuesto analizado sólo cuenta una inversión de 19 millones en obras públicas, siendo necesario invertir a más de estas sumas en obras de riego, en grandes ferrocarriles y puertos, treinta millones en exceso sobre esta suma, como lo hemos demostrado al tratar de la creación de las riquezas perma-

nentes que deben reemplazar la inestable entrada salitrera.

Sexta: Todo esto nos demuestra que necesitamos aumentar nuestras entradas en 41 millones de 10 peniques para atender al equilibrio de nuestros presupuestos y a nuestras apremiantes necesidades de progreso.

Decimos que es necesario aumentar las entradas, porque hemos demostrado que es imposible pensar en el aumento de nuestras deudas y porque creemos que la reorganización administrativa que se estudia introducirá mayor orden y más justicia en la distribución de los dineros fiscales, sin que llegue a disminuir la cifra misma de los gastos en forma apreciable. Por otra parte, en el presupuesto analizado no figuran los suplementos ni otras leyes especiales que han incrementado considerablemente la cifra de egresos fiscales, circunstancia que, aún considerando las posibles economías, nos autoriza para insistir en la necesidad de crear esa renta de 41 millones. Más aún, en vista de las deficiencias de ciertas reparticiones administrativas, estimamos que debe procurarse obtener una cifra superior, cercana a los 50 millones de 10 peniques.

He ahí una conclusión que se agrega a la necesidad imperiosa de paralizar nuestras operaciones de crédito: debemos establecer un sistema rentístico que nos produzca 50 millo-

nes por año, sin cuyo auxilio iremos al déficit permanente y a la paralización del país, es decir, a la bancarrota del Estado y al empobrecimiento privado.

¿Cuál será la nueva fuente de tributos? Es evidente que no pueden ser los impuestos a los consumos que figuran por 110 millones contra 9 millones que importan las contribuciones directas. Esos 50 millones será preciso pedirlos a la riqueza misma, cuya cuota en los gastos públicos es tan pequeña que parece insignificante. Una distribución equitativa, en armonía con los sistemas rentísticos de otros países, asignaría el 60 por ciento de los gastos al tributo directo y haría pesar el 40% sobre los consumidores, de modo que sobre un total de recursos actuales de 134 millones, deberían corresponder unos 54 millones a la aduana y a los impuestos similares, y 80 millones a la contribución directa.

¡Cuán lejos vivimos de esta norma que, aún siendo aceptable, dista mucho de la mayor conveniencia económica y del perfecto dictado de la moral y de la justicia!

La entrada futura debería ser de 184 millones, además de la renta salitrera, y corresponderían 70 millones a los impuestos a los consumos, 100 a la contribución directa y el resto a las remuneraciones de servicios como correos y otros. Todo esto demuestra que sería lógico

una revisión que redujera la tarifa aduanera y que diera a la contribución directa su verdadera cuota; pero no queremos, por ahora, entrar en esta materia de tanta importancia, limitándonos a verificar la imperiosa necesidad de crear nuevas rentas, indicando que la única fuente posible es el tributo a la riqueza.

Sólo merced a estos recursos podremos garantizar el éxito de la conversión metálica que requiere una Hacienda Pública sana, que encuentre vigores en sí misma y no en las perturbadoras inyecciones del crédito que son un estímulo en dosis normales y un veneno como régimen habitual.

El impuesto directo, futuro nivelador del presupuesto, afianzando la estabilidad monetaria, devolvería con creces los sacrificios que exigirá su pago, ya que él hará posible el desarrollo de la riqueza misma.

Demostrada, así, hasta la evidencia la necesidad de crear nuevas rentas e indicada su fuente, deberemos ocuparnos próximamente de las reglas que aseguren el equilibrio automático, por decirlo así, de las entradas y de los gastos nacionales. Eliminados los empréstitos y vigorizado nuestro organismo económico por el nuevo sistema rentístico bien administrado, el país entrará francamente en el período de la regeneración económica, único compatible con la moneda estable.

III

Formación de los presupuestos

La falta de prudencia que caracterizó el manejo de los negocios privados en los primeros años de tranquilidad efectiva que siguieron a la liquidación de nuestro gran problema de fronteras orientales; el desorden del período de *resurgimiento*, que pudo ser tal y que no supimos aprovechar; las impremeditaciones y las ligerezas de esos años, irradiaron desde los negocios privados a los intereses nacionales con los mismos caracteres de fantasía y grandiosidad, cuyas consecuencias ya hemos verificado: el país debe mil doscientos millones de pesos moneda corriente, y esta deuda exige un desembolso del tercio de los actuales ingresos del Fisco.

La gravedad de la situación creada impone grandes responsabilidades, pues hemos llegado en nuestro desenvolvimiento político a uno de esos puntos que podríamos llamar críticos, que son el arranque de una orientación nueva cuya acertada elección fijará nuestra suerte definitiva. Conscientes de estas responsabilidades, hemos venido analizando, sin perjuicios de teorías ni obsesiones por los resultados, todos los factores económicos de influencia y he-

mos llegado a trazar un programa de orden, de progreso y de justicia que debe caracterizar al período de *regeneración*, cuyo advenimiento se impone con todos los apremios de las necesidades vitales y de los remedios para los peligros inminentes.

La regeneración de la Hacienda Pública exige que paralicemos por completo las operaciones de crédito y que nos dediquemos a labrar, con nuestro propio esfuerzo, el engrandecimiento nacional sobre la plataforma de la estabilidad monetaria, que descansa a su vez en la ejecución de obras públicas, como canales de riego, ferrocarriles y puertos; que se apoya en las medidas ordenadoras del crédito; que exige tratados internacionales que fomenten la producción y el comercio, que nos lleven al desarme continental y que, finalmente, tiene como instrumento para realizar este programa un sistema rentístico que afecte a las manifestaciones visibles de la riqueza y cuyo producto se invierta en beneficio de la riqueza misma.

El Estado, natural director de este programa verdaderamente nacional, deberá proceder con suma cautela en el régimen de sus gastos, circunstancia que coloca entre las medidas fundamentales la organización de nuestros presupuestos dentro de tres principios: equilibrio estricto, grandes inversiones en obras reproductivas y recursos propios. La ley de gastos

públicos debe proyectarse con economía, pero con eficacia; ambas condiciones exigen la revisión de los servicios actuales y la adopción de un plan de inversiones. La tarea no es difícil; basta, a nuestro juicio, que cada Ministerio, sin lujo de grandes nombres que poco tiempo tienen disponibles para estas ocupaciones, elija un núcleo de sus actuales servidores y de los retirados que se distinguieron en sus labores, para que se pueda, en muy breve tiempo, tener una ley orgánica que consulte un orden administrativo de mayor eficacia que el actual y sin grandes gastos. Ya lo hemos dicho anteriormente; creemos que los gastos no disminuirán, pero que se distribuirán mejor. Así, en el ramo de Justicia, caben reducciones en los empleos del Ministerio Público, pero se requiere una buena inversión en Policías Judiciales, cuya falta engendra muchos abusos; las pensiones y jubilaciones se pueden reemplazar por el sistema de mayor rendimiento económico que importan las cajas de Retiro; pero, en cambio, será necesario gastar algunas sumas en la creación de organismos directores del comercio y del trabajo. Esta revisión de los gastos públicos, para su reglamentación normal dentro de las severidades de las leyes permanentes, debe hacerse cuanto antes, confiando su estudio a los empleados actuales, celosos del buen servicio, y a los servidores en

retiro cuya prudente acción está llamada a corregir los entusiasmos de los que desearan dar a su repartición administrativa extensiones exageradas.

Cualesquieran que sean las leyes que organicen los servicios permanentes y que tracen el programa de obras públicas, la aprobación de los gastos anuales debe proceder a la autorización para el cobro de subsidios siempre que el sistema tributario contenga algún procedimiento que permita hacer automáticamente el equilibrio de los gastos y de las entradas. Dentro de nuestro régimen rentístico actual, la votación previa de la ley de gastos no es posible, ya que todas las entradas caen bajo el régimen fijo del impuesto a los consumos. Sucede en la actualidad que se votan los presupuestos sobre la base de un cálculo de entradas que provienen de los consumidores, cálculo cuyos coeficientes de exactitud son tanto menores cuanto más elevado es el gravamen, resultando el desequilibrio por el doble capítulo de merma en las entradas y de exageración en los gastos autorizados por quienes de ningún modo sienten el peso de la contribución.

En cambio, si las entradas de la Nación se compusieran de los impuestos a los consumos y de los tributos directos, justamente proporcionados—los primeros como entradas fijas, ya que es lo único compatible con la estabili-

dad comercial,—los segundos como cuota variable, hasta equilibrar los egresos nacionales se tendría la doble ventaja de tener siempre presupuestos saldados con exactitud y la de no autorizar sino los gastos estrictamente necesarios para el bienestar del país. Esta última ventaja deriva, en especial, de la circunstancia que la contribución directa afecta más eficazmente a los que autorizan y verifican las inversiones de las rentas nacionales.

Tal es el resorte automático que asegura para siempre el equilibrio de los presupuestos: la ley debe ser doble, de gastos con votación previa y de subsidios que se aprobará en seguida, reglando la cuota del tributo directo, de modo que su cuantía cubra el saldo que dejen los impuestos a los consumos.

Hemos demostrado que la contribución directa puede suministrar unos 50 ó más millones por año, de modo que si esta cantidad se requiere para saldar el presupuesto y ella corresponde a un 3 por mil, por ejemplo, éste sería el coeficiente que se votaría anualmente. Si los gastos requieren sólo 34 millones de este tributo, la cuota se bajaría a 2 por mil; pero, si el Congreso autorizara gastos que absorben 60 millones, la cuota subiría a 4 por mil. Así, la ley de contribución directa debe consultar dos límites extremos entre los cuales se fijará el coeficiente necesario para cada año.

Con semejante sistema tendremos siempre presupuestos equilibrados, progresistas y justos.

Tal es una de las reformas fundamentales que debemos introducir en la Hacienda Pública a fin de fortificar la confianza en el país, confianza sin la cual son meras ilusiones los proyectos de estabilidad monetaria. Próximamente nos ocuparemos en la oportunidad del despacho de la ley de presupuestos, circunstancia de primer orden para la eficacia de las inversiones.

IV

La oportunidad de los presupuestos

Los recursos que la nación dedica al mantenimiento de los servicios públicos y al escaso desarrollo de las obras de progreso provienen del salitre, que cubre los gastos de la defensa nacional y las atenciones de nuestra deuda externa, y del tributo indirecto que satisface el resto de nuestras necesidades en la forma estrecha, casi rudimentaria, de los presupuestos actuales en que no ha sido posible consultar todo el programa que el país exige.

La falta de recursos, más que el exceso de gastos inútiles, es el gran obstaculo para este

plan de engrandecimiento metódico que será la base de nuestra estabilidad monetaria; si faltan recursos, es preciso crearlos, y si hay desorden en los gastos, es indispensable dictar las leyes orgánicas de la administración. Por estos motivos venimos pidiendo que, abandonado el régimen fatal de los empréstitos para saldar los déficits, se ponga en práctica la contribución directa que afecte a los signos externos de la riqueza y que se encuadren los servicios dentro del régimen severo de las leyes de efecto permanente.

La Ley de Presupuestos podrá ser votada con rapidez una vez reglamentada la administración; en efecto, el mayor número de partidas serán las correspondientes a los gastos fijos de los servicios estables y a las inversiones del programa de obras públicas y no habrá sino pocos renglones dignos de discusión, pues los egresos variables se reducen al mínimo posible.

La ley de subsidios consistirá en la simple autorización para el cobro de las contribuciones a los consumos emanadas de leyes duraderas, únicas compatibles con la estabilidad comercial y con los intereses de la clase que vive del trabajo que también reclama la estabilidad de sus presupuestos de gastos y de entradas. La segunda partida de la ley de entradas será la discusión de la tasa de impuesto directo,

coeficiente que sólo dependerá de la diferencia entre el total de gastos y las entradas salitreras, de aduanas y cobros de servicios. Esta diferencia la cubrirá el gravamen a la riqueza y la ley se limitará a fijar anualmente el tanto por ciento del tributo dentro de los límites de la ley genérica de esta contribución. Así, si el presupuesto es de 360 millones de 10 peniques y si el salitre, las aduanas, el tabaco, el alcohol, los correos y los telégrafos rinden 300 millones, la diferencia de 60 millones gravitará sobre la riqueza. En estas condiciones, si la tasación general llega a 20 mil millones la cuota será de 3 por mil.

El equilibrio automático obtenido por este procedimiento, la rapidez en el despacho de la ley que de él se deriva, la juiciosa inversión que será el fruto del vínculo real creado entre el contribuyente y el Fisco, todo esto que es indispensable y cuya organización se impone, no es, a nuestro juicio, suficiente. Es necesario además que el presupuesto sea aprobado con la debida oportunidad teniendo en vista las condiciones especiales del país.

En la actualidad la ley de gastos anuales, promulgada en Enero, entra en su vigencia práctica en Marzo o Abril; los retardos provienen de la natural inercia de resortes administrativos complicados, de la ausencia que provocan los meses de veraneo y de otros fac-

tores que atrasan considerablemente la acertada inversión de muchas partidas.

Los ferrocarriles, los correos, los telégrafos, los caminos, el dragado de los puertos requieren sus fondos en la época de Verano a fin de aprovechar el buen tiempo para hacer reparaciones de todo género; como no los obtienen sino tarde se ven obligados a contratar con premura la adquisición de materiales y el pago de servicios, lo que ocasiona un desembolso mayor que el previsto.

A esto se agrega la mala condición en que se ejecutan las obras, que nunca alcanzan su carácter definitivo; un camino puede repararse en los meses de Octubre a Abril, con poco gasto y dando todo el tiempo necesario para que las obras adquieran la estabilidad necesaria; en cambio, la misma obra iniciada en Abril sufrirá todos los desperfectos de la Estación de lluvias y se recargará con todo el exceso de jornales de los cortos días otoñales y de Invierno.

El acarreo de materiales en el Invierno es penoso y caro y agrega un nuevo factor de perturbaciones; la compra misma de estos artículos se hace en los momentos de alta cotización, tanto más alta cuanto mayor es la urgencia con que se solicitan.

La época más apropiada para los trabajos es desde Septiembre a Mayo y así creemos

que es de especial importancia hacer coincidir la fecha inicial de vigencia de los presupuestos con la que indica la temporada de mayor eficacia para su inversión. La ley de presupuestos debe, a nuestro juicio, dictarse para que rija desde el 1.° de Septiembre al 31 de Agosto, con lo cual se ahorrarán muchos tropiezos actuales y se tendrá el mayor rendimiento en los dineros fiscales.

Esta exigencia nuestra se armoniza con la disposición constitucional que fija el período de sesiones ordinarias del Congreso de Junio a Septiembre. Atención fundamental de los representantes del pueblo es la aprobación de los presupuestos anuales y consideramos una verdadera corruptela el que se dediquen esos meses a otras tareas, las más veces inútiles, cuando no son simples perturbaciones políticas que perjudican al país.

El ideal sería que todas las sesiones ordinarias se dedicaran al despacho de los presupuestos, dictando medidas eficaces para que esta ley rigiera el 1.° de Septiembre, llegando hasta autorizar al Ejecutivo para poner en vigencia el presupuesto del año anterior, por duodécimas partes, si el Congreso no cumpliera con la obligación de sancionar oportunamente la ley de entradas y gastos anuales.

Esta medida de oportunidad en el despacho de los presupuestos es complemento indispen-

sable del resto de disposiciones que deben normalizar la Hacienda Pública y de cuyo conjunto nos ocuparemos en nuestra próxima nota.

V

El Gobierno

En numerosos artículos de redacción y en los estudios detallados, precisos y de altas proyecciones de sus colaboradores, ha venido nuestro diario analizando la situación general del país cuya actividad está como suspendida ante la solución del problema monetario.

Si hubiéramos de abarcar en una gran síntesis todas nuestras conclusiones doctrinarias y todas nuestras prolijidades estadísticas, deberíamos decir que estamos en plena crisis fiscal superpuesta a una gran crisis comercial, doble fenómeno en el cual las angustias monetarias no tienen el papel de causa que le atribuyen algunos, correspondiéndole mejor una clasificación entre los principales efectos de esas perturbaciones fundamentales.

Si el Estado hubiera tenido orden en la administración de sus caudales no tendríamos como régimen normal el déficit que se ha saldado, de año en año, con una serie de incon-

sultos expedientes, como han sido los empréstitos de cancelación, los recargos aduaneros y los giros indebidos sobre fondos especiales para obras públicas.

La crisis fiscal se ha producido por falta de orientaciones en la dirección de los negocios públicos: se ha gastado en armamentos innecesarios y se han invertido en servicios locales los recursos que debieron destinarse al desarrollo nacional, a construír puertos y caminos y a capitalizar las vias férreas. Y, en medio del desborde, no se buscaron nuevas entradas, que el pais puede procurar fácilmente, como se ha demostrado en estas columnas, y la catástrofe final se ha precipitado como un alud, fenómeno violento que impide discutir con la calma necesaria las soluciones de salvación. Nosotros hemos tenido esa tranquilidad de espíritu y, al denunciar la crisis fiscal, manifestamos que Chile tiene intactas sus fuentes tributarias, que puede, con sólo quererlo, regularizar sus presupuestos dentro de todas las amplitudes del progreso.

El desorden de la Hacienda Pública, cuyos saldos se han cubierto con fondos de empréstitos y cuyo desequilibrio afecta la balanza internacional y ha producido extraordinarios abatimientos de la moneda, ha influído poderosamente en los negocios privados. La baja del cambio dejaba saldos extraordinarios en

ciertas industrias, recursos que se han malgastado en empresas locas y en cierto derroche de lujo, constituyendo, al final de la cuenta, un saldo que los particulares han pagado, a su vez, con empréstitos como lo demuestran las cuantiosas emisiones de bonos a oro. Tras los días de derroche vienen las noches de meditación y, en pos de éstas, las necesidades del pago. Es la crisis comercial que se traduce en violentas economías que paralizan las transacciones.

La crisis comercial influye a la vez sobre el Estado que ve disminuír sus recursos y la alarma se produce: el importador exige sus reembolsos, el acreedor agita sus cobranzas y el cambio baja y la moneda se esconde. La crisis monetaria sobreviene como efecto último de la perturbación fiscal que engendró a su vez el desconcierto comercial.

La ley monetaria, con toda la importancia que le atribuímos, aparece así como un factor casi mínimo, de orden inferior a la primordial necesidad de entronizar, de una vez por todas, ideas fundamentales de Gobierno. Y decimos ideas, porque deseamos que nuestros Ministerios se liguen eficazmente a un programa de Hacienda Pública con proyecciones sobre el desarrollo de la riqueza privada.

Asquith y George en Inglaterra, Terry en la Argentina, y hasta el desgraciado Caillaux en

Francia están o estuvieron en el Gobierno para realizar un programa. Es el régimen efectivo de las responsabilidades.

En Chile los Ministros piensan, estudian, consultan, elaboran un proyecto; la opinión lo aplaude, generalmente, y llega al Congreso Nacional donde una comisión cualquiera lo desfigura, lo destroza y, finalmente, la idea aceptada por el país desaparece y se autoriza la conveniencia del grupo. Es el Gobierno de las irresponsabilidades.

Queremos Ministros que digan a la Cámara: «Este es nuestro programa en sus líneas fundamentales sobre el cual no admitimos transacciones porque la conveniencia del país está en esta solución y nó en otra; la verdad es única. Pedimos el pronto veredicto de nuestros proyectos de ley y, en caso de no tenerlo, nos retiramos. Nuestra es la responsabilidad y la afrontamos; a nosotros nos corresponde gobernar y a vosotros fiscalizar; no confundamos papeles; si el Congreso gobierna y el Ministerio fiscaliza, el orden constitucional se invierte y el país se trastorna».

Y terminamos; la ley monetaria, aún la mejor inspirada, será un fracaso si no tenemos Gobierno como el que deseamos, consciente de su programa y de sus fuerzas, que imponga soluciones, si puede, o que deje a otros la dirección. El país sabrá hacer justicia y

aplaudirá a los hombres de principios, condenando a los hombres de conveniencias o de oportunidades.

VI

Nuestro programa de Hacienda Pública

Con la tranquilidad de espíritu que domina las grandes horas de la vida, con todo el acopio de teorías y de datos que hemos podido reunir, y guiados por la sola directriz del patriotismo, penetramos en lo que a primera vista aparece como un laberinto en este problema llamado la cuestión económica, y una vez dentro de él, hemos visto que sus complicaciones para el futuro son más aparentes que reales, ya que, en el fondo, la solución del acertijo monetario coincide con la que debemos dar para la buena dirección de los negocios públicos y para encaminar las actividades nacionales por los rumbos de la economía y del trabajo, apartando a los hombres de las especulaciones malsanas, que han crecido como parásitos gemelos del billete inconvertible.

La estabilidad monetaria exige el compromiso formal para dedicarnos a cumplir un programa de progresos materiales, dentro de

un crédito severo, y con los recursos propios que procurará la contribución directa.

El conjunto de medidas que deben regir nuestros negocios privados y sus relaciones con el Fisco ha sido objeto del programa económico que dimos como norma precisa de nuestra orientación destinada a secundar todas las iniciativas del trabajo regenerador; nos faltaba completar nuestras definiciones en lo que se refiere al régimen fiscal mismo, lo que hemos hecho en anteriores notas y que sintetizamos ahora como principios fundamentales de nuestra acción en materia de Hacienda Pública. He aquí esas definiciones:

PRIMERA.—EMPRÉSTITOS INTERNOS.—Consideramos que nuestra deuda actual, superior a la cifra de nuestro comercio, es excesiva, y deseamos que no se recurra más al crédito y aún que se destinen los fondos provenientes de remates de salitreras a extraordinarias amortizaciones de la deuda externa.

En materia de empréstitos, sólo podemos admitir operaciones de corto plazo, simples documentos de tesorería, siempre que se cuente con entradas fijas para cubrirlos. Este sistema facilitará las obras públicas y no perturbará las operaciones bancarias si, como lo hemos pedido, se consulta en la ley monetaria cierta amplitud bien reglamentada para el circulante de emergencia.

Las rentas nacionales, justamente distribuídas entre la riqueza y los consumidores, deben bastar para nuestros gastos, evitando los empréstitos cuyo servicio es un gran factor que contraría la estabilidad monetaria.

SEGUNDA.—ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. —Deben dictarse, a la brevedad posible leyes que organicen los servicios administrativos de todo género con gran economía, pero sin descuidar el máximo de eficacia. De esta manera tendremos orden perfecto en la administración y la discusión de los presupuestos se reducirá a los renglones de variables cuya importancia medirá el esfuerzo del pais en favor de las obras de progreso.

TERCERA.—LEY DE GASTOS PREVIA Y LEY DE SUBSIDIOS POSTERIOR.—El presupuesto de gastos, ampliamente calculado para el mayor bien común, se cubrirá con las entradas fijas de las contribuciones aduaneras y de los derechos de exportación, debiendo saldarse los gastos con la contribución directa, cuya tasa se calculará con este objeto.

De este modo tendremos presupuestos de gastos estrictos y las cargas públicas se distribuirán con equidad.

CUARTA.—EL PRESUPUESTO DEBE REGIR DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE.—El hecho constitucional que fija en los meses de Junio a Agosto las sesiones ordinarias del Congreso y la obli-

gación de dar preferencia a la ley de gastos públicos aconsejan que estos debates sean materia exclusiva de las sesiones ordinarias.

La climatología del país indica que la temporada de mayor eficacia para los trabajos es de Septiembre a Mayo, y esta circunstancia exige que no haya retardo alguno en las inversiones en obras públicas, régimen que no se armoniza con la aprobación de los presupuestos en Enero o Febrero y cuya aplicación sólo se inicia en Abril o Marzo.

Pediremos, por lo tanto, que la ley de presupuestos se apruebe en las sesiones ordinarias y éntre en vigencia el 1.º de Septiembre debiendo dictarse todas las medidas necesarias para que este régimen normal no pueda ser alterado.

He ahí los cuatro puntos fundamentales del programa de Hacienda Pública que completan el plan económico que «La Unión» se ha trazado y a cuya realización consagrará sus esfuerzos.

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Editoriales de "LA UNIÓN"

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Editoriales de "LA UNIÓN"

LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

I

Autonomía y Capitalización

Peculiaridad de nuestra raza es la inconstancia de temperamento, hija del deseo violento de ver fructífero el árbol recién plantado, capital defecto que, en la vida pública, ha impedido el desarrollo de los programas de progreso ordenado y constante y que, en la vida privada, ha hecho estériles las poderosas iniciativas cuyos impulsos no hemos sabido traducir en energías permanentes. Esta veleidad nacional se está manifestando con caracteres especialmente agudos, a propósito de la reorganización de los Ferrocarriles del Estado; la ley no tiene aún tres meses de fecha y ya hay gentes que cuentan el fracaso de las nuevas

medidas, entre los hechos consumados; otros menos pesimistas, afirman, con aire de agoreros, que no está todo perdido, pero que el derrumbe es inevitable y a corto plazo; sostiene un tercer grupo, sin más argumentos que la sonrisa enigmática del que no tiene otra razón, que los artificios de la ley actual, vivirán mientras duren los millones del crédito concedido y, en realidad, son muy pocos los hombres de calma que dicen: confiemos y esperemos, la ley es buena, el personal superior siente la responsabilidad efectiva de la tarea que se le ha encomendado y podrá aplicar con éxito una ley bien meditada.

Nosotros estamos del lado de estos espíritus tranquilos y condenamos la acción perturbadora de esos veleidosos, cuya mutabilidad en los dictámenes desanima a los hombres de la dirección superior y provoca el descontento, cuando no la indisciplina, en el personal subalterno. La ley de reorganización de los Ferrocarriles del Estado es la suprema tentativa que hacemos para conservar definitivamente incorporada a la economía nacional nuestra red de transportes internos, en forma tal que, sin dejar de ser una protección efectiva para el desarrollo de nuestra vida industrial, no pueda convertirse en una carga fiscal. Hasta hoy, los Ferrocarriles han cumplido la primera de las condiciones apuntadas y no han satis-

fecho a la segunda, produciendo un desequilibrio que ha hecho prácticamente nulas las ventajas transitorias de la producción y del comercio nacionales. La empresa, como organismo protector, debe tener vida propia y bastarse a sí misma, sin lo cual sus déficits pesarán directamente sobre el presupuesto nacional e indirectamente sobre el país, que pagará esos saldos en la forma de contribuciones directas o indirectas, que anulan los provechos de un transporte cuyas economías son simplemente ilusorias en su acción inmediata y cuyo efecto mediato es profundamente perturbador, ya que las economías positivas que él produce benefician a unos pocos y las cargas definitivas que él engendra, pesan sobre los que no han recibido provecho alguno.

Si la actual ley llegara a fracasar, si la autonomía del Ferrocarril del Estado se demostrara como un hecho impracticable por administradores y técnicos nacionales, debemos forzosamente caer en el arrendamiento, sistema que evita las perturbaciones que acabamos de insinuar, pero que convertiría a la zona central del país en un verdadero feudo de la empresa arrendadora. El fracaso de esta ley nos precipita desde un abismo grande en otro mayor; de donde se deduce que es verdadera obligación de patriotismo, que a todos nos afecta, el procurar el éxito de la nueva ley sin

tomar en cuenta rivalidades por las elecciones de hombres, sin dejarnos llevar por las inquietudes de soluciones de apremio y teniendo solamente en consideración que, después del problema de estabilización monetaria y talvez junto con él, la cuestión que más hondamente afecta al porvenir del país es la aplicación correcta de una ley que permita nacionalizar efectivamente el más importante de los instrumentos de producción, el sistema de transportes, que es, al propio tiempo, el más eficaz medio de protección industrial. Dentro de este criterio, nos proponemos prestar todo nuestro apoyo a las nuevas entidades que dirigen la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y estudiar por nuestra parte, desde el punto de vista general que corresponde a la prensa, los grandes problemas que más vivamente interesan a nuestra reorganización ferroviaria.

El país se muestra desconfiado, como lo hacíamos constar en el principio de esta nota, y su inquietud deriva, talvez, de la ignorancia de los estudios internos del Consejo de Administración y del conocimiento que se le ha dado de ciertos hechos pasados, cuya exhumación provoca inútiles polémicas. Creemos interpretar el sentimiento general, diciendo que una amplia discusión sobre la uniformidad de trochas, sobre talleres nacionales de construcción de equipo, sobre arsenales y otros grandes

tópicos habría sido mejor recibida por el país que un debate público sobre un pasado sujeto a recriminaciones que pueden ser injustas y a defensas que pueden tener favorable acogida, a un pasado, al fin y al cabo, irremediable. El país quiere que, sin dejar de mano las investigaciones que ilustren y que sancionen, se atribuya importancia primordial al porvenir que debe garantizar la autonomía del ferrocarril y la acertada inversión de los gruesos créditos que se han autorizado.

Aspiración predominante de la ley que analizamos es la independencia del Estado y de la Empresa, propósito que se persigue acordando a ésta todos los elementos que requiera para su debida capitalización y, una vez otorgados, haciendo efectivamente responsables a los directores del negocio. Se ha buscado la autonomía y se ha querido fundarla en la doble base de una capitalización suficiente y de una responsabilidad efectiva. El público se ha penetrado de estos caracteres esenciales y sólo tendrá tranquilidades para el futuro cuando tenga la conciencia de que el Consejo de Administración se consagra al cumplimiento de las obligaciones de primer orden que le imponen los números 6 y 9 del artículo octavo de la ley cuyas prescripciones son:

«Corresponde al Consejo de Administración:

«8. La aprobación de los programas, pro-
« yectos definitivos de obras complementarias
« de primer establecimiento y de la adquisi-
« ción de equipo;

«9. La formación de los planos, tipos y mo-
« delos para terraplenes, obras de arte, vías,
« construcciones y material rodante.»

La empresa hasta aquí ha fracasado más por falta de recursos y de oportunidad en los aportes capitalistas, que por incuria o culpa de los hombres, y se estima que el éxito futuro está ligado a la buena organización de los servicios técnicos y al acierto de las reformas que armonicen, dentro de la ciencia del ingeniero, las peculiaridades del país, los recursos concedidos y la característica general de sus obras. Ese programa general, esas orientaciones precisas son los elementos que tranquilizarán definitivamente a la opinión y que permitirán a la dirección superior de la Empresa contraerse al desempeño de sus altos deberes sin que nadie desconfíe de un éxito que se entrega a la realización de un plan bien meditado y generalmente aceptado.

Creemos que esta es la tarea primordial del Consejo; no podemos dudar que estos estudios sean su atención preferente y por eso tenemos confianza en el acierto definitivo al cual todos tenemos obligación de cooperar, deber al que no hemos de sustraernos, pues nos promete-

mos analizar, en breve, algunos problemas fundamentales.

II

La trocha uniforme

Tres regiones de características definidas se dividen el territorio nacional, a saber:

Primera.—La región magallánica desde los mares del polo hasta Puerto Montt, sin más nucleo de vida que las explotaciones ganaderas riberanas del Estrecho y del Seno de Ultima Esperanza, establecimientos prósperos, si se quiere, pero cuyo valor es pequeño en comparación con los que pueden instalarse en los demás valles patagónicos. Es una comarca esencialmente exportadora sobre cuya importancia tantas veces hemos llamado la atención.

Segunda.—Desde el río Sama al Choapa, país del salitre y de las grandes minas de fierro y cobre con sus oasis agrícolas; provincias exportadoras también y bien ligadas a la región central por las necesidades de alimentación de sus poblaciones.

Tercera.—Entre los campos pastoriles del Sur y los desiertos del Norte, la zona central aparece como natural encadenamiento, pues

ofrece a esta última todos los productos de su suelo para mantener las masas de trabajadores y envía a la primera, o por lo menos debiera mandar, sus economías para capitalizar esos campos dilatados.

Nuestra zona agrícola, como clasificación general, corresponde a terrenos de riqueza más que mediana, y respecto a los gastos de explotación, entra en la categoría de los cultivos costosos. Ciencia, orden, economía y método deben ser los consejeros de nuestros agricultores para garantir su éxito en un país lleno de dificultades. Y si estas condiciones deben guiar a los productores mismos, en ellas deben buscar sus consejeros los auxiliares de la producción, y en especial la industria de transportes.

La distribución interna de consumos y productos en la zona agrícola y su fácil acceso a los puntos de concentración de los mercados del Norte, debe hacerse en la forma más económica posible, con el doble objetivo de asegurar la prosperidad de la zona agrícola, llegando hasta convertirla en región de exportaciones, y de facilitar la vida en la zona minera.

La tarificación barata de los ferrocarriles del Estado se impone como medida esencial para una empresa cuya función es principalmente proteccionista y debe ejercitarse sin menoscabo de la Hacienda Pública. Tales son las ideas fundamentales del programa que, a nuestro

juicio, debe desarrollar el Consejo de Administración de los Ferrocarriles.

La tarifa, dentro de los anteriores requisitos, depende sólo del capital invertido y del costo de explotación; por consiguiente, debemos tener como anhelo la capitalización mínima y la estricta economía en el movimiento anual. Esta fórmula no es una paradoja: puede tener una solución real y practicable, siempre que la Empresa de Transportes Ferroviarios se encuadre dentro de las características del país.

El principal obstáculo para la tarificación barata será entre nosotros la trocha ancha, de 1.68, incompatible con la capitalización moderada y con la explotación económica. Un kilómetro de esta vía vale casi el doble, si no más, del costo unitario en la trocha de un metro, el equipo necesario es más pesado, y por lo tanto, más caro en su adquisición y más oneroso en su remolque; el poder motor obedece a iguales constantes anti-económicas.

No es tarea nuestra el abordar en detalle el problema técnico y nos limitaremos a citar un ejemblo: una locomotora para trocha de 1.68, con igual adherencia y poder de tracción que una de un metro, pesa talvez un 60 por ciento más, cifras que manifiesta las economías que puede derivarse de la adopción de la trocha de un metro, que consideramos la normal del país.

Fundamos el concepto anterior en las siguientes razones:

Primera.—La actual red de 1.68, cara como construcción y explotación, es una parte pequeña, menos del 40 por ciento de la red actual.

Segunda.—Las vías futuras a la cordillera y a la costa se están construyendo con trocha de un metro, salvo excepciones de especiales favoritismos que no han debido tolerarse.

Tercera.—Los países vecinos, en la espera de nuestra atracción, tienen trocha de un metro.

Todas estas razones, agregadas a la del mayor coeficiente económico que hemos indicado previamente, nos inducen a plantear el problema de la unificación de la trocha de nuestra arteria principal, abandonando el ancho de 1.68 y llegando al de un metro, que nos conectará directamente con los ramales a la costa, con el longitudinal, con la red boliviana y con los ferrocarriles argentinos de la pre-cordillera oriental, que es dependencia natural de los puertos del Pacífico.

Este problema es de capital importancia para el Consejo responsable de administración de los Ferrocarriles del Estado, que debe invertir la cuantiosa suma de £ 4.710,000 en doble vía, en equipo y en estaciones. Subordinadas estas inversiones a la trocha actual, nos exponemos a no tener el capital suficiente y comprometemos la tarificación barata, que

debe ser la aspiración del Consejo, ya que ella corresponde a las necesidades del país.

Creemos que la doble vía en la arteria central debe hacerse sobre la base de la trocha uniforme de un metro, porque esta solución permite economizar talvez un millón de libras esterlinas en vía, obras de arte y equipo, suma cuantiosa que influye sobre el costo futuro de los servicios.

Dejamos planteado el problema, de cuya solución acertada depende el éxito de los ferrocarriles nacionales, como empresas autónomas, y el fomento eficaz de la riqueza privada. La trocha actual y la futura vía de un metro podrán subsistir, como coinciden en Antofagasta las vías superpuestas, por decirlo así, de 75 centímetros y de un metro, hasta que se haga la trasformación gradual del equipo y del poder motor; el régimen transitorio no es impracticable, como lo demuestra el ejemplo citado, y el sistema definitivo será la salvación de la empresa.

Hacemos votos porque el Consejo de los ferrocarriles preste atención a esta reforma fundamental, que es la llave del éxito del grave negocio que se le ha encomendado.

En nuestra próxima nota nos hemos de ocupar en la elección del equipo y en las formas de su adquisición.

III

El equipo

El viajero de ocasión que pasa cuatro o cinco días en nuestro país, en medio de los obsequios de nuestra campechana hospitalidad, se va creyendo que somos una nación absolutamente próspera; es un optimista. El observador que hace una estada más larga oye los comentarios de los círculos, recibe las impresiones de lenguas destiladoras de venenos y a fuerza de saber por Mengano que Zutano es un pícaro y por éste que aquél es un malandrín, se aleja prevenido contra un país en absoluto desconcierto; es un pesimista. El extranjero que tiene sus negocios en nuestros mercados y que va con frecuencia a Londres o Hamburgo comprueba en cada viaje un progreso; tan pronto le llama la atención el aseo de las ciudades y el pavimento de las calles, como la cultura del pueblo, la elegancia de las mujeres y, sobre todo, el mejoramiento general en todas las clases sociales que se inclinan al orden, al método, al examen de los grandes problemas con tranquilidad y sin pasiones; este viajero, que se da cuenta de la reacción, está en la justicia.

El deseo de dar soluciones a la cuestión monetaria y al problema ferroviario y la buena voluntad que ha dominado en la prensa, en el público y en el Gobierno para suministrar datos y armonizar opiniones, demuestran la exactitud de la observación que anotamos y que hemos oido expresar muchas veces en elogio de nuestra patria. Si estamos mereciendo este dictado de país que entra francamente en las regiones de progreso estable, es preciso que todas nuestras acciones se encaminen a no desmerecer ese calificativo ya que un fracaso será tanto más duro cuanto mayor sea la altura a que nos colocamos. Desde este punto de vista la organización de los Ferrocarriles del Estado, dentro de la ley regimentaria y de subsidios, tiene incalculables proyecciones ya que la red de trasportes nacionales compromete la Hacienda Pública y es la gran palanca del progreso privado.

El país requiere tarifas módicas, que se justifican por los elevados costos de la producción nacional, y esto no puede obtenerse sino con una capitalización barata de nuestras vías férreas y con grandes economías de explotación. El primero de estos puntos, la capitalización barata, es primordial, pues los gastos de explotación, tratándose de Ferrocarriles, dependen de las expensas de primer establecimiento, teniendo especial importancia la trocha

misma, como lo hemos manifestado anteriormente en estas columnas. La trocha, a su vez, influye sobre el costo del equipo, sobre su arrastre y su aprovechamiento, de donde se deriva la especial importancia que hemos atribuído a la vía misma.

Debemos apuntar algunas cifras para precisar ideas, estableciendo que es muy difícil encontrar dos líneas exactamente comparables. Tomaremos dos vías calificadas como semiaccidentadas, a saber Rayado a Papudo, con trocha de un metro, cuyo costo kilométrico es de 70,000 pesos moneda corriente y Rucapequén a Tomé, con trocha de 1.68 que llega a $ 170,000 por cada mil metros. De estos datos resulta que la trocha ancha, adoptada para Tomé, importa un mayor gasto de $ 100,000 por unidad, o sea cerca de 10 millones para toda la línea. El equipo y el poder motor guardan parecidas relaciones, que equivalen a la diferencia de utilización entre el material pesado de la trocha ancha y la dotación ligera de la vía de un metro, pudiendo decir, sin entrar en detalles técnicos, que la línea de un metro permite movilizar 100 de carga con 30 de peso muerto, y la línea ancha exige, como término medio, para 100 de carga 55 de peso en el equipo. La economía de gastos de instalación está en esa proporción de 30 a 55, de modo que si el equipo de la línea Rucapequén

a Tomé importa tres millones de pesos para la trocha ancha, sólo costará un millón seiscientos mil pesos con trocha angosta. El ahorro por inversión en equipo será de un millón cuatrocientos mil pesos que se agregan a los 10 millones de costo de la vía. Esta línea, que puede tener un tráfico de 15,000 toneladas con un recorrido medio de 80 kilómetros, está recargada con los intereses y amortización de un capital en exceso de once millones cuatrocientos mil pesos. Al 5 por ciento de interés y 2 por ciento de amortización, esto representa más de seis centavos por tonelada-kilómetro, cifra muy superior a la tarifa media actual. He aquí datos concluyentes que manifiestan, de antemano, el fracaso comercial de la empresa ligada al mantenimiento de la trocha de 1.68.

El cálculo anterior se refiere sólo a la remuneración del capital, siendo evidente que el recargo definitivo nos llevaría a considerar los mayores costos de explotación derivados del mayor peso del equipo, de sus mayores reparaciones y de los demás factores que se desprenden de las características respectivas.

Trocha de un metro y equipo de gran rendimiento son, por lo tanto, las bases en que debe apoyarse la reforma ferrocarrilera que persigue el país para estabilizar la Hacienda Pública y proteger sus industrias. Resuelto el

problema, dentro de estas normas, surge como cuestión inmediata la provisión misma del equipo, la adopción de un tipo propio del pais y, finalmente, su construcción con el mayor número posible de elementos nacionales.

La uniformidad del tipo se impone a fin de evitar la formación de esos trenes abigarrados, si se nos permite la expresión, en que al lado de una modesta bodega de 8 toneladas viaja un mastodonte de treinta mil kilógramos; el menor choque y ni aún tanto, un frenaje violento o una partida brusca, precipitan un carro sobre otro y el débil se destruye sin que salga ileso el fuerte. En estas condiciones jamás tendremos equipo bien conservado ni provisión suficiente de carros

La uniformidad que deseamos debe extenderse igualmente al poder motor, dentro de las necesidades de los servicios especiales, llegando a constituír tipos fundamentales, con mecanismos intercambiables, si fuera posible, a fin de facilitar las reparaciones y disminuír el número de unidades.

Determinados los tipos del material rodante, debe perseguirse su fabricación en el país para lo cual proponemos que, al solicitar carros y locomotoras, se establezca como condición de preferencia en las ofertas el hecho de instalar en el país una fábrica que atienda a las necesidades normales de la Empresa y que utilice

el mayor número de recursos nacionales. Una gran fabrica alemana, inglesa, francesa o norteamericana que trajera sus capitales, y el más preciado concurso de su ciencia y de su experiencia, permitirá el empleo de maderas y tapicerías nacionales, utilizará los cobres que hoy exportamos en bruto, dejará en Chile toda la mano de obra que hoy pagamos incorporada a los artículos enumerados que forman el costo del equipo y de las locomotoras y sólo saldrá del país el valor del fierro mientras no lo produzcamos.

Semejante proyecto no es una ilusión, es perfectamente practicable ya que hay trabajo bastante no sólo para nosotros sino para suministrar equipo a las naciones vecinas. Recordamos en este momento que el astillero americano que construye nuestros sub-marinos ofreció instalar una sección en Chile y semejante oferta, tratándose de un artículo de tan limitada demanda, nos induce a creer perfectamente posible la instalación de un gran taller nacional de construcción de equipo.

En cierto orden de menor importancia, este taller haría posible las reformas del equipo para adaptar a la nueva trocha los elementos que fueran quedando disponibles en la vía actual, a medida que las reparaciones fundamentales hicieran necesaria su entrada a las maestranzas.

La pronta adopción de tipos normales de locomotoras y de carros y su construcción en la forma que dejamos indicada, aparecen como el problema técnico de mayor importancia, después de la unificación de la trocha y, al recomendar su estudio, procedemos inspirados en el vivo anhelo de éxito para el Consejo de Ferrocarriles que ha tomado sobre sí la responsabilidad de organizar una Empresa que debe ser la base de nuestra prosperidad y quien nos dé las características definitivas de nación ordenada y progresista.

Unificadas las trochas, bien elegido el equipo y construído en el país, los gastos de capitalización serán los menores posibles y la buena explotación sólo dependerá de la distribución del material y del celo y de la competencia de los empleados. El aprovisionamiento de la red, ligado también a la capitalización de la Empresa, es de especial importancia y deberemos ocuparnos en este punto en una próxima ocasión.

IV

Arsenales

La naturaleza, que ha prodigado en nuestro territorio riquezas de todo orden, desde los veneros metálicos, que forman como el esque-

leto de nuestras montañas, hasta las grandes selvas que visten los faldeos y las llanuras, ha puesto también excepcionales dificultades para el trabajo hasta el punto que, siendo Chile un país muy rico, es de aquellos que necesitan mayores esfuerzos para la producción.

Esta circunstancia es una desventaja económica que nos obliga a proceder con especiales cuidados en la organización industrial, teniendo como objetivo una inversión capitalista que atenúe los inconvenientes de las especiales dificultades de trabajo. En este sistema, talvez inconscientemente, hemos ido más allá de los límites prudentes en el desarrollo de los Ferrocarriles del Estado, empresa fundamental que sirve de base y de estímulo a la explotación de las riquezas nacionales.

Nuestros Ferrocarriles han sido hasta hoy un inversión del capital de la nación a la cual no hemos exigido remuneración alguna, limitándonos a cobrar los gastos de explotación, en épocas afortunadas, y aún pagando sus déficits con entradas generales, en los últimos tiempos. Este régimen de especial protección a los productores ha necesitado sacrificios tales que su permanencia se ha hecho imposible y los poderes públicos han sancionado una ley que consagra la autonomía de los Ferrocarriles del Estado y les ordena, no sólo saldar sus gastos de explotación, sino servir los

intereses y la amortización del crédito que se les acuerda.

La empresa tendrá, en virtud de esta ley, los 120 millones que ha pedido, y en cumplimiento de ese mismo mandato, deberá consultar ocho millones cuatrocientos mil pesos por año para atender al interés de 5 por ciento y a la amortización de 2 por ciento de ese capital. El país, los productores que están directamente afectados por esta deuda y los consumidores que recibirán el contra-golpe, todos estamos interesados en la eficaz inversión de ese dinero, de modo que se produzcan tales economías de explotación que compensen esos $ 8.400,000 sin que se necesite una elevación de tarifas.

En obsequio de estas ideas hemos pedido en nuestros artículos anteriores que se adopte como base técnica de reformas la trocha uniforme de un metro, que requiere menores gastos de instalación y exige un equipo más económico en su adquisición y de mayor rendimiento en su explotación.

El material motor y de transporte, sujeto a la elección de tipos bien estudiados, debe construirse por grandes fábricas, con capitales suficientes, y de reconocida competencia que puedan aprovechar el máximo de recursos nacionales. La solución del problema así planteado se aplica a la cuestión de las grandes maes-

tranzas, que encuentran el campo natural de su actividad en la construcción misma del material y en las grandes reparaciones. Las pequeñas composturas, la habilitación diaria de locomotoras y carros, se haría en simples talleres de estaciones terminales de las zonas en que se ha dividido la red.

Al lado de estos dos grandes problemas de inmovilización de capital se presenta otro, que requiere talvez una inversión de cuatro o cinco millones de pesos, y que puede procurar una economía anual de dos millones. Nos referimos al empleo de frenos automáticos en los trenes de carga, punto que ya hemos tratado en estas columnas y que no hacemos sino recordar aquí, esperando que el Consejo de Ferrocarriles abra un concurso para adoptar un buen freno. El sistema de aire comprimido y el de vacío se disputan la supremacía en esta materia, y sólo un torneo amplio practicado en Chile, aplicado a nuestros trenes tipos y en nuestras líneas accidentadas puede ser concluyente; hacemos esta observación para prevenirnos contra el propósito de ensayar los frenos en Europa, lo que no produciría resultados tan completos como los que se necesitan para resolver sobre la gruesa inversión que hemos apuntado.

Doble vía, talleres de equipo y frenos automáticos son las grandes cuentas de capital in-

movilizado que afectarán las futuras tarifas, y al pedir un minucioso estudio de estos problemas antes de resolver el gasto necesario, contemplamos el porvenir de la Empresa y el del país. El capital movible de los Ferrocarriles debe ser objeto de iguales cuidados, de idénticas meditaciones en su inversión, teniendo excepcional interés la provisión de los artículos que requiere la explotación.

El arsenal de los Ferrocarriles del Estado, o la sección de almacén y material, como la llama la reciente ley, es el delicadísimo resorte del cual dependerá el éxito comercial de la Empresa que haya adoptado bases racionales en los gastos de primer establecimiento.

Desde el carbón y el lubricante, desde el riel y los tubos de calderos, hasta las hilachas, las tapicerías, las lamparillas eléctricas y el último perno deben ser adquiridos con economía, conservados con orden y distribuídos con oportunidad.

La economía en las compras requiere el contacto más inmediato posible entre la Empresa y el productor, evitando los intermediarios inútiles y conservando sólo los que son comercialmente indispensables.

La conservación con orden exige instalaciones adecuadas que impidan el deterioro y el robo, como serían carboneras dispuestas y equipadas a la moderna, depósitos de aceite

que permitan la verificación instantánea de las existencias, almacenes bien acondicionados y otros detalles que sería largo enumerar.

La distribución oportuna y bien fiscalizada requiere, conjuntamente con los medios para ejecutarla, la aprobación de reglamentos que permitan calcular de antemano los consumos y atender a todos los pedidos sin que nada se pierda ni haya gastos extraordinarios por una falta no prevista.

Tal importancia atribuímos a esta perfecta organización del arsenal de los Ferrocarriles, que llegamos hasta pedir que se ponga a su disposición un trasporte como el «Maipo» o el «Rancagua», que le sirvan, no sólo para distribuír sus artículos a lo largo de la costa, sino para llegar hasta los mercados extranjeros en busca de los productos que aquí no se obtienen.

Así dotados y organizados los arsenales de la Empresa podrán hacer economías anuales de tal consideración que compensen los intereses del gran capital que vamos a invertir, de modo que el acierto de esta sección será el de los Ferrocarriles mismos.

Hacemos votos porque el Consejo de Administración, que tantas responsabilidades ha aceptado, atribuya a este servicio la importancia de primer orden que le corresponde. Con buenas instalaciones y arsenal bien organiza-

do, el porvenir comercial de la Empresa queda en manos de sus empleados, cuya dedicación al servicio debe asegurarse, contemplando sus recíprocos intereses, hecho de especial importancia que estudiaremos próximamente.

V

El retiro de los empleados

El éxito de una empresa industrial capitalizada con la holgura de un tecnicismo bien entendido y provista de todos sus consumos con economía, orden y puntualidad, queda entregado a la competencia, a la laboriosidad y a la honradez del personal que interviene en su manejo.

Desde este punto de vista, absolutamente general, las tres condiciones son exigibles en todo el escalafón ferrocarrilero, a cada grado según su función. El Director general debe tener todo el conocimiento de su ramo, inquebrantable espíritu de trabajo y especialísimas cautelas por las inversiones y, como él, los ingenieros que se estrenan en el servicio, deben vivir consagrados a la práctica y al estudio conscientes en cada momento de que forman parte de un gran mecanismo económico, vivi-

ficador de la vida nacional, cuyo buen rendimiento depende especialmente de la correcta función de cada uno de sus órganos.

Al lado de esta jerarquía de técnicos debe desarrollarse, en idéntica atmósfera de competencia y de trabajo, la serie de hombres que conducen los trenes, que dirigen las estaciones que distribuyen los consumos y que verifican los gastos. El estudiante de comercio, que entra a la venta de boletos, debe consagrarse a su servicio para estar siempre listo para ascender; el alumno de la Escuela de Artes, que practica de tornero, debe pensar que algún día, desde el manubrio de su locomotora, tendrá la responsabilidad de las vidas de los hombres que corren bajo su confianza a 60 kilómetros por hora; el telegrafista, que transmite las órdenes de movilización pensará que su destino será el de llegar a dirigir el tráfico y así toda esta jerarquía deberá prepararse por su constante labor a su propio mejoramiento, que encontrará su origen en el éxito mismo de la empresa.

Los últimos en el escalafón, aquellos que por su educación sólo tienen limitados horizontes, deben encontrar en sus dedicaciones al servicio el aprendizaje que los prepare para puestos más delicados, que serán una verdadera recompensa de sus esfuerzos.

Para que los hombres que trabajan en los Ferrocarriles del Estado tengan el empeñoso

afán que traducen las ideas anteriores, se requiere que en el servicio de la empresa encuentren no sólo la satisfacción de su vida activa, sino la tranquilidad para sus años de decadencia; en una palabra, si ellos entregan todas sus energías al éxito de la obra, es justo que de ella reclamen la asistencia cuando sus fuerzas se agoten. La exigencia de esa dedicación exclusiva y de todo momento, debe tener como compensación las seguridades del porvenir. Dentro de este criterio todo individuo, ilustrado o inculto, grande o pequeño, que se incorpore a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, estará dispuesto a consagrarle toda su vida, puesto que en su trabajo encontrará el bienestar de hoy y las futuras tranquilidades de su hogar.

De nada servirán las instalaciones bien consultadas y los reglamentos severos, si no se cuenta con un personal verdaderamente interesado en el éxito del negocio; un cuerpo de empleados descontentos, sin garantías suficientes, estará siempre buscando algo mejor, o distrayéndose en otros trabajos que equilibren sus necesidades. Semejantes funcionarios producirán perjuicios superiores a los que se derivan de las imperfecciones técnicas o reglamentarias.

La nueva ley de ferrocarriles ha consultado esta idea general estableciendo que el 6 % de

las utilidades servirá para gratificar a los empleados de los tres grados superiores y el 10% formará el fondo de gratificaciones del resto del personal a contrata o a jornal. Esta disposición, que liga a los ferrocarrileros al porvenir de la Empresa, es buena; pero, a más de ser eventual, a nuestro juicio, no es suficiente.

Esa participación en las utilidades corresponde a las necesidades actuales y el máximo de eficacia de los trabajadores exige que se contemplen sus necesidades futuras y que se arbitren los medios de asegurarles un retiro holgado cuando sus fuerzas declinen y principien a ser menos eficaces sus servicios. Esta segunda condición equivale a la incorporación definitiva del individuo a la Empresa, que pasa a ser la encarnación de sus propios esfuerzos.

La ley de retiro de los empleados de los ferrocarriles, en la forma moderna de la constitución de un capital adecuado, y no sujeta al viejo y anti-económico sistema de pensiones, se impone como la gran medida de orden superior que estabilizará y perfeccionará al personal. Hace más de 10 años esta idea fué propuesta por un Ministro conservador, que deseaba agrupar a todos los dependientes de la repartición de Obras Públicas en una gran Caja de Retiro que debía funcionar con las economías del personal y con una pequeña imposición fiscal. Contaba ese Ministro con la buena volun-

tad de los subalternos y con el espíritu de corporación que daría especial impulso a la institución. La idea fué examinada, se encontró buena y alguien quiso hacerla mejor, extendiendo el programa a todos los asalariados de la nación. Sucedió lo que debía acontecer; surgieron dificultades entre las diferentes categorías de servidores y la ley mejor impidió el paso de la buena y la que debía ser hermosa realidad, es un simple legajo de papel en un archivo.

Tiempo es de reaccionar, aplicando al servicio de los ferrocarriles las disposiciones del retiro, que llamaremos capitalista, poderoso estímulo que introducirá especiales perfecciones en el personal. Bastaría con imponer una cuota de ahorro, en que participaran el funcionario y la Empresa, y combinar esta obligación con la de una prima de seguro para garantir a cada empleado su retiro en condiciones que la renta del capital formado resulte prácticamente igual a su mayor salario.

La Caja así formada necesitará recursos iniciales, que pueden encontrarse en las economías racionales del programa de capitalización, y, para su funcionamiento posterior, sólo requiere la imposición del ahorro del asalariado y la cuota de la Empresa. Esta última partida, que puede deducirse de las utilidades, no podrá nunca ser un gravamen para los ferrocarri-

les, ya que ella importará siempre una suma menor que las jubilaciones interminables y las indemnizaciones por accidentes.

No dudamos que el Consejo de Ferrocarriles, tan pronto como haya terminado sus tareas primordiales de inversión de capital, se ha de ocupar en este importante problema del retiro de los empleados que es el secreto moral, por decirlo así, del éxito en el manejo de la Empresa.

El retiro capitalista de los empleados de los ferrocarriles, en las condiciones de menor gravamen para el patrón y del máximo de ventajas para el asalariado, completa así el programa que hemos estudiado y que condensaremos en una nota de resumen.

VI

Nuestro programa

Cuestión fundamental, que interesa al equilibrio de la Hacienda Pública y al fomento racional de la riqueza privada es la reorganización de los Ferrocarriles del Estado. El desorden en esta empresa industrial se traduce en un gravamen nacional que afecta, en las postreras liquidaciones, a todos nuestros elementos económicos.

El gremio de productores ha dispuesto hasta hoy de los favores de una tarifa baja, como ha aprovechado también de los recursos nacionales para la atención de servicios meramente locales, casi particulares. Las pérdidas de los ferrocarriles y sus inversiones precipitadas y sin método y la subrogación del Fisco en los deberes del Municipio han acarreado los déficits constantes del presupuesto. El pais ha meditado sobre las anomalías de la situación y ha dictado las líneas generales de un gran programa: la Comuna debe compensar sus servicios al Estado y los ferrocarriles deben costear sus gastos. Del primer principio se ha derivado la contribución directa, que en breve será un hecho, y del segundo ha nacido la ley de autonomía de los ferrocarriles, que ya es una realidad y que esperamos ver traducida en un éxito completo.

Estas expectativas deben realizarse dentro del ideal de proteccionismo industrial, que es la característica de nuestra instalación ferroviaria, y sin gravar las rentas generales de la nación, doble condición que ordena especiales cuidados en la administración y que, de hoy en adelante, el ferrocarril sirva los capitales que se le conceden.

La inversión de este dinero decidirá las futuras tarifas y de ahí el gran interés que demostramos por la elección de un programa de

instalaciones económicas en su adquisición y de gran rendimiento en la explotación, a fin de que las ventajas que ellas procuren compensen el servicio del nuevo capital suministrado.

Hemos estudiado los puntos principales de ese programa y hoy debemos condensarlo en la forma precisa de nuestras aspiraciones.

PRIMERO.—TROCHA UNIFORME DE UN METRO. —El crédito acordado a la Empsesa consulta 35 millones para el mejoramiento de la vía, de los cuales 14 se refieren a la construcción de unos 200 kilómetros de doble vía que completarán este sistema desde Valparaíso a Llay-Llay, de Santiago a San Fernando y de San Rosendo a Talcahuano. Se ve que la Empresa busca el ensanche en los puntos más cargados en absoluto y nosotros, sin criticar el acuerdo, hacemos presente que iguales consideraciones se extienden a la sección Santiago-San Antonio, San Fernando-Talca y Chillán-San Rosendo; si los primeros trozos son de importancia, no son menos considerables los segundos. Así, en vez de 200 kilómetros de doble vía, necesitamos 500 y el gasto deberá ser de 35 millones en vez de 14 si la vía es de 1.68. En cambio, si construímos la doble vía de un metro, ese gasto de 35 millones será sólo de 23, o sea un exceso de 9 millones sobre el presupuesto actual que nos proporcionará una doble vía completa.

Tal es nuestro programa, y deseamos que se estudie formalmente la unificación de la trocha, amoldándonos a las características del territorio.

SEGUNDO.— CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO EN EL PAÍS Y FIJACIÓN DE TIPOS NORMALES.—La ley concede 42 millones para equipo y 15 millones para maestranzas, sumas en las cuales se harán grandes economías si se adopta la trocha de un metro. Si, con igual eficacia, el material de tracción y el de transporte cuestan 25 por ciento menos para la trocha angosta, tendríamos una economía superior a diez millones, que compensa la mayor inversión en doble vía.

Además, si el equipo se construye en el país, pidiendo propuestas a las grandes fábricas y ofreciendo preferencia en la aceptación a quien ofrezca instalar su taller en Chile, resolveremos con grande economía el problema de maestranzas, cuyo cálculo de 15 millones puede dejar un saldo que se destina a otros servicios.

Finalmente, la combinación de la doble vía de un metro y del equipo correspondiente producirán las grandes ventajas propias de una línea de gran rendimiento y de un material bien aprovechado.

TERCERO.—FRENOS AUTOMÁTICOS.—El equipo de carga debe estar provisto de estos frenos, cuya elección se hará mediante un con-

curso realizado en el país, con nuestros trenes tipos y en las condiciones más desfavorables de nuestro trazado. El ensayo comparativo hecho en Europa o en Norte América no puede ser concluyente y nos exponemos a una inversión desacertada, que puede hacer ilusoria la economía de 2 o 3 millones de pesos que procurará la reforma.

CUARTO.—ARSENALES DE LOS FERROCARRILES.—La acertada elección de tipos de obras que requiere la inmovilización de capitales que comprenden los párrafos anteriores debe completarse con el buen manejo del capital movible y principalmente con el suministro de materiales.

La economía en las compras, el orden en la conservación y la oportunidad en la distribución, deben aplicarse dando a esta sección una organización que le permita el acceso directo al productor del material y todos los elementos que requiera para la mantención y transporte de sus mercaderías. Creemos, en especial, que los arsenales deben disponer de elementos de transporte marítimo, cuya intervención procurará grandes economías.

QUINTO.—RETIRO DEL PERSONAL.—La organización capitalista que dejamos indicada debe completarse con las medidas que aseguren la competencia y la dedicación del personal. La ley contempla la participación en los beneficios,

disposición buena pero eventual e insuficiente, ya que es necesario tener en vista el porvenir del empleado, único modo de incorporarlo a firme en los negocios de la Empresa.

Una ley de retiro capitalista, fundada en la accion común del patrón y del asalariado, será la menos gravosa para el primero y la más conveniente para el segundo, pues descansa en el mejor aprovechamiento del esfuerzo humano.

Tales son las líneas generales del programa de «La Unión», cuyas ideas deben estudiarse por los técnicos de la Empresa y por el Consejo de Administración, ya que ellos están orientados hacia la solución que debe armonizar la baratura de fletes y el equilibrio de la Empresa.

EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS

Editoriales de "LA UNIÓN"

EL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS

I

Su necesidad

La organización industrial del país no ha sido jamás acometida con un criterio fijo, apesar de que tan importante negocio es, en el fondo, esencialmente una cuestión de gobierno. La superior dirección de nuestras industrias no ha existido y es natural que todas ellas se resientan de la falta de esas orientaciones precisas que deben derivarse del estudio de un plan de conjunto, y que todas sufran por la carencia de un apoyo racionalmente constituído y caracterizado por su eficacia real y por la seguridad de la constancia en las medidas arbitradas.

Estimamos que la organización industrial es

tarea esencialmente de Gobierno y lamentamos que no se haya tenido conciencia cabal de este gran deber de la administración pública, obligación cuyo cumplimiento nos hubiera economizado mucho dinero y grandes decepciones. Sin embargo, la noción de este deber ha existido y se ha revelado en algunas ocasiones; más, ha surgido en los programas de candidaturas o en las exposiciones ministeriales como simples promesas, honrada promesa, si se quiere, pero efímeras como suelen ser todas las aspiraciones planteadas para conquistar una posición determinada con fines que no son precisamente los del deseo formulado.

En estas condiciones, los grandes negocios agrícolas han vivido bajo la tutela de la Sociedad Nacional de Agricultura, que hace cuanto puede; la minería se ha cobijado bajo el ala protectora de una sociedad laboriosa, pero cuya eficacia no ha sido suficiente para interesar a los nacionales en las grandes empresas de su ramo, y la industria misma ha elegido el patrocinio de una agrupación de fabricantes cuya acción, por activa que sea, no tendrá jamás las proyeciones de una gran dirección en posesión de todos los datos que ilustran y de todos los elementos que auxilian.

Débiles, y siempre inseguros, han sido los lazos que han unido al Gobierno con las tres sociedades nacionales de Agricultura, de Mi-

nería y Fomento Fabril, y no es extraño que jamás haya podido implantarse el programa racional de protección que consideramos indispensable. Las medidas fundamentales, las que tienden a dar facilidades para la extracción y transporte de las materias primas, agrícolas y mineras, que absorberá la industria fabril, no han sido jamás objeto de un meditado estudio y todo se ha resuelto por el método, rápido en su acción momentánea, pero perjudicial en sus efectos permanentes, de los tributos aduaneros. Estos pueden ser, bajo este aspecto, necesarios como condición de defensa, pero aquellas medidas industriales son indispensables como condición de existencia.

Nada manifiesta mejor el abandono de todo plan superior, que nuestras inversiones en Obras Públicas. Tenemos a la vista un detalle de lo gastado desde 1906 a 1912 inclusive, documento del cual se desprende que, en esos 7 años, hemos invertido doscientos treinta millones de pesos de 10 penique en ferrocarriles, caminos, edificios, servicios cartográficos y otros. En esta suma corresponden 156 millones a la construcción de ferrocarriles, siendo de notar que, hasta la fecha indicada, la inversión en el longitudinal y en la línea de Arica, alcanzaba a 134 millones, lo que deja un saldo de 22 millones para las demás construcciones ferroviarias

Este dato revela una distribución que debemos llamar monstruosa; la región productora del país, que reclama doble vía, ramales a la costa, accesos a los valles cordilleranos y otras obras parecidas, sólo ha recibido 22 millones contra 134 gastados en construcciones, importantes si se quiere, pero cuya prosecución ha debido obedecer a un plan más en armonía con las necesidades presentes y con los recursos de la nación.

Si hubiéramos tenido programa, ciertamente habríamos procedido con menos precipitación en los contratos del longitudinal, atendiendo mejor a la región central cuyas necesidades son imperiosas, carácter que no tenía la zona del Norte, cuyas exigencias se habrían satisfecho con ramales a los puertos postergando las conexiones de los arranques internos de estas vías.

Los puentes y caminos han absorbido 22 millones y no es de extrañarse que esta suma, distribuída en siete años, no haya sido suficiente para establecer nuestra viabilidad, tan especialmente afectada por las pendientes del terreno y por las peculiaridades del clima.

Veintiséis millones han consumido las obras hidráulicas en el mismo tiempo, suma también exigua para atender a los servicios higiénicos de nuestras grandes poblaciones y al fomento de las empresas de riego.

La distribución de los gastos no ha sido, por lo tanto, acertada, oportuna, ni equitativa, y no es de extrañarse que suma tan considerable, invertida sin orden, no haya producido los resultados que se perseguían.

De nuestros datos se desprende aún otra dolorosa conclusión: esos 230 millones de pesos moneda corriente, provienen de empréstitos para ferrocarriles, hasta por 135 millones, y tal vez unos 5 millones han venido de igual fuente para obras hidráulicas. Así, solamente el saldo, o sea 90 millones han salido de nuestros recursos ordinarios. Ahora bien, la entrada del salitre, en esos siete años, no ha sido inferior a 900 millones, de modo que sólo hemos invertido un 10% de ese verdadero capital, que estamos considerando como renta, en compensar la cuenta de la riqueza fiscal. Es preciso reaccionar vivamente sobre tan desacertados procedimientos y pedir una mayor inversión en obras públicas, un plan metódico de gastos, y la realización de un programa fundamental de protección a las industrias basado en la construcción de obras reproductivas.

Sabemos que la Dirección General del ramo tiene estudios detallados sobre el particular, en cuyo análisis nos ocuparemos próximamente.

II

Su desarrollo

¡Mal que se conoce no es mal! dice el viejo proverbio y el país, que está experimentando las funestas consecuencia del régimen de las inestabilidades, hace sentir sus clamores por los sistemas permanentes, desde la moneda fija, que es como el flujo que mueve la máquina, hasta los Gabinetes duraderos, que son los verdaderos directores de la marcha incesante hacia el progreso.

Como medio de garantir esas estabilidades de primera magnitud, se requiere la aprobación de programas que orienten nuestras relaciones internacionales hacia los tratados comerciales, que son prendas de paz y de bien meditados planes de protección industrial que nos coloquen en situación favorable para pactar esos convenios con nuestros vecinos.

Ese progama práctico de fomento a las industrias es la idea que debemos perseguir con toda la tenacidad que ha caracterizado el asombroso éxito de Norte América. Hasta hoy la orientación que deseamos ha sido un simple deseo y la carencia de ella ha provocado los males que evidenciamos en notas anteriores: hemos gastado mucho en obras de utilidad

remota y se ha invertido poco en trabajos impostergables y, además, casi todo lo hemos hecho con el crédito, pudiendo realizarlo con recursos propios.

La Dirección de Obras Públicas ha preparado numerosos programas que han recibido la aprobación ministerial, pero que jamás han recibido sanción legislativa; todos ellos han sido buenos y, en especial, merece este calificativo el que tenemos a la vista. Propone esta oficina invertir, en el término de diez años, hasta 316 millones de pesos, moneda corriente, de acuerdo con el siguiente detalle:

Ferrocarriles, $ 125.000.000.
Obras hidráulicas, $ 67.000,000.
Puentes y Caminos, $ 52.000,000.
Edificios, $ 62.000,000.
Geografía y Minas, $ 10.000,000.

El plan ferroviario se ha calculado en armonía con el desarrollo que han de provocar las grandes líneas ya construídas y con él se armonizan el mejoramiento de 159 vías carreteras y la ejecución de 275 puentes. El enunciado de estas cifras basta para revelar las grandes necesidades del país en materia de tráfico, necesidades cuyo remedio es mucho más eficaz que las protecciones efímeras del régimen aduanero.

Las obras hidráulicas consultan la provisión de agua potable de 67 ciudades y los servicios higiénicos de 28 agrupaciones, cifras que a su vez revelan las urgencias de una ley que contribuye a nuestro progreso, dirigiéndose a fortificar su base principal, a salvar al hombre que es el creador de riqueza por excelencia.

En materia de edificios se consultan, además de las grandes construcciones de los palacios de la Moneda y de los Tribunales, 7 intendencias o gobernaciones, 38 establecimientos de policía y 32 institutos de educación. De nuevo las cifras dan testimonio elocuente de las exigencias del país en materia de orden administrativo, de garantías de seguridad y de preparación de los hombres para la lucha por la vida.

El programa que acabamos de analizar está bien estudiado por la Dirección de Obras Públicas, tanto en la valorización previa de los trabajos como en el orden de preferencia para su ejecución, debiendo completarse con el plan de construcciones portuarias elaborado por la Comisión que funciona como dependencia del Ministerio de Hacienda. El conjunto de los trabajos marítimos que ha propuesto esta repartición administrativa llega a 85 millones de pesos de 10 peniques, según nuestros recuerdos, y abraza cinco grandes puertos: Arica, Antofagasta, Talcahuano, Lebu y Valdivia.

Agregada esta suma al programa de la Dirección de Obras Públicas, daría un total de 400 millones que, distribuído en 10 años, a razón de 40 millones por año, permitiría realizar en ese plazo brevísimo la espléndida plataforma industrial encarnada en ese programa que mejora los caminos, que construye ferrocarriles, que habilita puertos, que permite garantir la seguridad interna y que prepara hombres para el trabajo.

En esos mismos diez años las entradas por exportación de salitre y yodo no serán inferiores a mil 600 millones, aún contando con la exportación actual solamente, de modo que bastará con dedicar la cuarta parte de esos recursos, que debemos considerar como extraordinarios, a desarrollar una riqueza que pueda reemplazar al salitre mismo como fuente tributaria.

Formulamos pues, con claridad nuestro deseo: debe sancionarse el plan de obras públicas que hemos analizado en sus líneas generales, afectando a su costo un 25 por ciento, por lo menos, de las entradas salitreras.

Cuando esto se realice, cuando hayan pasado esos diez años, nuestros sucesores han de comparar el rendimiento en los 10 años de desorden, que han sido nuestra herencia, con la eficacia de 10 años de orden que son nuestra aspiración y, ciertamente, rendirán los ho-

menajes de la gratitud a los hombres de carácter que impongan las nuevas prácticas.

El plan está trazado y para realizarlo no faltan organismos administrativos que den garantías de acierto, como lo evidenciaremos próximamente.

III

Los ingenieros

¡Un grande de España en la Puerta del Sol! Ni más ni menos somos nosotros en materia de actividad; nos seduce el desfile de grandezas y millones que pasan por la mente y no tenemos el gesto varonil del hombre de acción que adivina esos poderíos y esos tesoros y se arroja a la arena de la lucha por el progreso para trocar en realidad esas ilusiones.

Como en la plaza recordada se cantan las hazañas del Cid y de don Juan y como se recuerdan las riquezas de Méjico y de Potosí, así nosotros vivimos en las glorias del pasado y enumerando los campos pastoriles de Magallanes, las selvas del Sur, los campos por regar y las minas por explotar. Fuerza es que soñemos menos y que hagamos más y fuerza es que los directores del país encaminen a los hombres por estos senderos que llevan a la

utilización de la naturaleza por el trabajo del hombre.

Se hace indispensable acentuar nuestra actividad, preparando los medios de hacerla útil, y en especial por las facilidades de acceso a las minas y a los campos, de transporte interno de los productos y de su entrega a los mercados mundiales, sin olvidar lo que concierne a la preparación del hombre para esta campaña industrial. Todo esto lo obtendremos por la aplicación del programa que antes hemos analizado, y que comprende el mejoramiento de caminos, la construcción de ferrocarriles, el establecimiento de servicios higiénicos, la edificación escolar y las grandes exploraciones del territorio, temas que ha desarrollado la Dirección de Obras Públicas, y el mejoramiento de las estaciones marítimas de comercio que ha propuesto la Comisión de Puertos.

Las concepciones de esos distinguidos grupos de ingenieros nacionales se han desarrollado dentro de un plan que guarda armonía con el progreso del país y que concuerda con nuestros recursos. Esta última circunstancia es de especiales relieves ya que, según lo hemos visto, con sólo dedicar por año la cuarta parte de la entrada salitrera crearemos una riqueza que doblará, por lo menos, la fortuna privada, natural asiento del bienestar del Estado.

Es altamente satisfactorio dejar constancia

de que son chilenos, preparados en nuestros grandes establecimientos de educación superior tanto fiscales como particulares, los ingenieros que día a día resuelven los difíciles problemas del trazado ferroviario y de las grandes construcciones marítimas.

El país, así, no sólo cuenta con recursos para sus obras, tiene además hombres preparados para ejecutarlas. Y llegamos al punto más delicado del problema, a la organización de este servicio técnico que será la llave del éxito definitivo del plan de obras públicas que anhelamos.

Hay dos tendencias; quieren unos que cada Ministerio tenga el grupo técnico de sus servicios y otros desean una centralización completa de este ramo. A nuestro juicio, la razón completa no está en ninguno de los dos bandos.

En materia de obras públicas debemos distinguir tres etapas: estudio, construcción y explotación. Esta última es la que debe corresponder a distintas reparticiones administrativas; por ejemplo, las obras de higiene al Ministerio del Interior, los puertos al Ministerio de Hacienda.

El estudio y la construcción son problemas esencialmente técnicos y deben, por lo tanto, agruparse en una sola entidad, tan subdividida como sea necesario, pero de tal modo centralizada que todas sus secciones puedan prestarse

el mutuo concurso de su material, de sus hombres y de su ciencia, con economía en los procedimientos y sin invasión de atribuciones.

La obra que estudie y que construya la gran repartición técnica pasará en seguida al departamento que debe utilizarla, quien toma a su cargo su conservación, no pudiendo acudir a los técnicos sino en los casos que hagan necesaria su intervención. Esta división engendra las responsabilidades, pues el que va a explotar un ferrocarril o un puerto, exigirá su recepción en condiciones adecuadas y, por lo mismo, tratará de conservar las obras de modo que se asegure su mayor duración, su perpetuidad.

Y si este sistema genera las responsabilidades, también produce la ejecución de obras bien concebidas, ya que las entidades que harán la explotación exigirán, en los estudios y en la construcción, todas las condiciones propias de la utilización que se tiene en vista.

Responsabilicemos los estudios y la construcción por medio de la centralización técnica, y responsabilicemos la explotación por medio de órganos adecuados en cada Ministerio, creando entre ambos sistemas lazos que aseguren el éxito. Tal es el principio general cuya forma práctica esbozaremos próximamente.

IV

La organización administrativa

Los organismos de administración deben tener toda la independencia necesaria para la eficacia de su acción, todas las relaciones que aseguren esa eficacia con las mayores economías y una centralización suficiente para mantener la economía y para hacer posible, instantáneamente, las verificaciones del Gobierno.

Esta doctrina es de particular aplicación al cuerpo técnico que estudia, construye y explota las obras públicas, acentuándose más la conveniencia de la descentralización en la actividad y de la centralización en las verificaciones, por la necesidad de establecer las responsabilidades en la concepción de los trabajos, en su ejecución y en su aprovechamiento. En esta materia, el manejo de los intereses fiscales no puede ser distinto de la dirección en los negocios industriales. El salitrero, por ejemplo, que desea explotar una pampa, confía a un ingeniero las normas generales para el estudio de su máquina y cuenta con una responsabilidad para su éxito; los planos son entregados para su ejecución a entidades que responden de los materiales y de la construcción, he aquí una segunda garantía; finalmente, el salitrero, por

intermedio de sus administradores, recibe una máquina correcta y en funciones y hace pesar sobre estos últimos la responsabilidad final.

La dirección central no se ha perdido y la iniciativa individual ha dado todos sus frutos; tal es el sistema que deseamos ver instalado en las obras públicas.

En la actualidad los servicios técnicos no tienen centralización suficiente, pues no hay casi Ministerio que no tenga un cuerpo de ingenieros, circunstancia que, salvo casos muy contados, no se armoniza con el régimen del mejor acierto y del máximo de economías. El cuerpo principal es la Dirección de Obras Públicas que tiene cinco grandes sub-divisiones, a saber, *ferrocarriles*, *obras hidráulicas*, *puentes y caminos*, *arquitectura y minas*, *y geografía*. A éstas debemos agregar la *contaduría* que constituye el centro de los empleados administrativos, propiamente tales, de este gran rodaje técnico.

La Dirección de Obras Públicas requiere una reorganización que consulte todos los caracteres de acierto que acabamos de indicar. Cada una de sus grandes inspecciones debe consultar las secciones responsables de estudio y de construcción y deben incorporarse en ella todos los servicios de este orden que están dispersos en los demás Ministerios, creando las inspecciones necesarias. Centralizado de

este modo el servicio técnico, los procedimientos de todo orden tendrán mucha sencillez y la ayuda mutua de las diferentes secciones engendrará grandes economías. Reglamentos apropiados fijarían las atribuciones del Director General y las del Consejo, teniendo en vista que jamás las resoluciones colectivas puedan atenuar las responsabilidades particulares.

Hasta aquí tenemos, gracias a la aplicación de la doctrina que dejamos expuesta, garantido el éxito en los estudios y en la construcción, bastando para asegurar el acierto en la explotación crear un lazo eficaz entre la identidad técnica y la repartición administrativa que aprovechará de una obra determinada. Por ejemplo, los inspectores generales de los ferrocarriles en estudio y en construcción deben formar parte del Consejo Administrativo de la Red en explotación; los jefes técnicos del servicio de agua potable y alcantarillado deben figurar en el Consejo de Higiene, entidad que es indispensable crear en el Ministerio del Interior; los arquitectos que dirigen los estudios y la construcción de edificios pertenecerán a los consejos especiales de cada Ministerio. La sección de geografía y minas deberá tener su representante en las corporaciones creadas para el reconocimiento de nuestras riquezas de todo orden.

De una manera particularísima, en vista de

las novedades del problema, de su grande extensión y de la concentración de servicios que se produce en los puertos, los técnicos que dirigen su estudio y su construcción deben tener especiales adherencias con el Ministerio de Hacienda a quien corresponde la explotación.

En este último caso, como en el de los ferrocarriles, están claramente indicadas las situaciones del personal que aseguren el éxito: cuerpos técnicos con independencia que hagan posibles las responsabilidades y comisiones o consejos, como quiera llamárseles, adheridos al Departamento Administrativo que explota las obras y constituídos de tal modo que las responsabilidades sean siempre efectivas.

Tal es la organización administrativa que deseamos; ella existe más o menos desarrollada y sólo se trata de ordenarla, de fijar órbitas de acción como quien dice, a fin de asegurar un funcionamiento correcto y económico. La permanencia de los técnicos en sus puestos será la llave del éxito definitivo, punto de especial importancia en cuyo estudio nos ocuparemos próximamente.

V

La permanencia del personal

La centralización de los cuerpos técnicos en una sola repartición administrativa dentro de un régimen de independencia y de mutuo apoyo y la formación en los respectivos ministerios de consejos o comisiones, formados principalmente por los administradores de las obras que se explotan y por los jefes de los servicios técnicos, es la organización más perfecta que puede alcanzar el Estado en la dirección de los negocios que tienen en todas sus etapas un carácter industrial, como son los ferrocarriles y los puertos, y aún en aquellos que sólo entran en esa categoría durante sus períodos de estudios y de construcción, como los servicios higiénicos, la edificación de toda suerte, el reconocimiento del territorio y otros.

Y hemos dicho que es la organización más perfecta, porque es la más económica y la más eficaz; lo primero, porque la agrupación técnica evita muchos gastos inútiles y porque las estrechas relaciones entre los que estudian y construyen con los que administran engendrará la concepción de obras de poco costo y gran rendimiento; lo segundo, porque la independencia de las diferentes secciones crea respon-

sabilidades que aseguran la buena inversión de los dineros públicos y la correcta administración de las empresas industriales del Estado.

Con un sistema como el que proponemos, el plan de obras públicas está a cubierto de las oscilaciones de la política y de los vaivenes ministeriales, que tan pronto paralizan los trabajos, si la característica gubernativa es de timideces exageradas, como les dan impulsos excesivos que ocasionan costos elevados, si el gabinete se deja arrastrar por entusiasmos momentáneos. Sólo dentro de la estabilidad del régimen se puede encontrar el acierto; y como esta condición se llena más fácilmente en el orden administrativo que en el político, es indispensable organizar las oficinas de obras públicas dentro de los programas de trabajo que hemos indicado y del orden funcionario que estamos apuntando. La dedicación a un fin preciso y bien mantenido y la seguridad de un ejercicio profesional garantido por su permanencia y estimulado por las responsabilidades, son las condiciones indispensables para asegurar al Estado la cooperación de los mejores técnicos que se preparan en la Universidad Oficial o en la Universidad Católica.

Esta última institución ha procurado al país muy buenos servidores y, en tesis general, ha producido el beneficio incalculable de estimular al establecimiento fiscal, que ha mejorado sus

métodos gracias a la fundación de los grandes filántropos católicos. Esta noble lucha, tanto más noble, cuanto que la Universidad Católica se ha formado en el inadecuado ambiente de la falta de libertad, ha producido los excelentes resultados que enunciamos y que, en el orden general, significan el mejoramiento de la enseñanza y, en una esfera más restringida, importan el ofrecimiento para los servicios públicos de hombres bien preparados, tan bien preparados que podemos decir con legítimo orgullo que el país no necesita del concurso extranjero para ninguno de sus grandes problemas técnicos. Ambas Universidades pueden suministrar ingenieros capaces de construir nuestros grandes puertos y de hacer las grandes captaciones de fuerzas hidráulicas, pasando por todos los detalles industriales que el país encierra entre Los Andes y el Pacífico.

Conveniencia del Estado es asegurar para sí estos servicios, de modo que sus trabajos no sirvan de práctica, de complemento universitario, como sucede con gran número de ingenieros que pasan por las oficinas técnicas y son arrebatados por la industria privada. Esto, que es bueno para el país, no lo es para el Fisco y debe ponerle pronto remedio, garantizando a sus ingenieros la permanencia en sus funciones y otorgándoles garantías para el porvenir.

Lo primero se obtiene con el plan de Obras

Públicas, y lo segundo, con la ley de retiro capitalista dentro de la fórmula general, que es nuestra aspiración. Esto es tanto más necesario cuanto que el abandono en que se deja a los servidores envejecidos en el trabajo, aleja a los ingenieros del deseo de incorporarse al servicio del Estado. Conocemos el caso de un ingeniero de ferrocarriles que ha trabajado 30 años en el terreno y que deberá retirarse en la miseria; sabemos de otro que, después de 25 años ha contraido una grave enfermedad pulmonar y está en igual situación; apuntaremos la suerte de un buen servidor que sufrió un accidente, fiscalizando la construcción del longitudinal, y que gastó en médicos todos sus ahorros, y hoy no tiene ni empleo ni pan; y finalmente, el más doloroso, que merece un párrafo aparte.

Un ingeniero distinguido a cargo de una obra difícil, trabajó en ella con tal esfuerzo, que después de un año de incesante labor, que le dejaba sólo 5 o 6 horas de reposo diario, perdió sus facultades mentales y es hoy huésped de un asilo de enajenados. ¡Un loco y una familia en la miseria! Semejante porvenir a nadie estimula para servir al Estado.

Insistimos en que, por la propia conveniencia de los negocios públicos, se tienda a la incorporación definitiva de los ingenieros al servicio fiscal, por medio de una ley de retiro

capitalista. Todo el personal técnico gana talvez unos cuatro millones de pesos, y bastará con exigirles una economía de 10 % de su sueldo, imponiendo al Estado un 5%, y combinar este sistema con una prima de seguros para garantir a cada ingeniero en su retiro la posesión de un capital que equivalga a su mayor renta. Este sistema, que asegura al Estado los mejores técnicos, es, al propio tiempo, el más económico, ya que la cuota anual del Fisco será menor que los egresos por jubilaciones.

Después de cimentada esta base del éxito en el desarrollo de nuestras obras públicas, condensamos nuestro programa.

Primero.—Aprobación de un plan metódico de ferrocarriles, caminos, puentes, obras de higiene, ejecución de canales y construcción de puertos comerciales.

Segundo.—Dedicar a ese programa la cuarta parte de las entradas salitreras, o sean unos 40 millones de pesos moneda corriente, sin acudir a empréstitos externos.

Tercero.—Concentrar los servicios técnicos y establecer los servicios de consejos o comisiones administrativas en los ministerios que exploten las Obras públicas, dando intervención a los técnicos y dictando reglamentos que hagan efectivas las responsabilidades.

Cuarto.—Estabilidad de los empleados y

retiro capitalista para los funcionarios de Obras Públicas.

Tales son las reglas generales que hemos de seguir en esta materia, pues ellas garantizan la ejecución de un programa y aseguran al Estado los mejores elementos para su realización.

EL SISTEMA TRIBUTARIO
Artículos de FRANCISCO RIVAS VICUÑA

EL SISTEMA TRIBUTARIO

Artículos de FRANCISCO RIVAS VICUÑA



EL SISTEMA TRIBUTARIO

Artículos de FRANCISCO RIVAS VICUÑA

EL RÉGIMEN TRIBUTARIO

Discurso pronunciado en la Gran Convención Conservadora de Septiembre de 1913

Señores:

Vais a oír la palabra de un hombre que se precia de no tener ambición alguna, que en la vida privada sólo aspira al modesto bienestar de los suyos y para quien la vida pública tiene el único halago del triunfo de la idea que es la fuerza de la causa. Cuando se vive en esta libertad del espíritu, la verdad que impresiona el pensamiento baja a los labios con toda su hermosa desnudez y desde el corazón suben a la boca como ondas de energía que obligan, con fuerza superior, a decir esa verdad con toda la precisión de lo que es justo y con todo el entusiasmo de lo que es bueno.

Alguien ha dicho que las cosas discutibles merecen discursos y que lo evidentemente claro sólo requiere una simple exposición, el asunto en que voy a ocuparme es de esta última clase y bastará la simple manifestación de los hechos para que los conservadores reunidos en esta convención fijen rumbos que nos lleven al imperio de una doctrina que es progreso de la patria y felicidad de cada cual.

Tenemos los conservadores el raro privilegio de encerrar todo nuestro programa en una palabra, porque toda nuestra acción se inspira en la imitación del Maestro que todo lo enseñó. En la vida privada debemos ser temerosos de Dios y amantes del prójimo y bajamos a la arena de la vida pública tremolando la blanca bandera de la paz en que luce la estrella de Oriente: el orden social cristiano. Esas palabras son todo un programa porque resuelven todas las cuestiones desde la internacional, que juega la vida de los hombres en los campos de batalla, hasta las industriales que gravitan sobre los cerebros que irradian sobre la humanidad y sobre los brazos que la alimentan; son todo un programa porque inspiran las mayores noblezas del alma humana, que han engendrado todas las libertades, y porque corrigen todas las bajezas que han sido simiente de todas las tiranías; son un programa, porque pueden hacer fecundos los inútiles es-

plendores de la opulencia y saben mitigar las sombras horribles de la miseria. Nada hay que no encuentre en esas palabras una orientación vigorosa y definida hacia el bien común o un consuelo cariñoso y eficaz para el mal irremediable.

En el orden superior de la actividad humana nuestro programa nos coloca bajo la mirada de la Providencia, que escruta hasta el fondo de las conciencias, y al amparo de la Justicia Divina sin más limitación que la misericordia Infinita. En los afanes diarios de la vida, estamos bajo el control de la ley cristiana, que es el respeto de los derechos de cada cual, sin más excepción que la caridad, reflejo humano de la Misericordia Divina.

Los hombres congregados bajo la bandera de Cristo para el ejercicio de la acción social, tenemos la obligación fundamental de investigar esos derechos a la luz de la ley moral, distinguiéndonos en esto de las escuelas liberales que sólo buscan la solución de mayor conveniencia. Nuestro sistema es el único bueno, porque es el único que considera al hombre en la integridad de su ser; los demás solo contemplan a la bestia y, cuando se ocupan de la inteligencia, sólo lo hacen en cuanto ella sirve para la mayor tranquilidad material, olvidando la porción más noble, la que todo lo ordena, la que es impulso vigoroso del progreso y freno

de la pasión exaltada por el dolor, la porción moral, que es la suprema reguladora del mundo.

Hace años que vienen los hombres olvidando la ley moral y ya están sintiendo los efectos de su abandono, por eso vuelven, poco a poco, a la luz primitiva. Nosotros mismos nos hemos apartado de ella, amparando leyes fuera del orden social cristiano y es preciso una reacción franca, una reacción enérgica que nos coloque a la cabeza del movimiento, como la doctrina de Cristo colocó a sus discípulos al frente del mundo moderno.

No hay problema más palpitante que el de la subsistencia y no hay cuestión tan adherida a la ley de Cristo como el general anhelo por el bienestar. Ningún negocio público necesita como éste el control continuo de la ley moral. En efecto, estos problemas afectan al fondo mismo de la vida, y si una solución injusta provoca las pasiones que disuelven, la justicia amplia, la justicia cristiana engendra la unión que es la paz social y que es el progreso.

Me propongo examinar este problema en su base misma, en la distribución de los tributos, y los hechos que expondré nos dirán si estamos en el orden social cristiano o si vivimos fuera de él. Si lo primero, tratemos de vigorizarlo, y si lo segundo, enmendemos cuanto antes el error cometido.

El costo de producción de un artículo cualquiera se forma por la adición de cuatro elementos principales, a saber: materias primas nacionales, materias primas extranjeras, salarios e intereses de los capitales fijos y circulantes. Si llamamos M, M', T e I estos factores del costo, C; tendremos la igualdad de

$$M+M'+T+I=C.$$

Un país que desee honradamente proteger sus industrias, tratará de obtener un costo inferior al que alcanzan las mercaderías extranjeras que llegan a sus playas; de este modo la concurrencia se hace imposible y el progreso fabril nace vigoroso y no como planta parásita. Este costo mínimo se obtiene influyendo sobre los cuatro factores a la vez, si es posible, o sobre aquellos que están al más inmediato alcance de la acción común.

Desde luego, se puede operar sobre las materias primas, nacionales o extranjeras, facilitando sus transportes por medio de caminos, ferrocarriles, puertos y líneas de navegación. El abaratamiento que resulta de este sistema influye a su vez en el precio de los salarios, en las compras de materiales y estas economías forman un exceso de capitales que, a su vez, produce una reducción del cuarto término del costo. De esta manera, se llega a producir un artículo

que afronta victoriosamente la lucha con el similar extranjero. Este régimen de resultados eficaces, que hemos *llamado de protección industrial* en nuestro libro sobre Política Nacional, es la contraposición del sistema de *protección comercial*, que descansa en el arancel aduanero.

El primero engendra la industria natural y beneficia al consumidor y al capitalista; el segundo establece un tributo que eleva el valor de la mercadería, y, por lo tanto, proporciona una ganancia al capital a costa del consumidor y sólo encuentra una excusa en el incremento de las rentas públicas. Cuando el sistema se generaliza, como pasa en Chile, desde la aplicación de la ley del año 1897, el impuesto afecta a todos los consumos y pasa a ser una verdadera contribución que cobran sobre la masa unos cuantos privilegiados. Desaparece, en la vorágine del arancel protector, la base moral del tributo que no es otra que la distribución de las cargas en proporción al servicio recibido. Más aún, se invierte esta ley moral, pues las obligaciones pesan sobre quien no recibe servicio alguno y no recaen sobre los favorecidos por la medida protectora.

Implantado el arancel protector, el precio de los artículos extranjeros sube en tanto cuanto se cobra en la aduana, más un porcentaje que representa la mayor utilidad del importa-

dor, correspondiente al mayor capital inmovilizado. Estimo esta sobre ganancia en un 20 por ciento del impuesto; por consiguiente, si el gravamen es n, el sobreprecio efectivo del artículo es $1{,}2n$. Veamos la influencia de este coeficiente en los diferentes términos del costo.

El precio del trabajo, o sea el salario, encierra una cierta proporción que corresponde al pago de artículos extranjeros que consume el trabajador; si llamamos k esta proporción, el valor de los artículos extranjeros, incorporados en el trabajo T. será $k\ T$ y, en virtud del derecho de aduana, el mayor precio del salario deberá ser $1{,}2nk\ T$.

Tal es la suma suplementaria que el productor debe proporcionar al obrero, cualquiera que sea su categoría, para que afronte la nueva situación. Debe proporcionarla efectivamente, porque los salarios se regularizan, por regla general, sobre el monto preciso de las necesidades y, si no suministra ese suplemento, la ley de protección será un simple pretexto de explotación del asalariado.

La materia prima nacional que va a las manufacturas, lleva incorporada una porción de trabajo; si llamamos k', el tanto por ciento de salarios introducidos en el costo M, el trabajo que este factor representa es $k'M$ y, en definitiva, con arreglo a la demostración anterior, el

mayor precio por consumos de artículos nacionales es: $1,2nkk'M$.

Los artículos extranjeros adquiridos por la industria nacional se sobre-valorizan en la proporción $1,2nM'$, según hemos visto, y en el caso de no estar gravados, como su costo de producción no está afectado por el arancel y como el similar indígena resulta más caro, se favorece al extranjero con esa diferencia de precio.

Los factores del costo que antes eran simplemente $M, M', Te' I$, se han incrementado con los términos adicionales que representan el conjunto de los derechos de aduana pagados por la industria y por los hombres de trabajo, con el agregado de la mayor utilidad del comercio de importación. La expresión del costo de producción, bajo el régimen protector, es así:

$$M+M'+T+I+1,2n(kk'M+M'+kT)=C',$$

la diferencia entre el costo sin arancel protector y el de la industria protegida es así:

$$C'-C=1,2n(kk'M+M'+kT).$$

Este incremento del costo no está aún completo, pues el factor de los intereses también crece; en efecto, la demanda de capitales para estos negocios fáciles que consisten en la re-

caudación disimulada de un tributo, produce un alza en el alquiler del dinero que viene a gravar toda la economía nacional.

El artículo nacional, protegido comercialmente, se hace cada vez más y más caro; su situación de lucha se empeora y para sostenerse acude a un nuevo derecho que procura un alivio momentáneo, pero que, pesando como pesa sobre el consumidor, encarece de nuevo el costo, exige una nueva tarifa, y por fin, engendra el monopolio, el sistema colonial español de reservas de la corona, el trust norte-americano o el boxerismo chino.

La última igualdad que hemos establecido, demuestra que el recargo mínimo de la producción nacional es igual al monto de los derechos de aduana, completado con la utilidad adicional del importador: ahora bien, como los únicos artículos extranjeros que no intervienen en la producción son los de lujo, podemos precisar el recargo, multiplicando por el factor 1,2 el total de derechos aduaneros, previa reducción del tributo cobrado al lujo o al vicio. Si consideramos que esta proporción es pequeña, que no hemos valorizado el alza de intereses y que hemos fijado una cuota bajísima a las utilidades adicionales del importador, podemos, contar sobre el total de los derechos para valorizar el recargo de la producción nacional. Así, Chile, que percibe unos 62 millones de

pesos oro por contribución aduanera, impone un gravamen real de 1,2 veces estas cifras para los consumos extranjeros, o sea $ 74.400,000 y de otro tanto por los consumos nacionales, o sea un total de $ 148.800,000.

Tres conclusiones resaltan de estas cifras: la primera es que el Estado para percibir una renta de 62 millones ha impuesto un gravamen real de $ 148,800,000. La segunda es que el comercio extranjero extrae del país un 20 por ciento anual sobre ese derecho, o sea unos $ 12. 400,000. La tercera es que hemos desarrollado industrias protegidas que han absorbido unos $ 150,000,000 oro y que ganan unos quince millones por año, mediante un tributo de más de ciento cuarenta y ocho millones.

Bastan estas cifras para condenar la eficacia del sistema y para poner de relieve su injusticia. Si el Estado necesitaba esos 62 millones y si unos cuantos privilegiados querían ganar 15 millones, habría sido más justo imponer a los consumidores un gravamen personal de 77 millones y economizarles la diferencia.

En definitiva, el arancel que ha recargado por lo menos en un 240 por ciento de su valor real la carga del consumidor, ha resultado ineficaz para desarrollar la industria. Los pobres beneficios que produce nacen de una disminución efectiva del salario y estos resultados sólo pueden crecer a costa del operario,

es decir, por medio de una verdadera explotación del hombre de trabajo.

Así, en este primer análisis, la *protección que hemos llamado comercial, está fuera del orden social cristiano, porque tiende a crear privilegios que no caben dentro de las enseñanzas de Jesús y porque provoca la opresión de las clases trabajadoras.*

Y, si, en regla general, el sistema resulta injusto, examinado en detalle, llega a ser inícuo.

He practicado una serie de estudios sobre los consumos de diferentes categorías de trabajadores y he obtenido los resultados que voy a consignar.

Un jornalero que vive bajo el techo de su patrón, se procura anualmente unos $ 700, o sea un jornal que no alcanza a $ 3.00 diarios. Sus principales artículos de alimentación procedentes del extranjero, son azúcar y café, cuya cantidad para una familia compuesta de los esposos y tres hijos, alcanza a 120 kilógramos del primero, que valen $ 96 y llevan un derecho de $ 10.80 oro, y 30 kilógramos del segundo, que le cuestan $ 60.00, en los que figuran $ 3.30 de contribución aduanera.

Traducido en moneda corriente el total del impuesto da, al cambio actual, $ 26.08 sobre $ 150 de compra.

Sus prendas de vestir suman $ 153 distribuídos en tres pares de zapatos, que valen $ 45.00 y pagan $ 3. 75 oro de impuesto, una media docenas de camisas y otros efectos interiores que valen $ 48.00 y satisfacen en la aduana $ 16.00; un terno que le cuesta $ 60 y abona un tributo de $ 3.25. Si admitis para toda la familia un consumo doble y estimáis en papel moneda los derechos, llegaréis a un gasto de $ 306.00 y una contribución aduanera de $ 85.10.

La familia de nuestro jornalero consume así $ 462; paga en la aduana $ 111.18, o sea el 24.07% de su gasto. A esta cifra debemos agregar la utilidad extraordinaria del importador, lo que nos da un total de $ 133.40. Aún falta por considerar el recargo resultante en el precio de los artículos nacionales, factor que hemos fijado en general y que luego podremos apreciar en su aplicación práctica.

Examinada la situación de un artesano, carpintero o albañil, o la similar de un mayordomo que gana unos 1,200 pesos por año, usando la vivienda que se le proporciona, se llega a un consumo de artículos alimenticios importados más o menos igual y a un ligero aumento de los artículos nacionales. Los gastos de vestir crecen también y llegan a un desembolso total, para toda la familia, de unos $ 620, con $ 114.10 de contribución, correspondientes a

un detalle fácil de formar con los datos anteriores.

El total de consumos de esta categoría es así de $ 776 y los derechos totales de $ 140.18, representan, con el recargo adicional, una suma de $ 168. 21. Esta cifra debe completarse con el mayor gasto en los consumos nacionales.

Si aún subimos un escalón y llegamos hasta el empleado modesto o hasta el administrador de una faena agrícola que gana unos $ 3,000 por año, encontramos la misma constancia en los artículos alimenticios y un ligero aumento por las necesidades de otro orden, como vajilla y utensilios análogos. El consumo de artículos de vestir es dos y media veces superior al que corresponde a la categoría anterior, o sea, unos 1,500 pesos que satisfacen un derecho aduanero de $ 185 moneda corriente. Así, este orden de asalariados consume en artículos extranjeros o similares de fabricación nacional, $ 1,656, por los cuales cubre un impuesto de $ 211.00, que llega a $ 253.29, con las mayores utilidades del comercio extranjero.

Subamos aún en la escala social y lleguemos hasta el propietario que vive de las rentas de un fundo, o si queréis del producto de una explotación agrícola dirigida por él mismo. Admitamos que sea un hombre ordenado y que, sobre una renta de unos 80 mil pesos, consuma el 50 por ciento tan sólo, o sea unos 40 mil pesos.

De esta cantidad destina aproximadamente la mitad al pago de artículos extranjeros y satisface sobre unos 24 mil pesos un tributo de tres mil pesos, más o menos, que se elevan a $ 3,600 con el recargo por mayor utilidad del comercio extranjero.

Con el objeto de indicar, siquiera aproximadamente, el recargo de los consumos nacionales, supongamos una faena agrícola dirigida por un propietario con un empleado, cuatro mayordomos y 30 operarios. De acuerdo con los cálculos anteriores tendremos:

Contribución aduanera satisfecha por 30 obreros	$ 3,335.40
Contribución aduanera satisfecha por 4 artesanos	560.72
Contribución aduanera satisfecha por 1 empleado	211.08
Contribución aduanera satisfecha por 1 propietario	3,000.00
	$ 7,107.20
Recargo del 20%	1,421.44
Suma	$ 8,528.64

La faena a que nos referimos corresponde a un fundo de 250 a 300 cuadras, dedicado a cereales, chacarería, lechería, algo de viña, en una palabra, que produce todo cuanto se necesita y cuyo rendimiento neto puede estimarse en unos 80 mil pesos, sobre un valor bruto de 120,000. El recargo de $ 8.528.64 que acabamos de indicar afecta así en más de un 7% los artículos nacionales. Si consideramos la influencia del encarecimiento de los capitales, no es exagerado llevar este recargo hasta 10%.

Admitido este factor, podemos fijar los siguientes gastos extraordinarios: para el jornalero, sobre su saldo para consumos nacionales, $ 23.80; para los artesanos, $ 42.40; para el empleado, $ 134.40 y para el propietario $ 2,400. En definitiva, la situación corresponde al cuadro siguiente:

Clase	Consumo extranjero	Consumo nacional	Recargo aduanero	Recargo interno	Suma de recargo	Renta	Proporción entre el recargo y la renta
Jornalero.....	$ 462.00	$ 238.00	$ 133,40	$ 23.80	$ 157 20	$ 700	22.75%
Artesano	776.00	424.00	168 21	42 40	210.61	1,200	17.55%
Empleado	1,656 00	1,344.00	253 29	134.40	387.69	3,000	12.92%
Propietario...	24,000.00	24,000.00	3,600.00	2,400.00	6,000.00	80,000	7.50%

Las cifras de este cuadro están traducidas en el gráfico (fig. N.° 1) que véis y que os demuestran cómo la contribución indirecta pesa más sobre quien puede menos; de categoría en categoría, sube en un 5% en razón directa de las necesidades y en razón inversa de los beneficios recibidos. Ante este resultado ¿con qué derecho se condena el impuesto progresivo sobre el capital que varía según la riqueza y con qué argumento se defiende el arancel aduanero que pesa más sobre el débil que sobre el fuerte?

Este segundo análisis nos demuestra que el sistema de protección comercial, además de constituír una injusticia, porque es un privilegio que favorece a determinado número de personas, es inicuo en la distribución misma del gravamen y es una verdadera opresión para los más pobres. Ante la elocuencia de estas cifras, nada valen las frases, y por eso os decía, al principiar, que os haría una simple exposición de hechos.

He aquí, señores, una razón más para condenar el arancel protector que no es sólo inútil en su acción, injusto en su distribución, sino que llega hasta la iniquidad en su repartición efectiva entre los contribuyentes.

No creo que se necesiten mayores pruebas para establecer que lo que hemos llamado arancel protector está fuera del orden social cristiano.

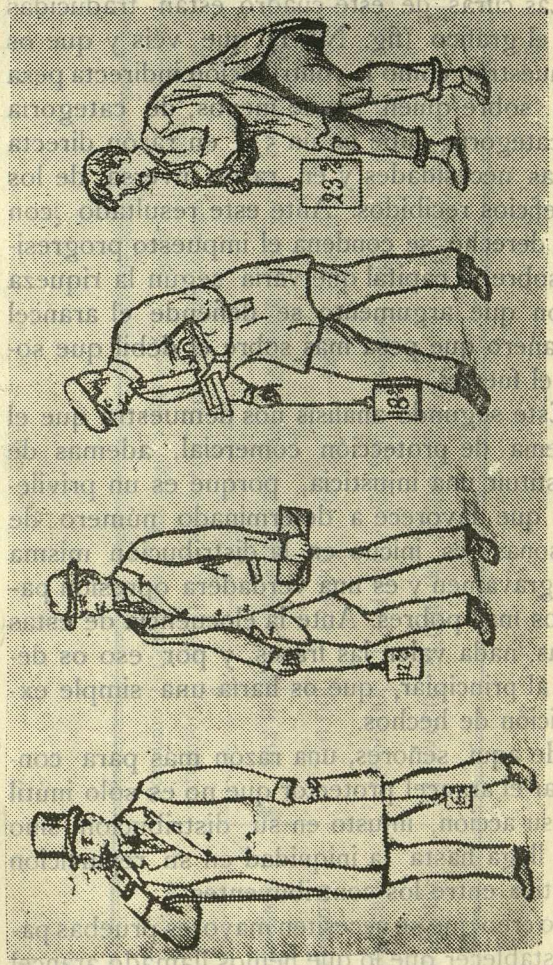


Figura 1.

El impuesto indirecto

Eleva los precios.

No fomenta la riqueza.

Oprime al trabajo.

En la figura cada categoría, propietario, empleado, artesano o jornalero lleva un peso proporcional al tanto por ciento de su renta o su salario que dedica al pago del impuesto a los consumos.

NO ES EL RÉGIMEN DE JUSTICIA.

Ese arancel que encarece la vida, que deja a los obreros de todas las categorías en situación de atender solamente a sus necesidades actuales, sin poder formar las reservas de su vejez; ese arancel que destruye los verdaderos fundamentos de la capitalización nacional, que no son otros que los ahorros del trabajador; ese arancel que forma industrias que no pueden vivir sin sus favores crecientes y que absorben los capitales que necesitan las fuentes naturales de riqueza; esa renta me direis, es necesaria para el servicio público. Sin duda, es mi respuesta, pero la ley moral nos obliga a pedirla en igualdad con el servicio por hacer, en proporción al beneficio recibido y sólo nos autoriza para cobrarla al que puede pagar.

Hemos visto que no es proporcional al servicio pues impone un gravamen, por lo menos, igual al 240 % del ingreso; acabo de demostrar que tampoco es proporcional al beneficio recibido y debo decir quién debe pagarla.

Supongamos que el propietario del fundo, cuyo personal analizamos más arriba, pague toda la contribución aduanera y que se conserven los salarios anteriores. Es evidente que, en este caso, el valor de los artículos nacionales no disminuirá, modificándose tan sólo la distribución del impuesto.

La cuenta del propietario será la siguiente:

Contribución aduanera total, según el cuadro anterior.....	$ 7.107.20
Recargo en el valor de los consumos nacionales, según los mismos datos.....	$ 2.400.00
	$ 9.507.20

Lo que representa, sobre su renta de $ 80.000, un 11,88%, o, en valor numérico, un exceso de $ 3.507.20.

Los asalariados, que no satisfacen en este caso contribución alguna, se encuentran sólo afectados por el mayor precio de los artículos nacionales cuyo valor hemos supuesto constante por la permanencia de los salarios. Sólo subsistirá el gravamen mediato generado por la elevación de precios y que, como vimos anteriormente, se gradúa como sigue, agregando el dato del propietario:

Jornalero:	$ 23.80	o sea 3.83%	sobre su renta de	$ 700
Artesano:	» 42.40	» 3.54%	» » » »	» 1200
Empleado:	» 134.40	» 4.48%	» » » »	» 3000
Propietario:	» 9507.20	» 11.88%	» » » »	» 80.000

El gravamen total soportado por los asalariados era $ 5.346.13 y el que les correspondería en nuestro sistema se detalla en el cuadro siguiente:

Clasificación	Gravamen anterior		Gravamen futuro		Descargos	Recargos
	Unidad	Total	Unidad	Total		
30 jornaleros...	$ 137.20	$ 4116.00	$ 23.80	$ 714.00	$ 3.402.00	
4 artesanos....	210.61	842.44	42.40	169.60	672.84	
1 empleado....	387.69	387.69	134.40	134.40	253.29	
1 propietario...	6.000.00	6.000.00	9.507.20	9.507.20	.....	$ 3.507.20
		$ 11.346.13		$10.525.20	$ 4.328.13	$ 3.507.20

Así, mediante un recargo de $ 3.507.20 al propietario, que en nada le perjudica, se ha evitado a los hombres que no tienen más herencia que el trabajo un gravamen de $ 4.328,13 sin dejar de contribuír al sostenimiento nacional con una suma igual a la anterior.

Esa disminución de $ 4328.13 es el fondo de economías de los 35 hombres empleados en la faena agrícola que hemos estudiado y que ganan en total $ 28,800, según los datos apuntados; de este modo ese ahorro representa un 15% de los jornales. Sobre el total de salarios que se pagan en el país, que no pueden ser inferiores a 300 millones de pesos, esto importa 45 millones de ahorros por año que los trabajadores de todas las clases sociales destinarían a mejorar las condiciones de su vida y a formar los capitales de la nación.

En cambio los propietarios van a satisfacer ese tributo que hoy pagan los trabajadores y los deducirán de sus gastos superfluos y aún puede sostenerse que no tiene para qué afectar las exigencias de ese orden. En efecto, la mayor contribución que pagan les estimulará a cuidar su riqueza, a vigilar sus inversiones, a producir un exceso que les compense ese gasto, agregándose a esto que la baratura de los capitales creados por el ahorro nacional y el bajo precio de los instrumentos de trabajo de origen extranjero les dará facilidades con que hoy no cuentan.

El gráfico que véis (fig. 2) pág. 180, demuestra estas proporciones y salta a la vista que esta situación está más conforme con la ley moral que la primera. El propietario tiene un $4\frac{1}{2}$ por ciento de recargo sobre su situación del día, gravamen que en nada le perjudica y, en cambio, permite a las clases trabajadoras economizar toda la parte del salario que hoy sacrifican en beneficio de las industrias privilegiadas y especialmente del comercio extranjero.

En definitiva, señores, el impuesto a la propiedad en nada ha perjudicado al propietario, puesto que hemos visto que saca su mayor contribución del mayor valor de los productos nacionales, y, obra con justicia redimiendo al trabajador de su miserable situación actual. El terrateniente seguirá prácticamente con su mismo gasto; en cambio, el obrero, economizará y formará capitales que, a su vez utiliza el propietario, beneficiándose con el menor precio del alquiler al dinero.

La supresión del arancel aduanero crea así los capitales circulantes, cuya abundancia obra en favor de la propiedad y en favor del hombre: es un negocio que interesa a la vez a la propiedad y al hombre. El mantenimiento del arancel perjudica, por lo tanto, el capital fijo que es la propiedad, y aniquila el mayor de los valores económicos, que es el hombre de trabajo.

Aún se me puede objetar que ese propietario que va a satisfacer más de nueve mil pesos por un fundo que puede producir unos ochenta mil, va a pagar cerca del 12 por ciento de su renta y os responderé si estimáis eso injusto, ¿creéis laudable que el simple bracero pague cerca de 23 por ciento de su jornal, el artesano cerca de 18 y 13 por ciento el empleado? Pues, eso lo estimo inicuo y creo muy prudente lo primero; más aún, lo creo eficaz y necesario, casi indispensable para el progreso nacional.

El trabajador de nuestros tiempos, para llenar sus necesidades, hace horas suplementarias de trabajo y yo afirmo que al propietario le bastará un poco de atención suplementaria para tener un aumento de producción que le compense, con creces, no sólo el exceso que le importará la contribución futura, sino que le reembolse su pago total. No creo, señores, que haya propiedad agrícola alguna en Chile que no pueda producir un 10 por ciento más de lo que produce; un poco de atención, el empleo de abonos y métodos científicos de cultivo, llenarán de sobra ese vacío. Hoy el propietario no se preocupa de aumentar su producción porque no siente sobre él carga alguna; pero en cuanto vea que el más estricto deber de justicia le impone la obligación de pagar el bien que recibe se esforzará por acre-

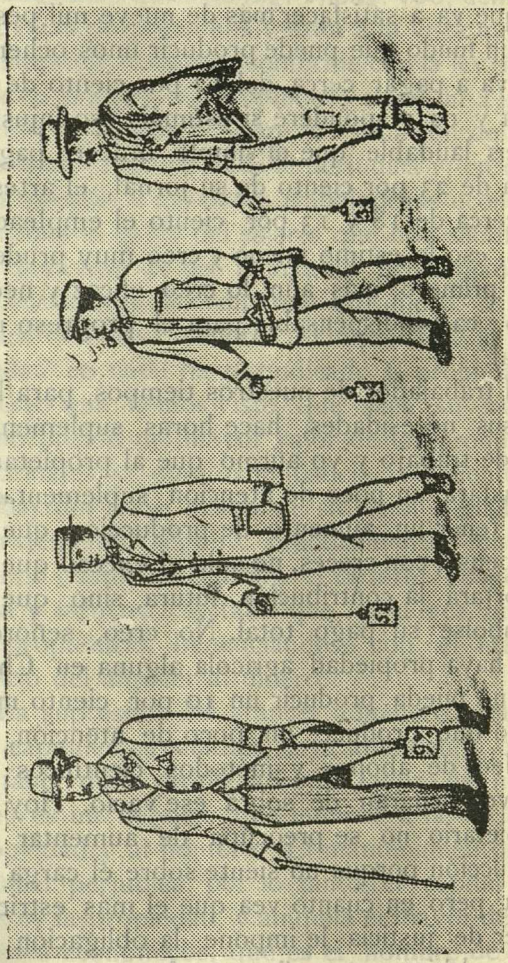


Figura 2.

El impuesto directo

Aumenta la producción.

Estimula la riqueza.

Descarga al trabajador.

En la figura el propietario, el empleado, el artesano y el jornalero llevan pesos proporcionales a la porción de sus rentas o salarios que traducen el pago de la contribución directa.

ES EL RÉGIMEN DE JUSTICIA.

centar su haber en otro tanto. Puede, además, compensar su parte de impuesto con la disminución de consumos suntuarios, contribuyendo así de un modo eficaz al mejoramiento general de la situación. Tiene, aún, en su favor la disminución de intereses por la abundancia de capitales y, finalmente, puede contar con todos los beneficios de la protección industrial que disminuye los costos de producción por los menores gastos de movilización.

En nada perjudica al propietario su esfuerzo para reemplazar el arancel aduanero, pues lo que va a pagar como renta lo economiza en sus propios derechos de aduana, en el menor precio de sus consumos internos y en la reducción de intereses de sus capitales circulantes. Este sistema que mejora al obrero y que en nada perturba al propietario, no encarece la producción y es así la mejor protección para la industria nacional.

La tarifa de aduana se me figura un dique que alza el nivel de los artículos extranjeros y que permite a los protegidos beneficiarse con esa diferencia; pero el juego natural de la ley económica va disminuyendo poco a poco el desnivel y, si no se agrega una nueva fila de sillares al tranque, las aguas superiores desbordan sobre la industria nacional. Así, de hilada en hilada, sigue creciendo el muro y con él ese volumen de precios altos que cubre la ribera

baja, la colina asoleada y llega, por fin, al vértice de la montaña esterilizando la campiña, la ladera y la serranía.

La contribución a la riqueza, combinada con la protección industrial, produce el abaratamiento de la producción, y el desnivel, que antes era del extranjero hacia nosotros, se invierte, y de la serranía, de la ladera y de la playa bajan torrentes, ríos y manantiales que vienen a formar el cauce fecundo de la prosperidad nacional.

Y si esto es así, si la ley del progreso que hemos demostrado como una verdad matemática, está en perfecto acuerdo con la ley moral, creo que tenemos obligación precisa de inscribir esta doctrina en nuestro programa.

En definitiva, en el orden material la supresión del arancel protector y su reemplazo por la contribución directa produce un doble beneficio: estimula el progreso de la producción y forma los capitales de ahorro que son base granítica del enriquecimiento y del crédito nacionales, sin los cuales es utópico pensar en independizarse de los mercados extranjeros por el funesto procedimiento de la protección comercial.

En el orden moral, el impuesto a la riqueza como base del sistema tributario llega a libertar a la conciencia del roedor constante que nos acusa de estar viviendo del esfuerzo ajeno,

de estar incurriendo en el anatema del Señor que dijo a los fariseos:

«Ay de vosotros que pagais el diezmo de la yerba buena, de la ruda y de toda hortaliza, y traspasais la justicia y el amor de Dios. Ay de vosotros, pues era necesario hacer estas cosas y no dejar aquéllas.»

*
* *

Si aceptárais mi doctrina, todavía podríais objetarme que ella no es aplicable a Chile, porque las cargas públicas están bien distribuidas. Una ligera exposición de los hechos os probará lo contrario.

Los balances de la Hacienda Pública se hacen habitualmente con el propósito de manifestar su equilibrio y yo no tengo noticia de ninguno que se haya hecho con el propósito de caracterizar las fuentes de entradas ni las partidas de desembolsos.

Eliminemos, señores, de los ingresos nacionales los rubros que representan servicios como ser: los ferrocarriles, la contribución de faros i balizas, los correos y telégrafos, la movilización de bultos, y llegaréis a un total de $ 171.350,000 oro de 18 peniques, con arreglo al detalle siguiente, tomado del último balance:

Derechos de exportación.....	$ 93.900,000	54,90 %
Enajenaciones del patrimonio nacional.....	12.200,000	7.10%
Aduanas e impuestos internos.	61.950,000	36.20 %
Seguros, Bancos y papel sellado	3.300,000	1,80 %
Sumas.....	$ 171.350,000	100,00 %

Los gastos totales de la Nación, eliminando los que corresponden a los servicios cuyas entradas no han sido consideradas en la parte que los cubren, corresponden al cuadro siguiente:

Ministerio del Interior.....	$ 20.931,511.20	12,21%
Defensa nacional, incluyendo la representación diplomática del pais.....	43.133,031.51	25,18%
Ministerio de Hacienda.....	48.420,718.82	28,26%
Ministerio de Justicia.....	6.106,137.47	3,56%
Ministerio de Instrucción.....	22.052,534.58	12,87%
Ministerio de Colonización.....	1.157,229.20	0,67%
Ministerio del Culto.....	1.095,708.88	0,64%
Ministerio de Industria y Obras Públicas.....	14.304,689.74	8,35%
Ministerio de Ferrocarriles.....	3.094,411.85	1,81%
Saldo imputable a déficits anteriores	11.054,026.75	6,45%
Suma.....	$ 171.350,000.00	100,00%

El estudio de las entradas nos hace ver que el 62% de los recursos nacionales provienen del salitre y de las enajenaciones del patrimo-

nio nacional; la propiedad y el capital en general sólo contribuyen con 1,80%; y, en cambio, los consumidores pagan 36,20% del total de rentas.

Analizados los egresos, resulta que la renta del salitre equilibra el servicio de la deuda y los gastos de defensa nacional, dejando un sobrante de 7,50%; las enajenaciones de los bienes nacionales han servido para cubrir déficits anteriores con un pequeño sobrante de 0,65%. Así, estos dos rubros nos dan un sobrante de recursos que suman un 8,15% del presupuesto al cual se agrega el 1,80% que proporciona la riqueza misma, haciendo un total de 9,95% de las entradas que necesitan ser completadas con el 36,14% que pagan los consumidores para equilibrar el presupuesto.

Es doloroso decirlo, señores, pero la verdad no puede ser escondida: si tomamos en cuenta los gastos de las provincias salitreras, el salitre nos produce lo preciso para defenderlo y para servir los capitales que esa defensa ha exigido.

La propiedad, según esos datos, paga la vigésima parte de lo que pagan los consumidores.

He ahí un doble hecho que acusa la inestabilidad de nuestro régimen financiero y su profunda inmoralidad.

Y no se diga que no hay en el presupuesto de la Nación partidas a favor de la propiedad. En el Ministerio del Interior hay $ 12.109,739 oro de 18 peniques, que son servicios que le corresponden; el Ministerio de Hacienda registra $ 6.900,000 para servir empréstitos municipales, cuyo valor se ha invertido en mejorar las ciudades y valorizar los predios urbanos; el Ministerio de Obras Públicas consulta $ 2.000,000 para caminos y otras obras vecinales; en total, tenemos $ 21.009,739 oro de 18 peniques que ha debido pagar esa propiedad que contribuye con la insignificante cuota de 3 millones 300 mil pesos. Por este sólo capítulo, hay una deuda de los propietarios a los consumidores, que importa un despojo anual de $ 17.709,739.

Si tomamos en consideración el total de gastos que la Ley de Comuna Autónoma impuso a la propiedad y que figuran en el presupuesto fiscal, llegamos a los resultados siguientes:

Ministerio del Interior	$ 12.109,739	7,07%
Ministerio de Instrucción	13.347,508	7,79%
Ministerio de Hacienda	6.900,000	4,02%

Ministerio de Obras Públicas.....	$ 2.000,000	1,17%
Total.....	$ 34,357,247	20,05%

Así, el 20% del presupuesto nacional representa gastos municipales y la propiedad impone un gravamen a los consumidores igual a la diferencia entre la suma de ese desembolso y la contribución capitalista. Tenemos así:

Servicios fiscales, que corresponden a la Comuna y que debe soportar la riqueza....	$ 34.357,247
Contribución fiscal que paga la riqueza.....	3,300,000
Diferencia.....	$ 31.057,247

¡Estos $ 31.057,247 debían salir de los poseedores de la riqueza y sin embargo se les cobra, por medio de la aduana, a los consumidores! La tierra, que debe mantener al hombre, está echando sobre él las cargas que le corresponden.

Estas cifras comprueban hasta la evidencia la exactitud del duro calificativo que anteriormente he dado al sistema tributario que nos rige, y esa exactitud obliga a mi conciencia de

conservador a pedir la reforma del sistema sobre la base moral, sobre la piedra fundamental del progreso que se traduce en el impuesto a la riqueza.

*
* *

En el dominio de las finanzas municipales la situación no es mejor.

He aquí las cifras de conjunto de nuestros Municipios:

ENTRADAS

Contribución de haberes	$ 4.978,800	45,55%
Productos del patrimonio municipal	447,600	4,10%
Patentes industriales y profesionales	795,400	7,27%
Patentes de bebidas	1.000,000	9,15%
Patentes de minas	254,500	2,33%
Patentes de vehículos	350,800	3,21%
Derechos de Mataderos	577,300	5,28%
Otras entradas que afectan los consumos	2.526,000	23,11%
Total en oro de 18 peniques	$ 10.930,400	100,00%

En cuanto a los gastos se distribuyen como sigue:

Imprevistos	$ 3.070,000	28.96%
Empleados	2.147,000	20.25%
Policía	897,000	8.46%

Pavimentación.....	$ 1.380,000	13.07%
Beneficencia.....	460,000	4.33%
Alumbrado.....	1.073,000	10.12%
Aseo.....	1.480,000	13.96%
Instrucción.....	90,000	0.85%
Total oro 18 d...	$ 10.597,000	100,00%

Si tomamos en cuenta que, dado el funcionamiento actual del Municipio, sólo pueden considerarse como servicios que recibe la comunidad los de beneficencia, instrucción, alumbrado y aseo, o sea unos $ 3.103,000 resulta que la propiedad se beneficia con el resto de las inversiones o sea con $ 7.504,000.

El balance de la propiedad en la hacienda comunal es así el siguiente:

Valor de los servicios recibidos por la propiedad.....	$ 7.504,000
Contribución de haberes y patentes mineras.....	5.233,300
Diferencia o sea Cuota de gastos que la propiedad hace recaer sobre los consumidores.....	$ 2.270,700

Así, la propiedad en la Comuna y en el Presupuesto fiscal, con arreglo a los cálculos anteriores, invierte en su servicio $ 33.327,947 oro de 18 peniques que exige a los consumidores. Esto es una forma nueva de esclavitud, una presentación moderna del régimen feudal.

Así, tanto en el régimen comunal como en el fiscal, estamos fuera de la ley moral y se hace indispensable la correcta aplicación de la ley de comuna autónoma, que es la salvación del país, que es una ley sabia y buena y que no ha dado los resultados que de ella esperaban sus autores porque la hemos dejado en el más culpable abandono.

La vigorización del sistema de política comunal se armoniza con la base del régimen tributario que he propuesto, y tiende a crearle a la comuna rentas que la hagan capaz de efectuar los gastos que hoy pesan sobre la nación por la falta de espíritu de equidad, lo que hace gravitar sobre los consumidores las cargas que deben pesar sobre el propietario.

*
* *

Examinadas las finanzas fiscales y municipales con el criterio que hemos desarrollado, se pone de relieve la impericia de los mandatarios que han acudido a los impuestos indirectos para salvar la situación del Erario. Un

estudio más profundo, una preparación menos improvisada, les habría demostrado que iban en contra de la riqueza nacional, en contra del elemento que deben fomentar para contribuír al cimiento del régimen tributario que pueda reemplazar a la contribución sobre el salitre. Cuando todas las naciones se alejan de los impuestos indirectos para tomar la base más justa del impuesto directo, cuando el mundo entero acepta la teoría de gravar la tierra para dejar al hombre toda la amplitud de los movimientos que hacen su labor fecunda, nuestros estadistas resuelven lo contrario y dictan leyes que, en un solo año, han producido un recargo aduanero de cerca de ocho millones de pesos oro y talvez cuatro millones en los impuestos internos.

Los impuestos al capital suman en Italia 802 millones de liras y 1,071 millones los impuestos a los consumos; la relación entre ambos es de 75 por ciento más o menos. En Francia se perciben 1,703 millones de francos en impuestos directos y 2,305 en contribuciones indirectas lo que da la misma relación que en Italia. Inglaterra, más cuidadosa de sus finanzas y de su pueblo, cobra 93 millones de libras esterlinas en impuestos directos y 72 millones en los consumos, lo que dá una relación de 1,29 que favorece al trabajo. En nuestra tierra, donde debemos fomentar la inmigración, donde

debemos dar amplias facilidades al consumidor, le cobramos cerca de 63 millones y a la propiedad le pedimos menos de la décima parte de esta suma.

Y cabe, señores, que me haga esta pregunta, ¿dónde estaba la representación conservadora cuando se dictaron estas leyes que contrarían abiertamente nuestro principio fundamental?

Me anticipo a la excusa: el partido no ha definido la cuestión. Más aún, acepto la excusa y de nuevo pregunto: la cuestión económica, ¿es o nó una cuestión moral?

Es una cuestión moral y tiene una solución precisa dentro del orden social cristiano, solución que a mi juicio, no es otra que la que he venido analizando. Y si es así, se impone como el primer deber de esta asamblea, definir la cuestión del régimen tributario.

Con toda la sinceridad de mi alma ruego a la asamblea que rechace en esta parte el informe de la comisión de programa, que posterga toda solución y que, subsidiariamente, acuerde nombrar una comisión permanente que estudie este problema y que pueda citar dentro del plazo de un año a una convención con el exclusivo propósito de pronunciarse sobre una solución definitiva y precisa y no vaga como la actual.

Señores, sé que me expongo a muchas críticas, pero no puedo olvidar el mandato del Señor, que dijo por boca de sus profetas; «buscaréis lo que es justo, teniendo en vista la justicia, para que así viváis y poseáis la tierra que os dió el Señor vuestro Dios».

Y quien tal ordenaba, era más preciso aún, pues, refiriéndose al hombre de trabajo, decía: «le daréis para el camino socorros de vuestros rebaños, de vuestra granja y de vuestro lagar, todo lo cual habéis recibido por bendición del Señor».

Y bien, señores, hoy no estamos en el camino de la justicia, porque estamos acrecentando y el rebaño y la granja y el lagar con el esfuerzo ajeno.

Yo quiero, como San Pablo, dar a cada uno lo que le pertenece: a quien el tributo, el tributo; a quien el impuesto, el impuesto; a quien el temor, el temor, y a quien el honor, el honor. Y si he de sufrir por mi doctrina recordaré que el Apóstol dijo: «Ordenad a los ricos del mundo que no sean orgullosos, que no coloquen su confianza en las riquezas inciertas sino en el Dios vivo, que nos da con abundancia cuanto necesita la vida. Ordenadles que hagan el bien y que sean ricos en obras buenas, que den limosnas de corazón y que compartan sus bienes». Y quien tal ordenaba a los ricos decía a los trabajadores: «Que

todos los que están bajo el yugo de la servidumbre miren a sus amos como dignos de todo honor, de miedo que no se blasfeme contra el Señor ni contra su doctrina».

Y bien, yo me someto, de miedo que se blasfeme contra el Señor y contra su doctrina; pero sostengo que mi doctrina es la buena y espero confiado la hora del triunfo. Y cómo no ha de ser buena si el propio Maestro la definió en casa del fariseo en la tarde del día en que enseñó a los hombres a implorar a su Eterno Padre. En esa ocasión, dijo a los invitados: *¡Ay de vosotros, doctores de la ley, que echais a los hombres cargas que no pueden llevar y vosotros ni aún con vuestros dedos las tocáis!*

Estamos viviendo en esa situación de oprobio anatematizada por el Salvador, en el régimen tributario que acabamos de ver condenado por la ciencia de los números, que no engaña, y así no cabe sino pediros en nombre de la ciencia y en nombre de la moral, en el nombre de Dios que aprobéis cuanto antes una fórmula precisa como la que os he propuesto o cualquiera otra que traduzca las aspiraciones cristianas en el dominio económico.

Y si hoy tengo un rechazo no me desalentaré; tengo confianza en el futuro y no he venido a triunfar sino a luchar. Siento rodar sobre mi cabeza la onda de la impopularidad que

aplasta: pero no he venido a cosechar sino a sembrar y espero tranquilo porque sé que la simiente no cae en el camino donde la pisotea el viajero y la devora el ave que pasa, sé que no cae en la piedra donde el brote se agota por falta de humedad, sé que no cae en los zarzales donde la plantita es ahogada por la maleza, sé que cae en los corazones generosos de hombres de buena voluntad que la harán producir, como la simiente bíblica, ciento por uno, y que tendremos una cosecha que haga desbordar el granero conservador.

EL INCOME TAX

Sus características.—Su aplicación en Chile

ORIGEN DEL TRIBUTO

Larga sería la historia de este impuesto sobre la renta que se inició para atender a las guerras contra Napoleón, que fué suspendido en 1816, tan luego como se firmó la paz, que se reinstauró a la primera ruptura del equilibrio europeo, y que, en un siglo de vida, ha pasado a ser la base de las finanzas inglesas.

Este tributo, que cobraba en un principio el 10 por ciento de las rentas, era antipático para los contribuyentes, y los gobernantes lo mantenían sólo como medida transitoria, prometiendo siempre transformarlo o suprimirlo. Sólo en los últimos años el Ministro Asquith le dió sus características definitivas y afrontó decididamente a la opinión, declarando que el *Income Tax* debería ser la base fundamental del sistema financiero de Inglaterra.

Clasificación de las rentas

Una primera clasificación se hace por su cuantía, existiendo cuatro grupos principales:

Inferiores a £ 2,000.

Entre £ 2,000 y £ 3,000.

Superiores a £ 3,000.

Existe además una pequeña clasificación para las rentas, inferiores a £ 160, £ 400, £ 500 y £ 700.

Una segunda categoría se establece para las rentas según su origen, o mejor dicho, según la manera de obtenerlas, dividiendo el impuesto en dos clases:

Rentas ganadas son, en general, aquellas en cuya formación influye el trabajo actual del hombre, como el producto de la explotación de las tierras, los salarios y otras.

Rentas no ganadas se llaman las demás en que no interviene el trabajo actual del hombre, como arriendo de inmuebles, cupones de bonos u otras análogas.

Esta segunda clasificación se aplica sólo a las rentas inferiores a tres mil libras esterlinas.

Coeficiente del tributo

Las rentas ganadas pagan menos que las no ganadas, y las rentas mayores pagan más

que las menores. He aquí la escala, tomando en cuenta las *desgravaciones* para las pequeñas rentas:

RENTAS GANADAS

De £ 160 o menos, exentas de tributo.
De » 160 a £ 400, 2.0%
De » 400 a » 500, 2.8 »
De » 500 a » 700, 3.2 »
De » 700 a » 2,000, 3.6 »
De » 2,000 a » 3,000, 5.0 »

Sobre £ 3,000 las rentas se estiman no ganadas.

RENTAS NO GANADAS

De £ 160 a inferiores, exentas de tributo.
De » 160 a £ 400, 3.5%
De » 400 a » 500, 4.0 »
De » 500 a » 700, 4.5 »
De » 700 a » 2,000, 5.0 »
De » 2,000 a » 3,000, 5.8 »
De » 3,000 a » 4,000, 6.4 »
De » 4,000 a » 5,000, 6.8 »
De » 5,000 a » 6,000, 7.1 »
De » 6,000 a » 7,000, 7.8 »
De » 7,000 a » 8,000, 7.3 »
De » 8,000 a » 9,000, 7.4 »
De » 9,000 a » 10,000, 7.5 »

En general, 8.2% sobre el exceso de £ 3,000. De modo que las grandes rentas tienden al límite máximo de 8.2%.

Características del impuesto

El *Income Tax* es, por consiguiente, un impuesto progresivo que se aplica tanto a la cantidad como a la procedencia de la renta.

Modo de percepción

Tres entidades figuran en la formación del impuesto y en su cobro:

El Parlamento.

El Gobierno o Poder Ejecutivo.

El contribuyente mismo.

El Parlamento nombra los *Land Tax Commisioners:* personajes de alta categoría, quienes a su vez designan para los distritos los *Income Tax Commissioners;* ni unos ni otros gozan de sueldo. Los primeros son solo los generadores del sistema y los segundos desempeñan su cometido por intermedio de los Additionel Commissioners y de los Assesors-Collectors que forman las listas de contribuyentes y perciben o intervienen en la percepción del tributo. Estos funcionarios son nombrados por los *Income Tax Commissioners*,

quienes se reservan la única función que luego veremos.

El Gobierno interviene por medio del *Surveyor Tax* de cada distrito.

La contribución se prepara, por decirlo así, de común acuerdo entre los funcionarios de origen parlamentario y el representante del Ejecutivo.

El contribuyente recibe la notificación de pago de manos del *Surveyor Tax* y puede discutirla con él. Si, no están de acuerdo, apela ante los *Income Tax Commissioners*, que deciden oyendo al contribuyente y al *Surveyor*, siendo esta función de tribunal de apelación la única que se reservan los funcionarios nombrados por los comisarios del *Land Tax*.

He ahí el mecanismo que funciona sobre la doble base de las declaraciones del interesado y del estudio que los encargados de la renta hacen de cada contribuyente.

Nuestro objeto es exponer con claridad este sistema, y por este motivo no recargaremos este análisis con detalles de poca importancia. Antes de ver si es aplicable a Chile creemos necesario traducir el impuesto sobre la renta en su representación sobre el capital.

Coeficiente que afecta al capital

Si admitimos que los pequeños capitales reditúen 7% hasta rentas de £ 700; 6 1/2 has-

ta £ 2,000; 6% hasta £ 3,000, y 5% para mayores rentas, y refiriéndonos sólo a las rentas no ganadas tendremos:

Hasta £ 400, el 3.5% sobre la renta equivalente a 2.50 por mil sobre el capital.

Hasta £ 500, el 4.0% sobre la renta equivale a 2.80 por mil sobre el capital.

Hasta £ 700, el 4.5% sobre la renta equivale a 3.15 por mil sobre el capital.

Hasta £ 2,000, el 5.0% sobre la renta equivale 3.25 por mil sobre el capital.

Hasta £ 3,000, el 5.5% sobre la renta equivale a 3.50 por mil sobre el capital.

Hasta £ 5,000, el 6.8% sobre la renta equivale a 3.50 por mil sobre el capital.

Hasta el límite de 8.2% sobre la renta es un 4.10 por mil sobre el capital.

La progresión sobre el capital está perfectamente acentuada y corresponde, en general, a los tipos siguientes, refiriéndonos a nuestra moneda:

2.5 por mil hasta un haber de $ 5,000
3.0 por mil hasta un haber de » 10,000
3.25 por mil hasta un haber de » 30,000
3.50 por mil hasta un haber de » 50,000
3.75 por mil hasta un haber de » 150,000
4.00 por mil para los haberes superiores.

Esta escala se aproxima mucho a la que hemos calculado con ocasión del estudio de nuestro régimen comunal.

Aplicación a Chile del Income Tax

Nuestra primera pregunta es:

¿Se puede imponer en Chile una contribución sobre la renta general?

Contestamos que nó, a causa de la dificultad para fijar el valor gravable del contribuyente. La idiosincracia del país y la índole tan variada de negocios de un mismo individuo, que suele reunir las condiciones de agricultor y minero, las de empleado y profesional, las de comerciante y simple terrateniente, hacen muy difícil la verificación de un impuesto basado en la declaración del contribuyente y en cierta inquisición de los fiscalizadores.

Nuestra segunda cuestión es:

¿Conviene en Chile imponer un gravamen sobre la renta?

Contestamos con un distingo: las rentas ganadas, es decir, aquellas que representan el trabajo actual del hombre, no deben imponerse, pues el esfuerzo humano está bastante recargado con el impuesto a los consumos y en especial con el arancel protector.

La renta no ganada, es decir, la que no proviene del trabajo actual o directo, puede y de-

be ser gravada, más aún, debe ser la base de nuestro sistema tributario.

Ahora bien, como hemos dicho que es difícil gravar la renta misma, por las dificultades para evidenciarla, es más práctico aplicar el tributo correspondiente al capital que está siempre a la vista.

Así, nuestra conclusión es que debemos aplicar el tributo al capital y no a la renta y hacerlo en la forma progresiva del sistema fundamental inglés.

Clasificación del sistema chileno

Desde luego admitimos la clasificación de calidad, afectando el menor impuesto a los valores que produzcan menos, es decir, a los capitales fijos y el tributo más alto a los que produzcan más, es decir, a los capitales circulantes. En estos haremos dos distinciones: capitales disponibles y capitales incorporados.

Los primeros tendrán la mayor cuota para obligarlos a buscar una colocación y los segundos una menor para tomar en cuenta el esfuerzo del hombre.

Un predio rústico, por ejemplo, pagará una cuota por su propio valor y otra por su fondo de explotación; de igual manera una mina. Una casa comercial pagaría por sus inmuebles, por sus existencias y por su capital disponible.

No hay negocio, individual o colectivo, que no entre o pueda entrar en una clasificación de esta naturaleza.

En cuanto a las cuotas podrían ser tales que el coeficiente 1 corresponda al inmueble; 1.25 al capital incorporado y 1.5 al capital disponible, dentro de las respectivas categorías indicadas por la clasificación en cantidad.

Si la clasificación en cantidad no existiera y la medida fuera única, digamos 3 por mil, quiero decir que el capital tierra pagaría esa cuota: 3.75 el capital incorporado, como ganados, herramientas y otros análogos, correspondiendo 4.5 por mil al capital disponible.

Así, tal contribuyente, por ejemplo, que posea un fundo de $ 500,000 con un capital incorporado de 100,000 pagará una contribución de $ 1,875. Si además posee un depósito en el Banco de $ 100,000, esta institución le cobrará el impuesto de 4. 5 por mil que ella paga, o sea, 450 pesos. Su contribución total llega así a 2,325, pesos, para una fortuna de 700,000 pesos que no puede redituar en nuestro país menos de $ 50,000; el tributo es así de 4 por mil sobre la renta, es decir, próximamente las tres cuartas partes de lo que correspondería en Inglaterra.

La clasificación en cantidad debe hacerse, a nuestro juicio, dentro de las normas anterio-

res o aproximadamente, y así, propondríamos la base siguiente:

Valores inmuebles:			
Hasta $	50,000,	2.00	por mil
Hasta »	100,000,	2.25	por mil
Hasta »	200,000,	2.50	por mil
Hasta »	300,000,	2.75	por mil
Hasta »	400,000.	3.00	por mil
Hasta »	500,000,	3.25	por mil
Hasta »	1.000,000,	3.50	por mil
Hasta »	2.000,000, y más,	4.00	por mil
Valores incorporados:			
Hasta $	50,000,	2.5	por mil
Hasta »	100,000,	2.8	por mil
Hasta »	200,000.	3.02	por mil
Hasta »	300,000,	3.50	por mil
Hasta »	400,000,	3.75	por mil
Hasta »	500,000,	4.00	por mil
Hasta »	1.000,000,	4.25	por mil
Hasta »	2.000,000, y más	4.50	por mil
Valores disponibles:			
Hasta $	50,000,	3.00	por mil
Hasta »	100,000,	3.30	por mil
Hasta »	200,000,	3.75	por mil
Hasta »	300,000,	4.00	por mil
Hasta »	400,000,	4.50	por mil
Hasta »	500,000,	4.75	por mil
Hasta »	1.000,000,	5.00	por mil
Hasta »	2.000,000 y más,	5.50	por mil

Estas cifras no pueden ser definitivas y sólo indican la facilidad con que se puede imponer la doble clasificación en calidad y en cantidad.

Percepción del tributo en Chile

El cobro del impuesto sobre los capitales disponibles será siempre fácil, no así la estimación de los incorporados o de inmuebles. La valorización es un punto delicado, y entre nosotros, muy sujeto a errores por la intervención de la justicia en los procesos de tasaciones.

Nosotros propondríamos un Alto Cuerpo formado por cuatro individuos designados por el Congreso, dos nombrados por el Presidente de la República y además el Director de la Caja de Crédito Hipotecario y un delegado de las instituciones similares.

Este cuerpo designará para cada departamento un representante que obrará de acuerdo con el Gobernador y el Tesorero Fiscal para formar la lista de contribuyentes.

Esta junta comunicaría su resolución al interesado, y toda discusión se tramitaría en juicio verbal. Si no hubiera acuerdo, el contribuyente acudiría al Alto Cuerpo para ser oído en juicio verbal junto con el representante del tribunal local, y el fallo resultante sería definitivo.

Este sistema no aumenta los gastos de percepción en forma apreciable y permite una valorización tan exacta como sea posible.

Rendimiento del impuesto en Chile

Lamentamos no poder suministrar los datos que habíamos recopilado con mucho cuidado; pero los ladrones que nos dejaron sin nuestra modesta vajilla envolvieron su robo en los papeles que estaban sobre nuestro escritorio. Tendremos que hacer un nuevo esfuerzo, poner candado en nuestra puerta, soltar perros bravos en el jardín y vivir, como lo hacemos, con el revólver al lado, ni más ni menos que en los tiempos de Falcato Rojas. A todo esto llegamos por el abandono comunal, es decir, por la incuria de los hombres que, a trueque de no contribuir a los servicios, los abandonan en manos del Estado, que no puede ser cumplidamente guardián, maestro de escuela, caminero, conductor de tren y hasta bombero al mismo tiempo.

Es el caso que según nuestros recuerdos, el haber susceptible de agravarse no es inferior a *veinte mil millones de pesos* de doce peniques; sobre esta suma el simple coeficiente de tres por mil daría 60 millones de esa moneda, o sea, cerca del 45 por ciento de la renta del salitre. Basta enunciar esta cifra para

que resalte la importancia de un impuesto destinado a salvar los apuros de la hora actual, y a despejar las sombras del porvenir, y que permite capitalizar, en cuanto sea posible, la transitoria renta salitrera, a fin de crear una riqueza estable, que sea la futura base financiera del país. Esto elimina todas las inquietudes del agotamiento o del reemplazo de una sustancia industrial que es hoy el principal recurso del Fisco.

En cuanto a la distribución del impuesto mismo, creemos que debe tenerse muy en cuenta la vida del municipio, núcleo en que debe formarse el ciudadano, y por lo tanto, somos de opinión que se haga de este tributo una entrada fiscal, pero conservando a las comunas su cuota actual de ingresos, la que podrá aumentar a medida que liberen al Estado de los servicios locales que ha tomado a su cargo.

Estas ideas no representan la integridad de nuestra doctrina, están muy cerca de ella solamente y constituyen una plataforma de transacción, si podemos dar este nombre a una solución de una lucha anunciada, pero no trabada, pues aún somos pocos los que perseguimos el ideal de la contribución directa, que es el progreso, porque quien la paga exige su buena inversión, y siguen siendo numerosos, casi la totalidad, los mantenedores del impues-

to indirecto, que es la ruina, porque junto con pesar sobre el hombre de trabajo, procede con tal disimulo, casi diremos hipocresía, que sólo a la larga llegan a personalizarse sus efectos en la colectividad, que no puede fiscalizar su inversión con la misma rapidez y con toda la eficacia que corresponde a los intereses individuales directamente afectados.

LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

CONCENTRACIÓN COMUNAL...

Los estudios que desde hace algún tiempo estamos haciendo sobre las finanzas nacionales en general, nos han revelado que una de las causas principales de las perturbaciones de nuestro régimen es el gravamen de servicios locales que pesa sobre el presupuesto de la Nación. Denunciamos el hecho en las columnas de este diario, cuya hospitalidad agradecemos; caracterizamos la situación en una conferencia en el Centro Conservador; vigorizamos nuestras conclusiones en el amplio debate de la Gran Convención Conservadora, y hoy tenemos la satisfacción de comprobar los progresos de una idea que se imponía por sí sola.

Los Municipios, faltos de recursos, no porque no tuvieran fuentes de donde extraerlos, sino porque han sido remisos en el cumplimiento de

su deber, fueron, poco a poco, difundiendo sus obligaciones en el presupuesto nacional hasta el punto de que hoy, desde las policías hasta los caminos y desde la instrucción primaria hasta la beneficencia, que eran servicios encomendados por la ley a la Comuna, están en manos del Estado, que consume en ellos cerca del 20% de sus entradas, o sea unos treinta y siete millones de pesos de 18 peniques.

El llamado a la justicia que hemos hecho desde las columnas de la prensa y desde la tribuna de las conferencias, ha encontrado eco en todas partes; la opinión quiere que las comunas contribuyan con una mayor cuota a los gastos que le son propios, descargando el presupuesto nacional, cuyas entradas las forman especialmente los consumidores; el Gobierno se ha preocupado del problema y ya nuestro amigo el Ex Ministro de Hacienda, don Arturo Alessandri, envió un proyecto de ley por el cual se pide a la riqueza la participación que le corresponde en los gastos públicos; finalmente, un grupo de diputados conservadores presentó una moción que no difiere sustancialmente del proyecto sobre contribución de haberes con que terminamos nuestra primera conferencia sobre Política Comunal.

Todos los intereses, a juzgar por estas manifestaciones, se están armonizando alrededor de la doble idea de vigorizar la vida comunal,

creando fuentes de entradas para los municipios o exigiendo de estos una cuota para compensar el servicio fiscal. El primer paso que sin duda se dará en esta materia será la reforma de la ley de Comuna Autónoma, en la parte referente a la valorización de la propiedad; los métodos modernos que se introduzcan en la formación de esta base de contribuciones bastarán por sí solos para incrementar considerablemente las entradas del impuesto de haberes sin necesidad de acudir ni a cuotas superiores a tres por mil ni a progresiones que, aún siendo justas, pueden estimarse inoportunas.

*
* *

Aceptada esta idea, surge la cuestión, ¿quién percibirá el impuesto de haberes? Si hubiera de corresponder a las Municipalidades no remediaríamos el mal si no exigiéramos que tomaran a su cargo los servicios que hoy paga el Fisco; si, como algunos hoy quieren, el Estado percibe el impuesto de haberes, resultaría que las Comunas perderían el 40 por ciento de sus entradas, y esto sería la muerte de una institución que debe ser el núcleo de nuestra vida cívica.

Por este motivo, hemos propuesto que la contribución de haberes sea fiscal solamente en su exceso sobre su valor actual, o en otros tér-

minos, que el tributo se cobre por las Tesorerías Fiscales, quienes deberán entregar a las Comunas una suma igual a la que estas cobraban anteriormente, ingresando el saldo en arcas fiscales. La proporción que al Fisco corresponderá es de grande importancia, ya que hoy las comunas perciben sólo 5 millones de pesos oro de un impuesto que, bien aplicado sobre la base de una justa valorización, no puede rendir menos de 36 millones de igual moneda.

Con esta medida, al propio tiempo que los Municipios conservan su importancia, el estado equilibra su situación, no por las medidas artificiales de reducción en los gastos necesarios, que importan la paralización del país, sino con el recurso natural de exigir el pago del servicio a quien recibe el beneficio.

Esta medida de justicia, sin afectar a la Comuna y procurando recursos al erario, colocará sobre una base fundamental el mecanismo que se proyecta para la valorización del billete, mecanismo que no funcionará si no concurren a su acción todas las fuerzas del país en el régimen de orden y de justicia que les corresponde según sus categorías. Saneadas las finanzas del Estado y bien distribuídas las cargas públicas, el interés por los buenos presupuestos se hace general; el equilibrio será efectivo y no simple fantasía ministerial como hasta hoy, y tendremos, en definitiva, alcanzada la confianza en el

manejo del país, que es la condición primordial para el éxito de la conversión.

*
* *

El cuadro de nuestro orden financiero no sería completo si no hiciéramos extensivas iguales medidas a la Comuna misma. Las rentas de estas entidades deben ser, en todo caso, iguales a los servicios que deben prestar y éstos deben ser abundantes y efectivos, a fin de que el Municipio cumpla con su función puesto que, a nuestro juicio, y dentro del espíritu de los grandes fundadores de la institución, la Comuna debe ser algo como la cédula elemental del progreso de la Nación.

Estas condiciones no se cumplen en nuestro actual régimen municipal, como lo comprueba el hecho de existir 176 comunas, sobre 271, cuyos presupuestos son inferiores a 30 mil pesos.

Es evidente que esta suma no puede bastar para un servicio esmerado de la localidad que atienda al camino y a la seguridad, a la instrucción y a la beneficencia, a la higiene y el ornato que exige la vida moderna, factores considerables del progreso, pues procurando el aumento en el bienestar local, contribuyen a mantener al hombre en el centro natural de sus atenciones y de sus negocios.

En el cuadro siguiente hemos agrupado las Comunas por la cuantía de sus presupuestos, cuadro desconsolador que muestra la ineficacia de una ley buena abandonada por los hombres desidiosos y faltos de espíritu público. Sin contar a Tacna ni a Magallanes, cuyas condiciones son especiales, tenemos en la República:

51 Municipios con presupuestos inferiores a $ 10,000.

84 Municipios con presupuestos inferiores a $ 20,000.

41 Municipios con presupuestos inferiores a $ 30,000.

33 Municipios con presupuestos inferiores a $ 40,000.

14 Municipios con presupuestos inferiores a $ 50,000.

9 Municipios con presupuestos inferiores a $ 60,000.

4 Municipios con presupuestos inferiores a $ 70,000.

10 Municipios con presupuestos inferiores a $ 80,000.

4 Municipios con presupuestos inferiores a $ 90,000.

4 Municipios con presupuestos inferiores a $ 100,000.

3 Municipios con presupuestos inferiores a $ 120,000.

4 Municipios con presupuestos inferiores a $ 140,000.

3 Municipios con presupuestos inferiores a $ 160,000.

1 Municipio con presupuesto inferior a $ 180,000.

1 Municipio con presupuesto inferior a $ 200,000.

1 Municipio con presupuesto inferior a $ 300,000.

Con cifras superiores a esta última solo tenemos a Talca, Valdivia, Antofagasta, Iquique, Viña del Mar, Providencia, Valparaíso y Santiago.

Es fuera de duda que esas comunas con entradas inferiores a 10 mil pesos no pueden acometer ninguna obra de progreso local; más aún, aquellas que llegan hasta $ 50,000 de renta no tienen capacidad financiera para ningún trabajo serio de bienestar por pequeña que sea su importancia.

Eliminadas estas Comunas, sólo quedarían 52 en el país que puedan costear un servicio satisfactorio. El análisis anterior demuestra cómo, por la fuerza del abandono que hemos hecho de la Comuna, se ha visto obligada la Nación misma a incorporar esos servicios en sus gastos.

Si llegamos al detalle de las inversiones de esas 52 Comunas con rentas elevadas encon-

tramos que ninguna de ellas tiene la proporción necesaria para mantener un servicio adecuado; ninguna de ellas llega a gastar $ 30 por habitante, que es el mínimo de lo que se conceptúa necesario para dar a la ciudades todas las comodidades de los pueblos civilizados; la mayor parte de esas cuotas oscila entre 5 y 15 pesos, correspondiendo excepcionalmente a Iquique, Valparaíso y Antofagasta, las cuotas más altas, o sea, 28, 24 y 20 pesos. ¡Duro es decirlo, pero es lo efectivo que allí donde el elemento extranjero ha tenido mayor intervención se han desarrollado mejor los servicios!

Verificamos, pues, el hecho: las Comunas requieren mayores recursos para sus programas locales, y, dentro de nuestra costumbre de no denunciar estérilmente los males sin indicar algún remedio, diremos que se puede, desde luego, mejorar esta situación entregando a las Municipalidades algunos impuestos de consumos a cuyo control pueden ellas cooperar, mejorando su rendimiento, y sobre todo, procurando una concentración de las finanzas comunales que evite la dispersión de las pequeñas rentas, que oriente la acción hacia fines precisos dentro de una determinada agrupación de Comunas.

Indicaremos un ejemplo: El pueblo de Curicó dispone de unos $ 160 mil y a sus puertas se encuentran los Municipios rurales de Upeo

y Tutuquén que llegan a recaudar $ 30,000 por año; los intereses de esta agrupación son comunes y es evidente que tendrían toda clase de ventajas en reunir la totalidad de sus entradas o sea, $ 220,000 y desarrollar un programa de conjunto, evitándose todos los gastos generales de administración y los de ejecución de obras en detalle. Así, sin menoscabo alguno de sus tendencias locales, conservando su perfecta autonomía, cabe esta especie de cooperación de Comunas.

Esta agrupación, a nuestro juicio, no sólo es necesaria, es indispensable para el correcto funcionamiento de las administraciones locales. Corresponde a mis correligionarios del Congreso, por sus estrechos vínculos con la ley fundamental, el estudio de este problema de las agrupaciones financieras de las Comunas, fijando cuotas mínimas a las Comunas de cabecera de departamentos, y, partiendo de esta base, llegar a una distribución que asegure la eficacia del sistema, sin menoscabar la independencia local. La aplicación de este régimen desarrollará nuestras ciudades de provincia, les dará carácter propio, arraigará en ellas a los hombres de trabajo, despertará ese verdadero amor al terruño, que es como la esencia del amor a la patria.

Mi Ruca, Marzo 10 de 1914.

LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA

TASACION DE LA RIQUEZA

I

Jules Harmand, embajador honorario del Gobierno francés y gran perito en los procedimientos de anexiones coloniales, dice que el impuesto indirecto es el que conviene a los conquistadores y expresa esta opinión con cierto entusiasmo, como lo prueba la siguiente frase, que traducimos a la letra: «Las con-« tribuciones indirectas son el verdadero mi-« lagro y también la recompensa de los con-« quistadores europeos; ellas funcionan casi « sin contacto entre el indígena y el adminis-« trador extranjero, su acción pasa desaper-« cibida, pues se ejercita de un modo insen-« sible sobre la pobreza y la imprevisión del « contribuyente, por medio de cobros ínfimos

« que no aprecia la desidia de los pueblos « conquistados ».

JULES HARMAND.—*Domination et Colonisation.*

La contribución indirecta en manos del colonizador extranjero, o entregada a la dirección de determinados círculos dentro de una nación soberana, tiene que producir idénticos resultados; en la colonia, el imperio del conquistador y en la nación soberana, la tiranía de los privilegiados. En ambos casos, el país resulta una colonia, con metrópoli externa en el primero y con una fortaleza interna en el segundo.

La contribución directa, por el contrario, franca en su acción y moderada en su cuota, porque es más fácil de percibir, interesa a toda la población en el manejo de los negocios públicos y a su sombra nacen los Estados prósperos que se están revelando con especiales caracteres de vitalidad en Australia y en el Canadá. Para Chile la elección no es dudosa: la soberanía efectiva de nuestro régimen democrático exige la contribución directa como sistema tributario que garantice el buen gobierno y asegure el máximo de progreso. El que paga el tributo vigilará su inversión; de aquí nace el buen gobierno; el que paga el tributo tratará de producir más, de aquí nace el progreso. Penetrados de la importancia de

esta idea fundamental, hemos venido estudiando este problema desde hace largo tiempo y tenemos la satisfacción de ver que la justicia se va apoderando de los corazones, que la verdad penetra en los cerebros y que el país desea ensayar este nuevo régimen que será el gran regulador de la Hacienda Pública y el vigoroso estimulante del progreso.

II

No iniciamos estas notas con el deseo de presentar una teoría, sino con el objeto más modesto de hacer breves apuntes sobre el valor de nuestras fuentes tributarias a fin de calcular los recursos que ellas pueden poner al servicio de la Nación para que ella las invierta en el mayor bien común; suspendemos, así, nuestra justificación doctrinaria, que nos llevaría muy lejos, y entramos de lleno a nuestro principal propósito.

1.º Fuerzas naturales.—Las riquezas que deben contribuír a los gastos públicos empiezan en los propios deslindes del territorio y son los numerosos caudales de agua que se precipitan desde nuestras montañas y que el hombre se apropia para regar sus campos y mover sus ingenios o simplemente para tener un título de dominio.

Los que han aprisionado las aguas en turbi-

nas y en canales de riego han creado una riqueza que está incrementando la producción: los que se han limitado a inscribir un título en un registro de propiedades están deteniendo el progreso y justo es que compensen el bien de que privan a la comunidad o que lo reintegren al patrimonio nacional. Estimamos, por lo tanto, que todas las caidas de agua y todas las concesiones para riego que no se aprovechan, deben satisfacer un tributo en proporción a su valor.

Hay concesiones en todos nuestros ríos que suman talvez 250,000 caballos de fuerza, lo que importa un valor no inferior a 50 millones de pesos y hay autorizaciones para extraer de nuestros ríos no menos de 20,000 regadores, riqueza no inferior a 20 millones. He ahí setenta millones que nada producen.

El cobro de una contribución de 3 por mil estimulará la ejecución de los trabajos correspondientes, los dueños de estas concesiones buscarán los capitales necesarios o llegarán a la armonía de sus derechos con las aspiraciones ajenas; numerosos casos podríamos citar de terrenos que no se riegan porque el dueño de una merced de agua, obtenida con 20 centavos de papel sellado, impone condiciones exhorbitantes al dueño del suelo sediento que sólo espera el canal para cuadruplicar o decuplicar su producción.

Apuntemos la cifra, 70 millones de riqueza

y anotemos la consecuencia del tributo: se estimulará el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas y el riego del territorio.

2.° PROPIEDAD MINERA.—Nuestros mayores fueron mineros; no hay casi familia chilena de gran situación, que no cuente entre los suyos un explorador del desierto; cuando niños oíamos que Chile es un país de minas, en la juventud se nos dijo que éramos manufactureros y, a fuerza de oirlo, olvidamos la primera lección hasta que han venido franceses y yankees a descubrir los yacimientos de cobre y de fierro y a desmontar los cerros que ya nos hicieron conocer nuestros antepasados y que hemos olvidado para dedicarnos a hacer zapatos, camisetas y ministerios.

Nuestra actividad ha llegado, en 1912, a producir hasta unos 65 millones de pesos de sustancias metálicas y hoy sentimos todos los dolores del arrepentimiento al ver que nuestros yacimientos de fierro darán una exportación de dos millones de toneladas, cuyo valor es de 10 millones de 10 peniques, y que los grandes establecimientos de cobre rendirán, en uno o dos años, 120,000 toneladas de metal rojo que valen 175 millones de pesos.

La valorización de esta riqueza es obra muy difícil; cualquiera cifra sería simplemente fantástica, debiendo para nuestro objeto limitarnos a sumar el valor de las exportaciones

que dejamos señaladas y que nos dan un total de 250 millones de pesos.

Si es difícil calcular la riqueza misma, no es tanto estimar las utilidades cuyo promedio no puede ser inferior a un 30% del valor bruto, previa deducción de los intereses del capital invertido.

En estas condiciones un impuesto de 3% sobre el valor de exportación, sería equivalente al 10% de las utilidades propias del yacimiento mineral, lo que no es excesivo. El derecho de exportación de 3% *ad-valorem* proporcionaría unos cinco millones anuales cuya inversión en ferrocarriles y puertos y en enseñanza técnica, sería de gran utilidad para la minería. He aquí la contribución directa estimulando el progreso.

Las minas que no se explotan, simples apropiaciones del bien común, tan perjudiciales como las caídas de agua que no se captan y como los regadores que no se canalizan, son una riqueza muy superior a la que se trabaja en la actualidad, y estimamos que debe imponerse una fuerte contribución sobre los pedimentos, una vez constituída la propiedad, a fin de impulsar la producción.

Tal mina, por ejemplo, se mantiene con simples fines especulativos pagando unos 5 pesos de contribución por hectárea; si en vez de esto la ley exigiera una patente, que doblara de año

en año, llegaría un momento en que el simple acaparador de la propiedad minera se vería obligado a trabajar, siquiera para pagar la patente, con lo cual se obtendría un doble beneficio: aumentar la renta nacional y contribuír al incremento de nuestras exportaciones. El problema que envuelve este régimen es delicado, pues, si bien estimula la producción, entorpece la exploración; sin embargo, cabe una solución conciliadora que contemple ambos intereses y que no fomente los reconocimientos desatentados ni paralice las fuentes de riqueza. Las patentes de minas sin trabajo rinden unos 250 mil pesos, suma que fácilmente podrá cuadruplicarse sin gran molestia y procurando el desarrollo efectivo de la minería.

El valor de las nuevas patentes compensa cualquier pequeño error de cálculo en nuestras apreciaciones sobre la exportación de sustancias metálicas.

Además de los yacimientos metálicos posee el país grandes riquezas en otras sustancias, entre las cuales la de mayor importancia es el bórax. La exportación de borato de cal en 1912 llegó a 44 mil toneladas con un valor de 10 millones de pesos moneda corriente. La contribución de 3% importaría un recargo de 7 a 8 pesos por tonelada, gravamen pequeño en vista de las condiciones de monopolio de esta industria y de sus pequeñísimos costos de

producción. Estimamos que el gravamen debe ser de una libra esterlina por tonelada, como ya se ha propuesto en el Congreso, lo que equivale a cobrar el 3% común a la exportación minera y un derecho adicional de $ 15 por cada 1,000 kilógramos.

Completan el cuadro de nuestra riqueza minera los mantos carboníferos del sur que están demostrando ser una gran riqueza y que producen cerca de un millón doscientas mil toneladas para la venta, con un valor de 45 millones de 10 peniques. El tributo de 3% produciría un millón trescientos cincuenta mil pesos.

Esta contribución, ligeramente superior a un peso por tonelada, estará compensada con creces por las economías que las empresas carboneras encontrarán en las construcciones de ferrocarriles y de puertos que se acometerán con los recursos que ellas mismas proporcionen.

En resumen, estimamos que el conjunto de contribución a la minería, en vista de los detalles anteriores, puede proporcionar los siguientes recursos:

Producción metálica, 3% sobre 250 millones...	$ 7.500,000
Producción de bórax, 3% sobre 10 millones.....	300,000
Impuesto adicional al bórax, $ 15 sobre 44 mil toneladas.....	660,000
Producción carbonífera.....	1.350,000
Patentes mineras, mayor rendimiento.....	500,000
Suma.....	$ 10.310,000

No tomamos en cuenta la riqueza salitrera cuyas contribuciones son nuestra base tributaria actual.

3.º PROPIEDAD AGRÍCOLA.—Hemos comparado las tasaciones municipales de la propiedad agrícola con sus valores efectivos en numerosas comunas y hemos llegado a determinar que entre ambos valores existe la relación de 1 a 3. En estas condiciones, siendo de poco más de dos mil millones la tasación municipal, llegamos a concluir que el valor real es de seis mil millones. Una verificación de esta cifra se imponía y hemos hecho el cálculo siguiente:

Terrenos de riego	
1.250,000 hectáreas a $ 1,600	2,000.000,000
Terrenos susceptibles de riego	
1.250,000 hectáreas a $ 400	500.000,000
Terrenos planos de rulo	
2.500,000 hectáreas a $ 200.....	500.000,000
Terrenos de pastoreo	
17 millones de hectáreas a $ 20.....	340.000,000
Valor del terreno agrícola	$ 3,340.000,000

El total de nuestros campos agropecuarios vale así tres mil trescientos cuarenta millones de 10 peniques. A esta suma debemos agregar las plantaciones que cubren cerca de 50,000 hectáreas de viñedos y no menos de 20,000 de árboles frutales, lo que importa un valor aproximado de 400 millones. La riqueza forestal, tanto de cultivo como natural, puede estimarse en una suma análoga, lo que nos daría 800 millones que agregar a la suma anterior para formar el total de 4,200 millones, en cifras redondas.

Falta aún por considerar los edificios, que estimamos en poco más del 5% del cálculo anterior, llegando al total de 4,500 millones de pesos de 10 peniques.

Las existencias completan finalmente el cuadro de la riqueza agrícola del país. Según la estadística de 1912, la dotación de ganados, enseres, maquinarias y herramientas llega a 800 millones de 10 peniques, a lo cual debe agregarse el capital invertido en aserraderos y en otras industrias inherentes al suelo, lo que nos autoriza para estimar las existencias en 1,000 millones, formando con la suma anterior el total de 5,500 millones.

Si aún consideramos las existencias de otro orden, como semillas, producciones en existencia y otras, llegaremos al total de 6 mil millones que nos daba nuestro cálculo previo.

Consideramos así aceptable la valorización que acabamos de hacer.

4.º PROPIEDAD URBANA.—En la misma fuente que nos ha servido para la estimación de la propiedad agrícola, encontramos los predios urbanos tasados en mil setecientos millones de diez peniques, cifra que no vacilamos en elevar al doble, ya que la sola valorización de Santiago hecha por un ingeniero municipal, sobre la base del precio de las transacciones, llega a mil quinientos millones. Nuestra valorización para la propiedad urbana es de 3,400 millones, cifra que elevamos hasta 4 mil millones, incluyendo las existencias.

5.º PROPIEDAD INDUSTRIAL.—El capital de las industrias nacionales, o así llamadas, previa deducción de sus inversiones en propiedades, llega a 360 millones de pesos. La riqueza efectiva debe contemplar este valor fijo y además el promedio de sus existencias que se acerca a 150 millones de pesos. Calcularemos así en 500 millones la riqueza que representan las fábricas nacionales.

En esta categoría de la propiedad industrial corresponde ubicar a las grandes empresas de transporte y de movilización de mercaderías desde los ferrocarriles que bajan de las cordilleras hasta las naves que hacen el comercio de nuestras costas. Trataremos de hacer una valorización aproximada.

Los ferrocarriles particulares poseen cerca de 2,500 kilómetros de vía cuyo valor no es inferior a 200 millones de pesos de 10 peniques y sirven sus líneas con un material motor y para transporte de pasajeros y carga, cuyo avalúo llega a 10 millones. Las maestranzas y los edificios de diferente orden pueden estimarse en 10 millones, formándose la tasación general de 250 millones.

La carga se moviliza en nuestros puertos por muelles y malecones que, en su gran mayoría, pertenecen a particulares y cuyo valor total no es inferior a 50 millones, incluyendo los edificios y el material.

Finalmente, los productos transportados por los ferrocarriles y movilizados en las instalaciones del litoral son embarcados en las numerosas naves, particularmente extranjeras, que nos visitan. De estos barcos hay muchos de carrera fija y pueden considerarse como destinados exclusivamente a la explotación de nuestras costas. La capacidad media es de 3,000 toneladas y el valor aproximado de cada buque corresponde a dos millones de pesos. Si estimamos en 500 el número de las naves que hacen el servicio, tendremos un capital de 1,200 millones.

Así, el conjunto de capital invertido en la industria de transportes llega a 1,500 millones de pesos de 10 peniques.

El capital industrial, totalizando los elementos recién analizados y las fábricas, daría 2 mil millones de pesos, sobre los cuales la contribución de 3 por mil podría producir seis millones anuales.

Para que se juzgue de la importancia del gravamen apuntaremos la cifra siguiente: la navegación sobre su avalúo en mil doscientos millones debería pagar dos millones cuatrocientos mil pesos, o sea unos 16 centavos de 10 peniques por tonelada del movimiento marítimo, suma insignificante si se compara con las contribuciones en otros países. Por otra parte, este impuesto estará ampliamente compensado con las ventajas de todo género que obtendrán las compañías de navegación, gracias a las obras marítimas que se construirán con estos recursos.

Estas conclusiones hacen resaltar las ventajas generales del tributo directo: extraído a los fabricantes, a los dueños de ferrocarriles y de buques se invertirá en beneficio general, pues estos hombres con influencias positivas estarán siempre reclamando y con eficacia, la inversión de su dinero en obras de mejoramiento. Ellos ganarán por el simple hecho del progreso obtenido mediante esta especie de cooperación centralizada y ganarán también los consumidores por la reducción en los precios de los artículos, que es la consecuencia lógica de las facilidades de movilización.

6.º PROPIEDAD COMERCIAL.—Largo sería entrar en el detalle de este avalúo, por cuyo motivo nos limitamos a la indicación de los valores disponibles, como las existencias comerciales, los depósitos en los bancos y los títulos de acciones y bonos que son objeto de transacciones en las bolsas de comercio.

Las existencias comerciales que debemos avaluar aquí son simplemente las de procedencia extranjera ya que las nacionales han sido estimadas al analizar la propiedad minera, agrícola e industrial. El valor de estas mercaderías, sobre la base de una existencia igual a la cuarta parte de la importación anual, corresponde a unos doscientos millones de pesos de 10 peniques.

Los depósitos en los bancos, los bonos y acciones que se cotizan en los centros comerciales, según un detalle que estaría aquí fuera de lugar, suman mas de 1,300 millones de 10 peniques.

Estimamos, así, que el conjunto de valores que acabamos de indicar o sea 1.500 millones, representa lo que podríamos llamar la propiedad comercial sobre la cual el tributo directo tendrá los mismos buenos resultados que sobre las demás riquezas; habrá mayor cuidado en el manejo general de los negocios y más disciplina en el crédito, circunstancias que influirán en el mejor rendimiento de las inversiones capitalistas.

III

Los datos anteriores nos dan:

1.—Fuerzas naturales, estimadas en.....	$	70.000,000
2.—Propiedad agrícola, estimada en.....		6 000.000,000
3.—Propiedad urbana, estimada en.....		4.000.000,000
4.—Propiedad industrial, estimada en...		2.000.000,000
5.—Propiedad comercial, estimada en....		1.500 000,000
Suma.....	$	13.570,000,000

6.—Producción minera:

Minas metálicas.....	$	250.000,000
Borateras y otras substancias		10.000,000
Combustibles.....		45.000,000
Suma.....	$	305.000,000

Tal es la riqueza que puede soportar la contribución directa: Con las tasas que hemos propuesto, los rendimientos serían:

Tres por mil sobre las propiedades.....	$	40 710,000
Tres por ciento sobre la producción minera.....		9.150,000
Impuesto adicional al borax, 15 pesos por tonelada, sobre 44 mil toneladas.....		660,000
Patente de minas.....		500,000
Total de la contribución directa	$	51.020,000

La fortuna privada puede y debe contribuír con esa suma superior a 50 millones al mantenimiento de los servicios públicos y al desarrollo de un plan de progreso que redundará en su propio beneficio.

Nuestro propósito era simplemente hacer este apunte de tasación y por eso terminamos estas notas, entregando a la discusión pública estos antecedentes, para que cada cual aprecie las cargas que tendrá que soportar y las ventajas que le procurará el nuevo sistema que interesa vivamente al ciudadano en los negocios públicos y que lo estimula al trabajo. El ausentismo político que deja a los gobiernos entregados al poder de los audaces, y el ausentismo agrícola e industrial, que deja las fuentes de producción confiadas a manos poco expertas, desaparece con un sistema que crea un lazo estrecho entre el hombre y la nación, entre él y la tierra que trabaja, la mina que laborea y el capital que invierte.

Al apuntar estos datos y al pedir que la contribución directa sea la base de nuestro sistema rentístico, procedemos obedeciendo a un mandato imperioso de la conciencia y a un anhelo de engrandecimiento nacional, circunstancias que nos alientan para una empresa en que, ciertamente, hemos de recoger muchas antipatías, que perdonamos de antemano, pues tenemos la certidumbre que, en poco tiempo, esas

antipatías se trocarán en reconocimiento por haber iniciado una obra buena.

La contribución directa, justa en su cobro y bien distribuída en sus inversiones, es el supremo factor de equilibrio, que mantiene a los pueblos en el progreso.

La deseamos vivamente como el mayor beneficio para nuestra patria.

Francisco Rivas Vicuña.

Mi Ruca, a 5 de Abril de 1914.

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN.—El porvenir económico..... V

LA LEY MONETARIA Y EL PAÍS

I. La condición de confianza..... 3
II. Los tipos de cambio..... 11
III. Condición primordial..... 16
IV. El sistema rentístico..... 23
V. El riego del territorio..... 31
VI. El programa de Obras públicas..... 37
VII. La organización de los Bancos..... 42
VIII. Tratados comerciales..... 46
IX. Nuestro programa..... 51

LA LEY MONETARIA Y EL ESTADO

I. Los empréstitos externos..... 59
II. Los presupuestos..... 65
III. Formación de los presupuestos..... 72
IV. La oportunidad de los presupuestos..... 77
V. El Gobierno..... 82
VI. Nuestro programa de Hacienda Pública..... 86

Pág.

Los Ferrocarriles del Estado

I. Autonomía y Capitalización 93
II. La trocha uniforme 99
III. El equipo 104
IV. Arsenales 110
V. El retiro de los empleados 116
VI. Nuestro programa 121

El Programa de Obras Públicas

I. Su necesidad 129
II. Su desarrollo 134
III. Los ingenieros 138
IV. La organización administrativa 142
V. La permanencia del personal 146

El Régimen Tributario

Discurso pronunciado en la Gran Convención Conservadora de Septiembre de 1913 155

El Income Tax

Sus características.—Su aplicación en Chile.—Origen del tributo 197
Clasificación de las rentas 198
Coeficiente del tributo 198
Rentas ganadas 199
Rentas no ganadas 199
Características del impuesto 200

Pág.

Modo de percepción..... 200
Coeficiente que afecta al capital..... 201
Aplicación a Chile del Income Tax. 203
Clasificación del sistema chileno..... 204
Percepción del tributo en Chile..... 207
Rendimiento del impuesto en Chile 208

LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO

Concentración comunal 211

LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA

Tasación de la riqueza 220

Pág.

Modo de percepción 200
Coeficiente que afecta al capital 201
Aplicación a Chile del Income Tax 203
Clasificación del sistema chileno 204
Percepción del tributo en Chile 207
Rendimiento del impuesto en Chile 208

Las Finanzas del Municipio

Concentración comunal 211

La Contribución Directa

Tasación de la riqueza 220